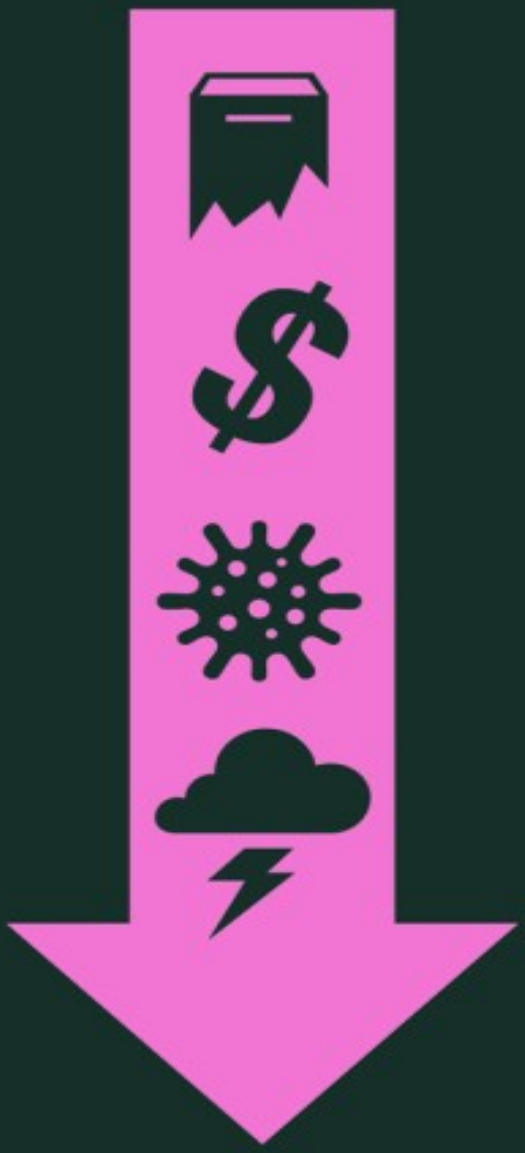
MARISTELLA SVAMPA

POLICRISIS

Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas
y la expansión de las derechas autoritarias



siglo veintiuno
editores

Índice

Cubierta

Índice

Portada

Copyright

Introducción

1. Perspectivas y alcances del colapso

- La era del colapso ya llegó
- Complejidad y miradas históricas del colapso
- La era del colapso climático localizado
- El colapso a gran escala en Río Grande del Sur
- Colapso energético y apagones

2. La clave geopolítica. Las patas cortas de la descarbonización

- Matriz energética y metabolismo social
- Pactos Verdes, guerras y esquizofrenia pospandémica
- Nueva diplomacia de los metales y consenso de la descarbonización

¿Y por China cómo andamos?

La otra pata de la descarbonización

3. Entre el colapso del progresismo y los límites del neodesarrollismo

Las promesas de los progresismos

De la polarización a los puntos ciegos

Neodesarrollismo y consenso extractivo exportador

Mandato exportador e ilusión neodesarrollista

La discusión que no fue

4. La expansión de las derechas radicales autoritarias

Las derechas radicales autoritarias

Estrategias de acumulación política y polarización asimétrica

Los dos momentos del negacionismo climático y el tiempo de las políticas antiambientales

Entre el discurso dilatorio y el ecofascismo

5. El experimento Milei

Lo común y lo específico de un experimento radical

Cambio de régimen

Neoliberalismo "desde abajo"

Batalla cultural y polarización asimétrica

Negacionismo climático, RIGI y expansión del extractivismo

6. Narrativas relacionales y prácticas alternativas para un mundo en crisis

Narrativas, giro ontológico y régimen de afectividad

Protagonismo femenino y éticas del cuidado

Nuevos oficios para la supervivencia

La alternativa comunitaria para la transición energética

Conclusión. Reflexiones finales sobre la policrisis

Agradecimientos

Bibliografía

MARISTELLA SVAMPA

POLICRISIS

Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas
y la expansión de las derechas autoritarias

siglo veintiuno editores

Svampa, Maristella
Policrisis / Maristella Svampa.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB.- (Singular)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-801-492-0

1. Movimiento Político. 2. Izquierda Política. 3. Derecha Política. I. Título.

CDD 324

© 2025, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

<www.sigloxxieditores.com.ar>

Diseño de portada: Emmanuel Prado / <manuprado.com>

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: agosto de 2025

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-492-0

A la memoria de Carlos Janin

Introducción

> Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza.
> **Hannah Arendt, *Los orígenes del totalitarismo*, 1974**
>
> La esperanza es una disciplina. Un elemento esencial de nuestras luchas debe consistir en fraguar la esperanza.
> **Angela Davis, 2024**

1

Se me hace difícil olvidar un encuentro fortuito que viví en abril de 2023 estando en Nueva York; un día lluvioso en el que tenía un compromiso en la sede del consulado argentino. Nunca había estado allí, y para peor llegaba tarde. Apenas traspuse el umbral, subí rápido las escaleras, cuando de pronto me choqué con alguien; un hombre de aspecto poco llamativo, que iba bajando solo, de modo cansino, y cuya figura no reconocí de inmediato. Segundos después me percaté de que la persona con quien me había topado era Alberto Fernández, entonces presidente de la Argentina. En algún lugar había leído que estaba en Nueva York desde hacía un par de días. Luego me enteraría de que, poco antes de mi ingreso intempestivo, el presidente Fernández había tenido una reunión, organizada a último momento, con investigadores y universitarios connacionales residentes en esa ciudad. Sin embargo, lo que más llamó mi atención no fue que estuviera en Nueva York, casi sin agenda pública, sino también que bajara esas largas escaleras

completamente solo. Días después me crucé con alguien que dijo ser el único periodista argentino acreditado, y me contó que los principales medios nacionales con corresponsales en Washington habían decidido restar importancia a la presencia de Fernández y no habían enviado a nadie a cubrir la gira. No por casualidad había percibido en ese lento descenso por las escaleras algo de triste, solitario y final, un tufillo de fin de ciclo. Alguien me contó también que unos veinte años atrás, ese mismo lugar había sido el punto de encuentro entre una multitud entusiasta y el entonces presidente Néstor Kirchner, en el marco de un consulado totalmente desbordado.

En términos latinoamericanos, el punto de inflexión político fue enero de 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, el país más grande de América Latina. Hasta entonces se consideraba que la región, pese a las crecientes deficiencias de los progresismos, a sus liderazgos verticalistas, a las dinámicas políticas y económicas regresivas que ya se advertían, todavía estaba lejos de los procesos de radicalización que atravesaban Europa y los Estados Unidos, con sus consecuencias en términos de políticas antiderechos, de xenofobia, de negacionismos climáticos y "antiglobalismo". Sin embargo, el arribo de Bolsonaro al Planalto no ocurrió de un día para el otro, sino luego de un período convulso que desembocó primero en la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff, durante su segundo mandato (2011-2016), y poco después en el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula Da Silva (2018). Luego de esta debacle que socavó el sistema político brasileño, el final del ciclo progresista, tal como lo habíamos conocido, era un hecho. El fracaso del referéndum reeleccionista de Evo Morales en febrero de 2016, poco antes la victoria de Mauricio Macri en la Argentina a fines de 2015 y la derrota electoral del chavismo en las legislativas venezolanas, que reforzaría la deriva del gobierno, suman otros elementos en el plano regional.

Desde Brasil, con la asunción de Bolsonaro, nos llegaban señales desesperadas de amigos y colegas que denunciaban y se defendían como podían de las políticas autoritarias del gobierno, advirtiéndonos también acerca de los cambios que se estaban

produciendo en la sociedad. Pero en la Argentina de 2020-2021, el riesgo de un crecimiento acelerado de las derechas parecía haber quedado atrás, dado que esta perdió las elecciones generales y quedó una vez más relegada a la oposición. O quizá, en realidad, muchos buscamos creer eso y empezamos a desoír las alarmas, pese a que en 2019 habíamos sentido la necesidad de mirarnos por primera vez en el espejo de lo que sucedía en Brasil para indagar durante un breve instante en nuestra propia perplejidad. Las alarmas no volvieron a activarse ni siquiera cuando un grupito de marginales radicalizados atentó contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, el 1º de septiembre de 2022, y milagrosamente falló en el intento.

Por supuesto, no todos desoyeron las alarmas. Varios textos pioneros así lo atestiguan, entre ellos el del argentino Pablo Stefanoni, quien analizó el fenómeno de las nuevas derechas radicales sin "lagañas tradicionales", como diría Milcíades Peña. En *¿La rebeldía se volvió de derecha?*, Stefanoni cierra la introducción con el sugerente subtítulo "Sin garantías". Allí afirma: "Tengamos o no en la Argentina una fuerza política de extrema derecha, no estamos ajenos a muchos de los climas de época retratados en las siguientes páginas, básicamente porque nadie lo está" (2021: 27).

Ciertamente, ni la historia reciente ni el "Nunca Más" –expresión que condensa la revaloración del sistema democrático y el rechazo a la violencia estatal en los primeros años ochenta– nos sirvieron de garantía. Como argentinos, pensamos, probablemente desde una posición de superioridad moral, que los consensos logrados a lo largo de cuarenta años eran más generalizados, que las narrativas de derechos tenían raíces más tentaculares o configuraciones menos conflictivas.

Lo cierto es que ya en ese entonces comenzaban a verse los primeros gérmenes de una derecha radical movilizada en la calle, que apuntaba contra el movimiento social más potente surgido en los últimos treinta años: la marea verde feminista, que en aquel momento luchaba por obtener la legalización del aborto. En ese contexto de emergencia de nuevas derechas, lo que veíamos en la Argentina podía pensarse como el síntoma de algo más profundo, ya presente en Brasil, en sintonía con lo que ocurría a escala global,

con la (primera) victoria electoral de Donald Trump en 2016 como una de las expresiones más significativas de los nuevos tiempos.

Frente a este escenario, en 2020 escribí un artículo extenso sobre las derechas radicales autoritarias buscando comprender el fenómeno en clave latinoamericana. Entendía que lo novedoso en América Latina no era tanto la disputa progresismo-antiprogresismo –que venía de lejos–, sino la fragilidad del contexto político emergente ante la crisis económica y el deslizamiento hacia un cambio de época. Las placas tectónicas se movían rápidamente, pero no sabíamos en qué dirección. Todo parecía indicar un *backlash*, una reacción creciente en contra de la narrativa de derechos disparada por la marea feminista, un retorno de lo reprimido que engarzaba tanto con las nuevas derechas tradicionalistas como con los fundamentalismos religiosos.

El mismo año en el que Bolsonaro asumía en Brasil, un progresismo ya deshilachado obtenía su corta y previsible revancha en la Argentina luego del desastroso gobierno de la derecha neoliberal (2015-2019) comandada por Mauricio Macri, quien nos dejó como legado un importante aumento de la pobreza y la inflación, sumado a una alarmante deuda externa contraída con el FMI. Sin sorpresa alguna, las elecciones presidenciales de fines de 2019 le dieron el triunfo a Alberto Fernández, en el marco de una coalición de centroizquierda que se autoproclamaba "peronista-progresista", un frente liderado de modo verticalista por Cristina Fernández de Kirchner. El caso es que la victoria del progresismo, con un candidato de centro, más conocido por su capacidad de negociación que por su audacia política, parecía dejar atrás el fantasma del avance de las derechas. Al fin de cuentas, aunque el frente progresista estuviera debilitado, su retorno era la confirmación de ciertos consensos sociales que ni siquiera la derecha neoliberal se había atrevido a cuestionar en los cuatro años anteriores. Casi por inercia creímos que nos deslizábamos hacia el retorno de lo mismo, una vez más llegaría la hora de la derecha neoliberal, seguramente recargada, a la que habría que combatir y poner límites, como ya lo habíamos hecho entre 2015 y 2019. Al mismo tiempo, no éramos pocos los que sosteníamos también que el problema mayor no era

solamente la derecha, sino el hecho de que, ya en 2019, los progresismos estaban vaciados y sin proyecto alternativo de futuro.

A fines de 2019 llegó la pandemia de covid-19 e ingresamos a tiempos extraordinarios. Encerrados en nuestras casas y enfrentados a un escenario de colapso sanitario y económico, los nuevos debates se abrieron a una reflexión de más largo plazo sobre el incremento de las desigualdades, el rol del Estado y la necesidad de plantear horizontes de transición ecosocial justa. Con Enrique Viale, colega y compañero de tantas batallas, lanzamos la propuesta de un pacto ecosocial y económico, primero en la Argentina, luego con otros referentes y activistas de la región –el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur– a escala latinoamericana.[1] Desde nuestra perspectiva, ante la coyuntura extraordinaria, resultaba urgente aprovechar las ventanas de oportunidad y activar procesos colectivos de liberación cognitiva para exigir transformaciones estructurales en pos de la justicia social y ambiental. Eso no implicaba desestimar las poderosas fuerzas políticas y económicas que impulsaban hacia la defensa del orden conocido y pujaban por un "retorno a la normalidad", pero era claro que si la pospandemia retomaba esa dirección, todo ello supondría un reforzamiento del capitalismo del caos, más destrucción de la naturaleza, más colapso climático; en definitiva, menos democracia y más desigualdad.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández apenas podía calificarse de progresismo débil. A menos de un año de su asunción, había pocas expectativas políticas y económicas, mucho menos frente a la socavada autoridad presidencial. En agosto de 2021, todavía en confinamiento, estalló el escándalo que más nos enfureció como sociedad, cuando se dieron a conocer las fotos de la fiesta privada del entonces presidente y su pareja, a lo que siguió poco después la noticia del "vacunatorio vip", que, salteando los protocoles estrictos de la campaña, había favorecido a allegados al gobierno. En medio de todo, había movilizaciones contra la llamada "cuarentena eterna" que mezclaban personajes variopintos de la oposición, con una derecha bizarra y en ese entonces marginal, y militantes antivacunas. Nada que no sucediera en otros países del mundo…

En la pospandemia, ya sumido el país en una gran crisis económica, la figura de Alberto Fernández era apenas la sombra de una sombra, un holograma anodino que fue sustituido de hecho a fines de 2022 por el omnipresente y escurridizo ministro de Economía y luego candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, un político de mil caras, experto en manejo del Estado y en alianzas *non sanctas*. En 2023 ya estábamos inmersos en una crisis múltiple y todos los índices empeoraban, pero aun así no se habían encendido todas las alarmas.

2

Como toda crisis extraordinaria, la que produjo el covid-19 dio lugar a reclamos ambivalentes y contradictorios entre sí. La desnaturalización de aquello que teníamos normalizado suscitó demandas de solidaridad y cambio; pero, por otro lado, también conllevó demandas de orden y retorno al *statu quo*, a la llamada "normalidad".

Por un lado, la desnaturalización de la crisis abrió una ventana de oportunidad, que se expresó en múltiples propuestas de transformaciones estructurales, que apuntaban a la reducción de las desigualdades y a un horizonte de transición ecosocial. Así, tras varias décadas de neoliberalismo, la pandemia puso al desnudo el incremento de las desigualdades sociales, económicas, étnicas y regionales, y los altos niveles de concentración de la riqueza, que se profundizaron luego de la crisis financiera de 2008. Asimismo, la crisis sanitaria y económica evidenció el retroceso de los servicios básicos de salud y educación (la brecha digital), el cada vez más difícil acceso a la vivienda y la degradación del hábitat. Por otro lado, la pandemia visibilizó el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de maldesarrollo y salud humana. Detrás del covid-19 y el proceso de zoonosis, está la deforestación, esto es, la destrucción de ecosistemas que expulsan a animales silvestres de sus entornos

naturales y de este modo liberan virus zoonóticos –algunos aislados durante milenios–, poniéndolos en contacto con otros animales y humanos que habitan entornos más urbanos, lo cual favorece el salto interespecie. En esta línea, la pandemia mostró hasta qué punto hablar de Antropoceno o Capitaloceno no es solo una cuestión de cambio climático, sino también de globalización y modelos de maldesarrollo. Resaltan así otros aspectos de la emergencia climática, no vinculados exclusivamente al incremento en el uso de combustibles fósiles, sino también a los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la expansión de la ganadería intensiva, tres fuentes potenciales de pandemias.

En esa línea, la crisis extraordinaria desencadenó un proceso de liberación cognitiva. Se actualizaron propuestas de transición ecosocial elaboradas en años precedentes y aquello que parecía reservado a unos pocos especialistas y activistas radicales ingresó en la agenda pública internacional. Científicos e intelectuales de todo el mundo promovieron manifiestos y propuestas que incluían desde una agenda verde, un ingreso universal ciudadano y reformas tributarias para reducir la desigualdad, hasta la condonación de la deuda de los países del Sur. Circularon propuestas muy diferentes de transición globales, regionales y nacionales, desde el Norte al Sur Global, como el Green New Deal, el Pacto Verde Europeo, programas de decrecimiento, entre otros. De hecho, durante 2020, no pocos celebraron que la paralización de diferentes actividades económicas a nivel global se hubiera traducido en una reducción del 7% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y vimos postales difíciles de olvidar, como la de aquellos animales que salieron de su hábitat y se atrevieron a recorrer ciudades en apariencia vacías. Sin embargo, el fenómeno fue pasajero; un efecto colateral de corto alcance.

Por otro lado, la demanda de normalidad y de retorno al *statu quo* anterior también dejaba traslucir el peligro de una clausura cognitiva, encarnada en el regreso de políticas neoliberales, el repliegue individualista y el afianzamiento de las desigualdades. Como recordaba la periodista canadiense Naomi Klein, la crisis podía ser una "nueva" oportunidad para repetir la fórmula del capitalismo del desastre o la "doctrina del shock", esto es:

> La estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder (cit. en *Democracy Now*, 2019).

Lejos de las buenas intenciones, la crisis desatada por la pandemia no solo no conllevó una mayor igualdad, sino que, por el contrario, exacerbó la desigualdad en todos los niveles. El virus mostró hasta qué punto este es un "mundo de dueños", pues como sostiene la antropóloga Rita Segato, la palabra "desigualdad" no alcanza para graficar tamaña obscenidad. "Este es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío" (cit. en UIMP, 2019). A nivel latinoamericano, según un informe de Development Finance International (DFI) y Oxfam de 2020, las élites económicas y los superricos ampliaron su patrimonio en 48.200 millones de dólares, un 17% más que antes del covid-19, mientras que la recesión económica provocó que al menos 52 millones de personas cayeran en la pobreza y más de 40 millones perdieran sus empleos, impulsando un retroceso de quince años para la región (DFI y Oxfam, 2020). Asimismo, el freno de emergencia que se activó fue relativo. Por ejemplo, el extractivismo no se detuvo; todo lo contrario. Numerosas actividades extractivas fueron declaradas esenciales (como la minería) y avanzaron con el desmonte y la deforestación, y con ello también los megaincendios. En Brasil, el lobby del fuego, bajo el gobierno ultraderechista de Bolsonaro, desató su furia como nunca antes. En 2020, se quemaron 4,5 millones de hectáreas y murieron 17 millones de animales en Pantanal, el humedal continental más grande del planeta, que abarca buena parte de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Durante la pandemia, continuaron los asesinatos perpetrados contra activistas ambientales, reafirmando que América Latina –en particular, países como Colombia, Brasil y México– sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para los defensores del ambiente.

Vale recordar que no hubo respuestas globales ante la emergencia de la pandemia, sino una mayor fragmentación y una escasa cooperación a nivel internacional, algo que afectó incluso a la Unión Europea y acentuó –al decir de muchos– la pérdida de confianza en la integración. Hacia adentro, casi todos los países sufrieron procesos de militarización, que repercutieron muy especialmente sobre las poblaciones más vulnerables, en particular en América Latina (donde los controles no son tanto de orden digital como físico-territorial). Este proceso se agravó en algunos países superpoblados (como la India) e incluso en los Estados Unidos, donde se expresó, puertas adentro, en el racismo, que cobró centralidad como estructura de dominación de largo alcance.

En ese contexto de desglobalización parcial, se habló mucho del regreso de un Estado interventor y se subrayaron tempranamente sus ambivalencias (el Estado de excepción que coexiste con el Estado social). Ciertamente, la pandemia habilitó la intervención estatal, promovida incluso por sectores liberales y conservadores, pero este proceso estuvo asociado al repliegue en las agendas nacionales, en el que cada país hizo su juego, mostrando no solo los límites en la capacidad de los Estados (no es lo mismo vivir en Europa que en América Latina), sino la variabilidad de las estrategias sanitarias y políticas disponibles según se tratara de gobiernos progresistas, conservadores o ultraderechas negacionistas. Asimismo, el repliegue ilustró una conjunción paradójica, capaz de combinar el decisionismo hipertecnologizado (la concentración de las decisiones en el poder ejecutivo y la ampliación del control sobre los ciudadanos de la mano de tecnologías digitales) con un fuerte proceso de fragmentación local (cierre de ciudades, provincias y Estados, siguiendo el modelo de las aldeas medievales europeas afectadas por la peste).

La pandemia acentuó la competencia nacionalista en el marco del desorden global. Un reflejo fue la carrera por lograr una vacuna eficaz, pero también la gestión salvaje por agenciarse esas mismas vacunas, cuando las potencias del Norte buscaron asegurarse el aprovisionamiento comprándolas por adelantado. Uno de los ejemplos más escandalosos fue el de Canadá, donde el entonces

primer ministro progresista Justin Trudeau firmó contratos con siete farmacéuticas para obtener 414 millones de dosis –5 veces más de las que necesitaba su país–, mientras que en diferentes países del Sur (sobre todo en América Latina, cuyas tasas de mortalidad fueron las más altas a nivel global) los gobiernos se desesperaban por conseguir alguna.

La pandemia también visibilizó la importancia de los cuidados en sus múltiples dimensiones. Así, en tiempos del covid-19, en Latinoamérica asistimos a una explosión de talleres y conversatorios a cargo de lideresas, activistas y organizaciones de diferentes corrientes feministas, territoriales, comunitarias y socioambientales sobre la relación con los cuerpos y los territorios, las prácticas de cuidado, las semillas y la agroecología, la soberanía alimentaria y las tareas de la autogestión comunitaria. Todo esto puso en evidencia la insostenibilidad de la actual organización del cuidado, que recae sobre las mujeres, en especial sobre las mujeres pobres. En América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia,

> las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, situación agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria (ONU Mujeres y Cepal, 2020).

A cinco años del inicio de la pandemia, un balance provisorio nos deja un gusto amargo y una fuerte sensación de fracaso. Las apuestas a la transición ecosocial se multiplicaron, pero en cuanto se reabrieron las puertas de la actividad económica todo volvió a la normalidad del *bussines as usual*, solo que ahora en un escenario internacional mucho más complejo e inestable. Así, lo que la pandemia nos dejó es un pasaje de la crisis extraordinaria a la policrisis sistémica.

3

Hace ya varios años, cuando avanzaba en una investigación sobre los sentidos de la transición ecosocial, me encontré con una serie de conferencias y, a partir de ello, con un libro excepcional, *The Great Transition. Climate, Disease and Society in the 13th and 14th Centuries* [*La gran transición. Clima, enfermedad y sociedad en los siglos XIII y XIV*], del historiador británico Bruce Campbell, de la Universidad de Queen de Belfast.[2]

¿Qué tienen de notable estas conferencias de 2013 y el libro publicado en 2016, que habla sobre hechos ocurridos en la Edad Media, aparentemente tan lejanos de nuestro presente? Pues que ofrecen un relato del colapso vivido durante la Pequeña Edad de Hielo o Pequeña Glaciación que se extendió a partir del siglo XIII y tuvo su punto de inflexión en el siglo XIV y afectó sobre todo a Europa y Asia. Después de varios siglos de estabilidad climática, a mediados del siglo XIII, Europa vivió un descenso de temperaturas seguido por varias transformaciones sistémicas. Campbell reconstruye las variaciones climáticas de la época, ligadas a la erupción de diversos volcanes, y las pone en relación con la baja de la actividad económica. El cambio climático afectó las cosechas y devastó la agricultura, pero también actuó sobre los microbios y originó epidemias entre los animales, en particular la gran peste bovina de comienzos del siglo XIV, que acabó con la mayor parte del ganado europeo. En medio de la crisis económica sobrevino el hambre, mientras que magníficas catedrales italianas vieron interrumpida su construcción. Hacia 1340, todo empeoró con la guerra, un clima todavía más adverso y la propagación de la peste negra. Campbell nos cuenta que el bacilo de Yersin, la bacteria que dio origen a la pandemia, era endémico en Asia, justamente en una época con gran circulación entre Europa, Asia Menor y China (una globalización comercial parcial a la que se suman los desplazamientos humanos causados por las guerras). El cambio climático alteró el ecosistema de Asia Central con masas de aire cada vez más húmedas desde principios del siglo XIV y un pico a

partir de 1340: esto hizo que se extendiera el hábitat de los roedores y, en consecuencia, se densificara su población. El bacilo de Yersin se multiplicó y la enfermedad pasó de endémica a epizoótica (pandemia) a través de las ratas que vivían en contacto con los humanos. El intercambio comercial y la guerra la llevaron a Europa, cuyos habitantes tenían menos defensas que los asiáticos. La sociedad europea medieval quedó presa de una "tormenta perfecta", afirma Campbell: cambio climático, enfermedad, microbios, humanos, ecología y sociedad. Hasta hoy no se sabe cuántas personas murieron durante la peste negra, aunque las estimaciones calculan que fueron entre 50 y 75 millones, es decir, entre el 30 y el 60% de la población europea de entonces. El libro es notable por varias razones. Primero, porque el autor desarrolla la correlación entre tres transiciones: de la anomalía climática medieval a la Pequeña Edad de Hielo (siglo XIV); de un ambiente sano a un ambiente de enfermedad (pandemia); y de la revolución comercial a la depresión, período que se extiende entre 1200 y 1500. La expansión comercial y demográfica fue seguida por una contracción de la población europea, al compás de tres transiciones que van marcando el ritmo de crecimiento, caída suave, colapso, depresión y recuperación.

> Por lo tanto, para comprender y explicar la historia del mundo medieval tardío es necesario apreciar estas interacciones entre el clima, las enfermedades y la sociedad: tanto la naturaleza como la sociedad deben reconocerse como protagonistas del cambio histórico (Campbell, 2016: 21. La traducción me pertenece)

Segundo, porque utiliza herramientas de diversas disciplinas y recurre a una gran cantidad de nuevas pruebas históricas, paleoclimáticas y biológicas –que incluyen estimaciones de la renta nacional, reconstrucciones de climas pasados y análisis genéticos del ADN extraído de los dientes de las víctimas de la peste– para ofrecer un nuevo relato del colapso y la reorganización de la economía

comercial de la Europa occidental de finales de la Edad Media. En otras palabras, Campbell representa una nueva escuela historiográfica, en términos metodológicos y epistemológicos, que apela a materiales interdisciplinarios de la mano de un análisis multifactorial. La incorporación de la dimensión ecológica no es retórica ni parcial; toca el corazón del argumento, pues no separa lo social de lo ecológico.

Tercero, porque el colapso integral que una parte de la humanidad atravesó durante la Edad Media sirve para reflexionar acerca de la policrisis civilizatoria que nos toca atravesar. Ciertamente, el colapso del que nos habla Campbell no fue el producto de una sola causa, sino el entrelazamiento de diversos factores críticos, una secuencia encadenada o recursiva de crisis (climáticas, sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas) que se yuxtapusieron y reforzaron mutuamente.

Lo que en la actualidad llamamos policrisis civilizatoria también refiere una crisis múltiple que enlaza calentamiento global con desigualdades sociales, crisis de los cuidados y desplazamiento masivo de poblaciones, crisis energética, conflictos bélicos y peligro nuclear, amenaza de nuevas pandemias, riesgos que entraña el desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial (IA), expansión de las fuerzas ultraderechistas y erosión de las democracias. Hoy igual que ayer, la policrisis civilizatoria no es una suma de factores, sino un contexto que entrecruza dinámicas complejas de interacción, encabalgamiento y potenciación de crisis diversas,[3] lo que configura un escenario de mayor incertidumbre y vuelve a ponernos al borde de la "tormenta perfecta".

Sin embargo, las similitudes o paralelismos históricos llegan hasta ahí, ya que, a diferencia de los siglos XIII y XIV, la crisis climática que arranca en el siglo XX y se acelera en este cada vez más oscuro siglo XXI no tiene que ver con erupciones volcánicas ni con supuestas variaciones de la órbita terrestre. Nuestra crisis climática es de origen antrópico, tiene sus causas en la actividad humana: esto es, en la dinámica económica del capitalismo y su voracidad infinita de consumo y acumulación. La responsabilidad recae en el capitalismo neoliberal encarnado por las corporaciones fósiles, por

las grandes potencias del Norte Global y también las "emergentes", sin olvidar el rol cada vez más importante de los superricos, ese 1% de la humanidad que concentra una inmensa riqueza, no quiere pagar impuestos al Estado ni reconocer derechos laborales, y cuyas empresas y consumos emiten más gases de efecto invernadero que varios países juntos. En suma, la responsabilidad de la crisis socioecológica remite al capitalismo actual que promueve modelos de maldesarrollo, modelos que además de profundizar las desigualdades sociales y geopolíticas nos hacen chocar con los límites físicos y ecológicos del planeta, poniendo en riesgo toda forma de vida. No es casual que en un contexto en el que las desigualdades sociales y el colapso ecológico se proyectan hasta el paroxismo se haya configurado un escenario sumamente perturbador, de "fin del mundo", en el que convergen el suicidio de las democracias y el ecocidio, mientras las extremas derechas se erigen como alternativa de poder global.

4

En *Policrisis* trato algunos de los tópicos de esta encrucijada civilizatoria, haciendo hincapié sobre todo en tres ejes: crisis socioecológica, crisis de los imaginarios emancipatorios y expansión de las extremas derechas. Sin remitir solo a un nivel local o nacional, sino a un nivel multiescalar. En esa línea, propongo transitar narrativas y temáticas como el colapso ecológico, las disputas geopolíticas en torno a la transición energética, la implosión de los progresismos, el mandato neodesarrollista, el ascenso de las extremas derechas como alternativa de poder, sus características comunes y el vínculo con el negacionismo climático, el surgimiento de Milei en la Argentina y, por supuesto, las nuevas narrativas contrahegemónicas.

En el primer capítulo, presento las perspectivas y los alcances del colapso ecológico y propongo estrategias para entenderlo en su

complejidad y diversidad, tanto como colapso climático localizado (los eventos extremos situados) como en términos de procesos más amplios. En el segundo capítulo, abordo el escenario de disputa geopolítica en clave interimperial y de división Norte-Sur para poner énfasis en las diferentes vías que adoptan las narrativas tecnocráticas-capitalistas y en el carácter colonial e insostenible de la transición energética que proponen. En el tercer capítulo, me ocupo del escenario regional, del agotamiento de los progresismos y de los límites de los neodesarrollismos en el contexto actual de colapso político y ecológico. En el capítulo cuatro, examino en qué consiste la polarización asimétrica que instalan las extremas derechas y su ataque a las democracias; y me detengo especialmente en los discursos negacionistas sobre el cambio climático y sus consecuencias. De la situación argentina bajo el gobierno de Javier Milei y su abordaje de la policrisis me ocupo inevitablemente en el capítulo cinco. El capítulo seis trata sobre aquellas visiones que proponen un horizonte de transición ecosocial justa y popular desde narrativas relacionales contrahegemónicas elaboradas por pueblos originarios, colectivos socioambientales, feminismos ecoterritoriales, pero también por algunos colectivos de acción e investigación en los cuales participo, como el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur y el Equipo Transiciones de la Argentina.

En resumen, este libro también propone un recorrido asistemático a través de diferentes narrativas[4] que reflejan una determinada visión de las raíces de la policrisis actual, muy especialmente en clave climática. Aquí nos sumergiremos en las narrativas catastrofistas (aceptación de la distopía) y negacionista explícita (el pancapitalismo del fin de la extrema derecha), buscaremos analizar críticamente la narrativa capitalista-tecnocrática (que pretende salvar el capitalismo de la mano del capitalismo verde) y sus tentáculos, a través del neodesarrollismo latinoamericano. Por último, dará cuenta de la narrativa relacional contrahegemónica (experiencias alternativas a escala local en busca de una sociedad justa y sostenible). Sin duda, estos discursos no son los únicos que existen, pero creo que resumen gran parte del espíritu de época y nos

permiten reflexionar sobre la crisis de los imaginarios políticos actuales.

En suma, propongo navegar la policrisis aguas arriba (de dónde viene) y aguas abajo (hacia dónde va), interconectando temas y escalas, yendo de la crisis climática a la crisis de la democracia, de la escena nacional a la regional, de las disputas globales a las locales, de lo social a lo ambiental y a lo político. La apuesta es sortear las perspectivas parciales o monodisciplinares que terminan por encapsularnos en compartimentos estancos, ya que solo un enfoque transversal y multiescalar puede dar cuenta de la complejidad y variedad de los desafíos que hoy enfrentamos.

Como afirmaba la gran pensadora Hannah Arendt en el siglo pasado y se consigna en uno de los epígrafes de este libro, vivimos tiempos en los que muchos han perdido la esperanza. Sin embargo, no está dicho que la reacción autoritaria haya llegado para quedarse, pues existen numerosas fuerzas democráticas que atraviesan el planeta, movimientos y tradiciones de lucha que abogan por generar escenarios justos y sostenibles. Por eso mismo, propongo navegar estas aguas turbulentas con las alarmas activadas al máximo, entendiendo que los procesos históricos no están cerrados para siempre, y con la mirada puesta en la idea fuerza de que hoy nuestra responsabilidad mayor no es solo perder el miedo sino también, como dijo la inspiradora poeta y activista Angela Davis, fraguar la esperanza a través de nuestras luchas.

Buenos Aires, enero-marzo de 2025

---

[1] Ver <pactoecosocialdelsur.com>.

[2] Si bien el libro fue publicado en 2016, en 2013 el historiador Bruce Campbell dictó cuatro conferencias en la Universidad de Cambridge en el marco de The Ellen Mc Arthur Lectures. Publicadas como podcast, pueden consultarse en <n9.cl/trx9x>.

[3] Para una definición de la policrisis en esta línea, ver Tooze (2022).

[4] Para Paul Ricœur, la narrativa es la forma en que los seres humanos construyen su identidad a través de historias y lenguaje. La narrativa es un proceso que permite al sujeto imaginar situaciones y advertir conflictos entre lo que se quiere y lo que se debe hacer (Ricœur, 1999). En términos

colectivos, las narrativas condensan imaginarios sociales al reflejar tensiones y conflictos, y al funcionar como herramientas que exponen tanto las ideologías dominantes como las resistencias y críticas.

1. Perspectivas y alcances del colapso

> Nuestra pasión apocalíptica no tiene otro objetivo que evitar el apocalipsis.
> **Gunther Anders, *El tiempo del fin*, 2025**

La era del colapso ya llegó

Suele decirse que, de todas las crisis entrelazadas que vivimos, solo una presenta un carácter novedoso: la crisis climática, de la cual la humanidad no tendría experiencia previa ni referencias históricas a las que apelar. Sin embargo, tal como refleja la ya aludida Pequeña Edad de Hielo, esto no es así. Lo que sí es nuevo y nos instala en un territorio absolutamente desconocido es la combinación entre el carácter antrópico de la crisis, su escala planetaria y la irreversibilidad que conlleva.

La crisis es multidimensional y potencia las narrativas de fin del mundo a niveles paroxísticos. Sin embargo, si habláramos con un indígena americano este nos diría, como señalaron los antropólogos brasileños Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, que ellos ya conocieron el fin del mundo hace más de quinientos años con la invasión española, que trajo consigo el genocidio, las enfermedades contagiosas para las cuales no tenían defensas, la destrucción de su cultura y de sus dioses, el extractivismo mineral y las plantaciones a gran escala. Se trató, sin duda, de un genocidio a la altura de un colapso civilizatorio. Bartolomé de las Casas estimaba que habían

muerto unos 40 millones de indígenas; estimaciones más recientes calculan que fueron 55,8 millones los que perecieron en el transcurso de un siglo, casi el 90% de la población originaria (Koch y otros, 2019).

Desde la perspectiva histórica que nos proporciona esa conversación imaginaria, la desaparición de ciertas sociedades no respondió solamente a causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o la mala gestión del agua. El colapso involucró también otros factores determinantes de orden político y geopolítico.

El colapso ecológico ya llegó, afirmamos desde el título del libro que publicamos con Enrique Viale en 2020. Con esa afirmación proponíamos pensar el colapso como parte del Antropoceno, esta nueva edad geológica que nos confronta con las fronteras planetarias, pues como dicen Servigne y Stevens (2015), el colapso no es el fin del mundo pero sí "el fin del mundo tal cual lo conocíamos". A diferencia del Holoceno, caracterizado por la estabilidad climática, el Antropoceno instala la idea de que la humanidad está chocando con los límites ecológicos del planeta, esos umbrales críticos o puntos de inflexión climáticos (*tipping points*) a partir de los cuales un sistema podría experimentar un cambio significativo, a menudo brusco y potencialmente irreversible. Dicho esto, no se trata solo de una crisis de la humanidad, del "anthropos", entendida en términos genéricos, sino de las dinámicas actuales del desarrollo capitalista concentrador y excluyente, que mercantiliza toda forma de vida y desconoce las fronteras planetarias. Esto plantea la necesidad de pensar qué Antropoceno estamos dispuestos a construir, y por el cual luchar, en un planeta ya gravemente dañado.

Urge, sin embargo, hacer tres aclaraciones fundamentales. Primero, no hay que reducir el colapso a la distopía. Afirmar el colapso como parte del Antropoceno, indagar sobre su carácter más localizado o global, entenderlo como un umbral desde el cual pensar escenarios de transición ecosocial justa no significa afirmar el colapso como distopía ("el peor de los mundos") o como único horizonte posible. Las posiciones distópicas o catastrofistas no creen

que la intervención colectiva pueda generar los cambios estructurales que se necesitan; o bien no les interesa o piensan que ya es demasiado tarde. Segundo, los posicionamientos distópicos llevan al desaliento y la resignación de la acción individual y colectiva, y con ello van obturando cualquier proceso de liberación cognitiva, lo cual conduce a la parálisis de la imaginación política, a la imposibilidad de pensar un futuro diferente. Esto se ve alimentado por los relatos distópicos del siglo XXI –series, películas, libros– multiplicados al infinito en las diferentes plataformas, narrativas que en vez de causar indignación y rabia movilizadora, afán por transformar las condiciones de vida y las relaciones de poder, tienden a consolidar el lenguaje de la resignación y causan un efecto brutal de adormecimiento. Tercero, la aceptación de la distopía como horizonte nos separa aún más de la realidad y nos sitúa en una suerte de punto divergente, un umbral de fuga, que también es parte del dispositivo anestesiante, del disciplinamiento e incluso de la estrategia de desarticulación de las resistencias. Entonces, ¿quién o quiénes se salvarán de la catástrofe planetaria? Se opera así una extraña paradoja, como afirma en un libro atrapante el escritor argentino Michel Nieva (2024): mientras la distopía aparece cada vez más instalada en el sentido común de la gente y obtura cualquier posibilidad de imaginar un futuro deseable, justo y sostenible, los superricos –esa minoría responsable de la destrucción del planeta– proponen una utopía para pocos, un futuro excluyente concentrado en el turismo –o la migración– espacial (Marte), los búnkers para pocos, la fuga hacia el metaverso y la promesa de inmortalidad.

Complejidad y miradas históricas del colapso

En 1988, el historiador británico Joseph Tainter publicó *The Collapse of the Complex Societies* [*El colapso de las sociedades complejas*]. Para este autor, el colapso es un proceso político que puede tener consecuencias también en otros ámbitos, como la economía, el arte

y la literatura. Una sociedad colapsa, según Tainter, "cuando muestra una pérdida rápida y significativa de un nivel establecido de complejidad sociopolítica". El colapso, a su vez, debe ser rápido –no más de unas pocas décadas, ya que no debemos confundirlo con declive o decadencia– y debe conllevar una pérdida sustancial de la estructura sociopolítica. Sin embargo, no es un episodio, sino un proceso acumulativo. En suma, el colapso se manifiesta en cosas como:

> Un menor grado de estratificación y diferenciación social; una menor especialización económica y ocupacional, de individuos, grupos y territorios; un menor control centralizado, es decir, una menor regulación e integración de diversos grupos económicos y políticos por parte de las élites; un menor control y regimentación del comportamiento; una menor inversión en los epifenómenos de la complejidad, aquellos elementos que definen el concepto de "civilización": arquitectura monumental, logros artísticos y literarios, y similares; un menor flujo de información entre individuos, entre grupos políticos y económicos, y entre un centro y su periferia; un menor intercambio, comercio y redistribución de recursos; una menor coordinación y organización general de individuos y grupos; un territorio más pequeño integrado en una única unidad política (Tainter, 1998: 4. La traducción me pertenece).

La complejidad estructural se vincula al creciente proceso de diferenciación social y especialización laboral, a las clases sociales, a la expansión de las estructuras e instituciones, a la centralidad cada vez más marcada de la tecnología. El análisis de sus consecuencias es uno de los temas que más apasionó a los fundadores de la sociología clásica europea, desde Marx, pasando por Durkheim, Weber y Elias, sin olvidar Simmel. Pero, entre ellos, solo Norbert Elias analizó la contracara del proceso civilizatorio en términos de

descivilización, vale decir, pérdida de complejidad, fragmentación sociopolítica, menor diferenciación social y, sobre todo, déficit de control y regulación del Estado, lo que en términos de estructuras cognitivas se expresa en una pérdida de autorregulación y el deslizamiento hacia conductas cada vez más impulsivas y violentas. Proceso de descivilización cuyo ejemplo más claro fue, para Elias, el régimen nazi.

En la actualidad, el colapso planetario como proceso acumulativo y sistémico refiere a un cambio de régimen que nos insertaría en otra era, marcada por la hostilidad climática y la imposibilidad de la reversión, la vuelta atrás, hacia la "normalidad". Este proceso conllevaría el choque con los límites planetarios que, al ser traspasados, alterarían el clima de manera brusca y radical, desencadenando consecuencias múltiples en todos los órdenes de existencia: una pérdida de complejidad social estructural que va de lo más complejo a lo más simple, de más a menos, en las dimensiones señaladas más arriba. Entraríamos así a un territorio desconocido, del que no tenemos experiencia histórica como humanidad, aunque se hayan experimentado colapsos parciales (las comunidades originarias en América, el período de la pequeña glaciación, entre otros).

El concepto de límites o fronteras planetarias fue establecido en 2009 por el reconocido científico Johan Rockstrom, quien describió los nueve procesos clave para la estabilidad de la Tierra. Quince años más tarde, en 2024, escribía:

> Podemos concluir que seis de los nueve sistemas planetarios que sustentan la vida han rebasado la zona de funcionamiento segura para la vida humana. Esto incluye: el cambio climático, el cambio en la integridad de la biosfera (impulsado por la pérdida de biodiversidad y hábitats), la modificación de los flujos biogeoquímicos (sobrecarga de nitrógeno y fósforo debido al uso excesivo de fertilizantes), el cambio en el sistema terrestre (principalmente la deforestación), el cambio en los ciclos del agua dulce (uso

> excesivo continuado del agua dulce y cambios causados por el hombre en las precipitaciones), y la introducción de nuevas entidades en el sistema terrestre, es decir, la miríada de sustancias químicas generadas por el hombre, como los microplásticos, los PFAS (más conocidos como "sustancias químicas para siempre" [*forever chemicals*]), los residuos nucleares y los pesticidas (Rockstrom, 2024).

Este escenario podría desembocar en una conjunción de diversos *tipping points* o puntos de inflexión, que generarían lo que se llama bucles de retroalimentación positivos o reacción en cadena que acelerarían todavía más la crisis climática: el derretimiento del permafrost, que liberaría el gas metano acumulado durante siglos; la Amazonía cada vez más deforestada, cuyos bosques y selvas no solo no captarían más carbono, sino que, por el contrario, lo emitirían a gran escala; tal vez el colapso de corrientes oceánicas, que generarían condiciones climáticas extremas... La cuestión es que esta reacción en cadena provocaría un cataclismo en diferentes dimensiones, con impactos destructivos sobre nuestras sociedades complejas.

Existe una profusa bibliografía acerca del "colapso civilizatorio". Un recorrido por tres libros fundamentales nos ayudará a visualizar el espesor de estos diagnósticos. El primero es *Colapso. Cómo las sociedades deciden su desaparición o su sobrevivencia*, de Jared Diamond, un reputado geógrafo y ambientalista. En este texto pionero, publicado en 2004, Diamond estudia sociedades desaparecidas, desde los vikingos de Groenlandia, las ciudades mayas en América Central, Tiahuanaco en los actuales Perú y Bolivia, la Isla de Pascua en el Pacífico, la Grecia micénica y la Creta micénica hasta el Gran Zimbabue en África.

¿Qué es lo que hace –se pregunta Diamond– que una determinada cultura, otrora una sociedad pujante, un imperio, llegue a desaparecer? ¿Cuáles son los factores que hacen especialmente vulnerable a una sociedad? Cuando habla de colapso, no alude a la desaparición de un día para otro de una cultura o una civilización

determinada, a la manera de las películas apocalípticas del cine hollywoodense. El colapso presupone "una reducción drástica de la población humana y/o de la complejidad política, social, económica sobre una determinada extensión y una duración importante". Si indagamos el pasado, entre los factores del colapso se encuentran la deforestación, la erosión del suelo, la mala gestión del agua, la sobrepesca, la caza excesiva, la introducción de especies alógenas, el aumento de la población, el impacto humano por habitante. Ya dijimos que todos estos factores de riesgo están presentes en nuestra civilización, a lo cual se suma la crisis climática, la extinción masiva de especies y el cambio en el ciclo biogeoquímico. Para Diamond, sin embargo, el colapso ambiental nunca es una dimensión aislada ya que también es producto de la dimensión geopolítica y de la política internacional, esto es, la relación de conflicto u hostilidad con los vecinos.

El segundo relato pertenece al notable y ya fallecido ecologista español Ramón Fernández Durán, ingeniero de profesión y cofundador de Ecologistas en Acción. En un breve libro de 2011, sostiene que el colapso no sería repentino, sino "un lento proceso con altibajos, pero con importantes rupturas", un largo declive de la civilización industrial que podría durar incluso doscientos o trescientos años. Sus causas: los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, muy especialmente debido a la (in)capacidad de aprovisionamiento de combustibles fósiles y su reemplazo efectivo por otras energías limpias. Vivimos el fin de la energía abundante y barata, sin plan B energético alternativo para sustentar las demandas de nuestras sociedades energívoras. Ninguna fuente energética podría sustituir el "tremendo vacío que dejarían las energías fósiles en su declive, debido a su intensidad energética". Nadie quedaría al margen de este declive, ni siquiera las élites, lo cual no quita que habría –inevitablemente– ganadores y perdedores en términos de impactos. Fernández Durán tampoco descartaba que la ambición por conservar a cualquier precio la glamorosa sociedad hipertecnologizada actual pudiera llevarnos a un colapso más brusco, a un desastre sistémico sin transición posible.

El tercer relato nos sumerge en una ficción climática de carácter posapocalíptica, cargada de datos duros (impacto del cambio climático, del *fracking*, derretimiento de los polos). Publicado en 2017 por los historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y Erik Conway, *The Collapse of Western Civilization* [*El colapso de la civilización occidental*] nos sitúa en un tiempo lejano, año 2393 bajo la Segunda República Popular China, cuando un historiador de esa nacionalidad se pregunta por las razones del hundimiento de la civilización occidental a mediados del siglo XXI, época conocida como "La Edad de la Penumbra". Con paciencia china, el historiador se pregunta cómo es posible que una civilización haya colapsado aun contando con el conocimiento suficiente sobre las consecuencias destructivas de sus acciones.

Los tres relatos evocados presentan algunos consensos básicos. Primero, el derrumbe visto como una reducción abrupta de la complejidad en diferentes planos (económico, social, político, cultural). Cuanto más compleja una sociedad, más expuesta y vulnerable deviene; o sea, más dependiente de esa complejidad y de los recursos que la mantienen vigente. Capitalismo y complejidad van de la mano. Fernández Durán añade que es el carácter energívoro que hace a la complejidad de nuestras sociedades capitalistas lo que las torna más vulnerables. Vivimos en sociedades energívoras, un rasgo que se acentuó en los últimos ciento cincuenta años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con la petrolización acelerada de las sociedades, impulsada por el complejo militar-petrolero de los Estados Unidos. La complejidad organizativa de la sociedad global actual es cada vez mayor, por lo cual requiere más energía *per capita* a escala mundial para mantenerse. Somos esclavos energéticos, pero sobre todo somos esclavos de la complejidad. El final de la energía barata y abundante (la energía fósil) y el choque con las fronteras planetarias podrían confrontarnos con un escenario drástico, situado entre, por un lado, la aceptación de la escasez y la necesidad de producir y consumir con menos energía y materiales y, por otro lado, el colapso energético, esto es, la caída en el caos y la disolución social al no poder sostener las actividades esenciales.

Segundo tópico en común: pese a que Diamond habla de "la sociedad mundial" y Fernández Durán del "capitalismo global", ambos coinciden en que el derrumbe civilizatorio implicaría también la desaparición de valores políticos democráticos que creíamos fundamentales. Se habla de "nuevos capitalismos regionales" fuertemente autoritarios y conflictivos entre sí, lo cual conllevaría una "refeudalización de las relaciones sociales", un tema que viene atravesando la reflexión de las ciencias sociales desde hace décadas. Aunque volveré sobre este asunto en otro capítulo, somos conscientes de que nuestras sociedades están experimentando un fuerte retroceso democrático con la expansión de las derechas radicales que alcanzan el poder por vía electoral.

Si bien Oreskes y Conway llegan a una conclusión similar, agregan que las posibilidades de sobrevivir a un gran colapso aumentarían si contáramos con un régimen centralizado y un fuerte aparato estatal, aunque esto implicara la pérdida inevitable de democracia. No por casualidad los estragos producidos por el derrumbe de la civilización occidental son analizados en la ficción por un historiador chino, cabal expresión de una cultura que habría sobrevivido gracias –claro está– a su estructura estatal autoritaria y centralizada.

Por último, como bien dice el historiador chino de la ficción, existen también obstáculos de orden epistemológico que explicarían la caída de la sociedad del siglo XXI, entre ellos la "convención occidental arcaica" que imponía la división y el estudio separado del mundo físico y del mundo social; en otras palabras, la persistencia de una ontología dualista respecto de la sociedad/naturaleza, también expresada en el ámbito del conocimiento.

La era del colapso climático localizado

Estamos al filo de cambios sistémicos que pueden hacer que nuestro planeta resulte decididamente muy hostil para la vida. Entretanto, vivimos cada vez más en la era de los colapsos climáticos

localizados, visibles en la frecuencia cada vez mayor de eventos extremos que afectan zonas urbanas y rurales, que generan desastres cada vez más amplios, que van erosionando las condiciones de vida. Algunos ejemplos nos ayudarán a comprender el desafío que afrontamos.

El 23 de octubre de 2023, el tornado Otis destrozó la ciudad de Acapulco. La joya turística de México, que cuenta con 1 millón de habitantes, quedó devastada de un día para otro. ¿Qué sucedió? En menos de 14 horas el huracán pasó de categoría 1 a 5, lo que en términos meteorológicos se conoce como fenómeno de "intensificación rápida". En esa ventana de tiempo aumentó su velocidad a 185 km/h. Luego, todo se oscureció y Acapulco se convirtió en zona de desastre. Con más de cincuenta personas fallecidas, numerosos desaparecidos y una infraestructura de servicios destruida, la ciudad estuvo varios días sin luz, sin agua, sin víveres, asolada por los saqueos. En esos días de octubre estaba en la Argentina una amiga mexicana que tenía familia en Acapulco. Las fotos del departamento de sus tíos, tomadas luego del paso del huracán, eran desoladoras. No había techos ni paredes, solo un amasijo de hierros y muebles encimados unos sobre otros, expuestos a un vacío casi cósmico. En el Acapulco invisible y rural la gente no solo se quedó sin techo, sin agua y sin electricidad; allí se perdieron también cultivos y animales. Ese año no hubo cosecha de maíz ni frijol ni calabaza ni ganado.

En agosto de 2023, otro conocido destino turístico internacional, Hawái, vivió un incendio forestal de proporciones dantescas que hizo que sus habitantes huyeran hacia el mar. Los fuertes vientos y la sequedad del clima crearon las condiciones para la expansión del fuego en un contexto de interfaz urbano-forestal, dado que muchas de las viviendas están en medio de la vegetación. Más de un centenar de muertos, ecosistemas destruidos de raíz, el feroz incendio acabó también con la histórica ciudad de Lahaina. Seis meses más tarde, la Cruz Roja continuaba con sus equipos de Transición para Residentes en refugios. Para esas personas que lo perdieron todo, nada volverá a ser igual.

Si miramos la Argentina, veremos numerosos ejemplos de colapsos climáticos localizados. Uno de ellos, de menor escala, tuvo su epicentro en la ciudad de Bahía Blanca en 2023 y, más recientemente, con la inundación de marzo de 2025. En el primer caso no se trató de un tornado sino del paso de una tormenta fuerte, con ráfagas de viento intensas que siguieron el mismo frente de tormenta que afectó varios cientos de kilómetros, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La tormenta dejó al menos trece muertos en Bahía Blanca, mientras el viento huracanado derribaba centenares de árboles, postes de luz, volaba techos y provocaba múltiples anegamientos y masivos cortes de luz que duraron varios días. Estos eventos extremos produjeron apagones, como el sucedido en el Delta del Paraná, donde la tormenta hizo colapsar el tendido eléctrico durante un mes (de diciembre de 2022 a enero de 2023) en San Fernando y Tigre. Los isleños sufrieron más de cincuenta días de corte de luz.

En el segundo caso, el 7 de marzo de 2025 Bahía Blanca fue azotada por una lluvia extraordinaria de casi 300 milímetros que provocó un desastre ambiental sin precedentes. Diecisiete personas fallecidas, mil quinientos evacuados y una ciudad arrasada en medio de la peor catástrofe climática localizada de su historia. La ubicación vulnerable de la ciudad, situada en la cuenca del arroyo Napostá, las deficiencias en la planificación urbana y la creciente influencia del cambio climático en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos contribuyeron al desastre (Gardel y Marina, 2025). Los impactos se amplificaron debido a las actuales políticas estatales. Solo tres días antes de la inundación de Bahía Blanca, el gobierno de Milei desguazó la Dirección Nacional de Emergencia y echó a sus 485 empleados, como parte de su política de reducción del Estado. Antes, había afectado al Servicio Metereológico Nacional con despidos y precarizaciones, así como al Servicio de Defensa Civil, abocado a los incendios.

Un caso del que se habla poco en la Argentina es el de la ciudad capital de Corrientes, donde a principios de marzo de 2023 llovieron 300 milímetros de agua en cinco horas (más de lo previsto para todo el mes), lo que dejó centenares de evacuados, cortes de luz masivos

y un tendal de protestas en los barrios más afectados por la lentitud de la ayuda estatal. Ahí también asistimos a un escenario de guerra, personas –sobre todo pobres, sectores vulnerables– que lo perdieron todo; vidas que no volverán a ser las mismas de antes.

En 2022, la provincia de Corrientes ya había perdido casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, equivalente al 12% de su superficie total. La sequía histórica y la crisis climática asociadas a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros del Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Quién podría olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de miles de animales carbonizados y los yacarés escapando del fuego con el horror en los ojos? A principios de marzo de 2024, la inundación en la capital correntina pasó casi inadvertida; la anormalidad normalizada.

La sequía sacude también a la gran región amazónica. Y, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum (2024), los ríos voladores de la Amazonía, esos flujos masivos de agua en forma de vapor que atraviesan la atmósfera y viajan miles de kilómetros e influyen en las lluvias de Sudamérica, hoy por hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen calor y humo. En septiembre de 2024, la sequía impulsó enormes incendios: fuegos en la Amazonía, fuegos en Pantanal, fuegos en Córdoba... Y el humo invadió las ciudades de Asunción, San Pablo y Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Picchu… Y si bien gran parte de los múltiples focos de incendio son disparados por el cambio climático, también los hay intencionales, impulsados por la expansión de la frontera inmobiliaria y agropecuaria.

El fuego libera una gran cantidad de energía y genera una "meteorología propia" dentro de los incendios; por eso son tan destructivos e incontrolables y han adquirido una mayor magnitud. En 2024, por ejemplo, se quemaron casi 100.000 hectáreas de bosque nativo en Córdoba, hecho que afectó ecosistemas que todavía conservaban su monte y su fauna en una provincia que apenas ha preservado el 3% de sus bosques nativos. Según Rodríguez (2025), estos megaincendios son "incendios de sexta

generación", ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de controlar, por lo que no es posible predecir el comportamiento del fuego.

El colapso a gran escala en Río Grande del Sur

Entre mayo y junio de 2024, Río Grande del Sur sufrió inundaciones que generaron un colapso localizado a gran escala. No se trata solo de una gran ciudad devastada, Porto Alegre, sino de unos 497 municipios afectados. Hubo cerca de 180 fallecidos; más de 800 heridos; 30 personas aún sin localizar; y más de 640.000 obligadas a dejar sus casas, de las cuales 65.000 se refugiaron en escuelas y gimnasios. Las pérdidas fueron enormes y comprometieron la soberanía alimentaria del gran país vecino. "Río Grande del Sur aporta el 12,6% del PBI agrícola de la nación, de acuerdo con Bradesco. Casi el 70% del arroz y el 13% de los productos lácteos de Brasil provienen de ese estado, según un informe de la corporación estadounidense S&P Global divulgado el 13 de mayo", informa un artículo publicado por la agencia *AP* (Hughes, 2024). En términos económicos, fueron afectados grandes y pequeños productores rurales y numerosas empresas, desde las automotrices hasta la industria cárnica. La reconstrucción será lenta y requerirá una colaboración plena entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional, a cargo de Lula da Silva.

Es aquí donde resulta oportuno, y al mismo tiempo complejo, preguntar por las responsabilidades políticas y geopolíticas de este desastre. Primero: en términos geopolíticos, no cabe duda de que lo sucedido en Río Grande del Sur está ligado a la crisis climática, y debería colocar en el ojo de la tormenta la deuda climática y ecológica que los países del Norte Global tienen con el Sur Global. Verdad de perogrullo: no solo los países del Norte y sus empresas petroleras –los Estados Unidos, Europa–, sino también potencias

emergentes como China, hoy principal emisora de CO_2 en el mundo, y Rusia, potencia primario-exportadora, son los grandes contaminadores de nuestra atmósfera. Estos países no solo han generado las condiciones de la crisis climática actual, sino que eluden su enorme responsabilidad en la deuda ecológica respecto de los países y regiones más pobres y periféricos. Solo para tener una idea aproximada: la región latinoamericana es responsable del 8% de las emisiones de CO_2 a escala mundial y África apenas roza el 3%.

Para completar las vueltas de este modelo perverso, resulta ser que luego son los países centrales los que deciden los "préstamos" y "ayudas" y sus modalidades de implementación en los países del Sur afectados por colapsos climáticos localizados. Lo hacen a través de organismos internacionales, supuestamente para intentar reconstruir sus sociedades y economías siempre "vulnerables", engrosando de este modo la ya pesada deuda externa.

Dicho esto, cabe preguntar también: ¿nuestros países dependientes periféricos son acaso completamente inocentes ante la gravedad de los colapsos localizados, asociados a la desesperante crisis climática? Arrastramos una larga historia de extractivismos, que es producto de nuestra inserción en el sistema de división internacional del trabajo. Como sostienen Francisco J. Cantamutto, Martín Schorr y Andrés Wainer (2024), esto ha dado origen a un "mandato exportador" que fuerza a nuestras economías a convertirse en exportadoras de *commodities* o productos primarios. Sin embargo, como argumentaban los teóricos de la dependencia[5] en los años setenta, la dependencia tiene un "afuera" (dominación externa) pero también un "adentro" (élites cómplices y un sistema de relaciones de poder –políticas y económicas– acorde).

En el nivel regional, los cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera del agronegocio son dos de los grandes responsables del desastre. Entre 1985 y 2022, Río Grande del Sur, uno de los centros de la actividad sojera de Brasil, perdió 3,6 millones de hectáreas de vegetación nativa (un 22% del total) según una red liderada por Eduardo Vélez, de MapBiomas, un consorcio climático

de ONG y universidades brasileñas. Esto se acentuó en el contexto del gobierno bolsonarista y sus continuidades. Por ejemplo, Río Grande del Sur es una región gobernada por sectores extremos –no todos ellos bolsonaristas– que niegan el cambio climático. Desde 2019, el gobernador Eduardo Leite, del PSDB (centroderecha), fomentó el desmantelamiento agresivo de las políticas ambientales para favorecer a los sectores del agronegocio, entre otros grandes empresarios terratenientes. Sabemos que esta no fue la primera inundación sino la cuarta en menos de un año; después de las inundaciones de julio, septiembre y noviembre de 2023, que dejaron 75 personas fallecidas. Finalmente, el actual gobernador fue advertido: el diputado local Adão Pretto Filho, del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo:

> Las severas inundaciones que afectan a Río Grande del Sur podrían haberse evitado o haber tenido un impacto menor si el gobierno local no hubiese ignorado un informe elaborado por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur. Finalizado en agosto de 2023, este documento presentaba distintas propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios del estado (Saccone, 2024).

Por lo tanto, quien mire hacia el costado y crea que la crisis climática está disociada de los modelos de maldesarrollo –expansión de la frontera petrolera (ahora de la mano de energías extremas), desmontes de millones de hectáreas y cambios en los usos del suelo en favor del agronegocio– no solo obra de mala fe o ejerce un cinismo de patas cortas, sino que contribuye a impulsar el ecocidio en ciernes. Más simple: vistos los estragos múltiples y de largo aliento que producen los colapsos localizados, la asociación entre crisis climática y extractivismos ahora cobra rasgos criminales.

Sin embargo, vemos que el extractivismo encuentra un impulso cada vez mayor. En la Argentina, con la reglamentación en octubre de 2024 del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones),

se promueve un extractivismo recargado en todas sus formas a través de la transnacionalización y el otorgamiento de privilegios a mineras y petroleras que, entre otras cosas, tendrán más derecho al agua que cualquier ciudadano común. La sequía histórica que afectó la pampa argentina en 2022 y 2023, agravada por el fenómeno de La Niña, produjo pérdidas millonarias. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario,

> la sequía generó pérdidas para el sector productor de soja, trigo y maíz por más de 14.000 millones de dólares. Además, si se suma el impacto en la menor demanda de fletes, labores, servicios financieros y otros, el perjuicio asciende a 19.000 millones de dólares (Leiva, 2023).

Fueron pérdidas equivalentes al 3% del PBI de 2023. Pese a ello, el mensaje de las corporaciones sojeras no es sobre la crisis climática o la necesidad de elaborar estrategias de adaptación; muy por el contrario, es un discurso que habla de "excepcionalidad" y define a la sequía como un "desastre natural", cuando lo más probable es que este tipo de fenómenos tiendan a repetirse o incluso agravarse.

Todo indica que los episodios de colapsos localizados irán multiplicándose, afectando ciudades y regiones enteras. Lo hemos visto con la DANA en Valencia, en octubre de 2024, cuando lluvias torrenciales generaron un tsunami de barro y agua que arrasó partes de la ciudad, produjo más de 100 muertos y llegó hasta Cataluña, mientras las alertas tempranas eran ignoradas y obligaban a la gente a ir a sus trabajos. Y con los incendios en Los Ángeles, que según información de enero de 2025 habían destruido más de 16.000 casas entre Palisades y Eaton, donde hasta hace poco se erguían mansiones fastuosas de ricos y famosos.

Sin embargo, en tiempos de memoria corta, el olvido todo lo devora. En septiembre de 2023, hubo un colapso localizado en Libia. Las fuertes lluvias de la tormenta mediterránea Daniel causaron inundaciones letales en el este de ese país y se desbordaron dos represas. Una pared de agua de varios metros de altura arrasó con

la ciudad de Derna, en la costa, causando la muerte de más de 11.000 personas. Durante días, el mar estuvo devolviendo lodo y cadáveres sobre la orilla. Pero ya nadie recuerda lo ocurrido en Libia, ya no aparece en los portales de noticias. Cuando los reflectores se apagan y los medios de comunicación dejan de mirar, el daño persiste a oscuras, amplificado por la normalización de la catástrofe.

Colapso energético y apagones

Dos de las imágenes colapsistas más comunes asociadas a la crisis energética son el peligro de desabastecimiento y los apagones. En un contexto bélico y de disputa por el acceso a los bienes naturales, el temor a los bloqueos y al desabastecimiento energético, capaces de generar un efecto en cascada dada la globalización e interdependencia de nuestras sociedades, es uno de los fantasmas más potentes. En 2022, la invasión rusa de Ucrania desencadenó el miedo al desabastecimiento en Europa, sobre todo en Alemania y otros países dependientes del gas procedente de Rusia. El Pacto Verde Europeo –programa de transición energética, social y digital (volveré sobre el tema en el capítulo 2) que arrancó de manera promisoria a fines de 2019 y se intensificó durante la pandemia al calor de las demandas de transición ecosocial– entró en zona de zozobra.

¿Qué sucede en las periferias capitalistas menos afectadas por la guerra? De este lado del mundo, los apagones abundan. Pocos recuerdan ya el ocurrido en la Argentina el domingo 16 de junio de 2019. Un apagón que nos hizo sentir el roce de la catástrofe y nos advirtió de la importancia de la energía para nuestras vidas. Fue la primera vez en la historia que un corte se registró de modo simultáneo en todo el territorio nacional, incluso en zonas de Uruguay y Paraguay, que afectó a unos 50 millones de habitantes. Ese domingo lluvioso se festejaba el Día del Padre y había elecciones en algunas provincias. El restablecimiento de la electricidad comenzó

ese mismo día, de modo gradual, en un círculo concéntrico que reveló "prioridades": primero, en las grandes ciudades; luego, en varios partidos del populoso conurbano bonaerense; por último, en las provincias y localidades más lejanas, donde duró varios días y derivó rápidamente en la falta de agua. El apagón de junio de 2019 no puede atribuirse a la escasez ni al cambio climático ni a una guerra internacional; fue causado por un "error operativo" de la empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión, Transenet, en la fase de transmisión y generación, y, en consecuencia, deriva de los problemas que muestra un sistema deficiente en manos de empresas privadas.

Los apagones también mezclan una dosis de ineficiencia y corrupción, vinculadas a modelos políticos, cuyas consecuencias son agravadas por la crisis climática. Por ejemplo, en 2019 hubo en Venezuela una serie de cortes de suministro eléctrico a escala nacional. El primero comenzó el 7 de marzo y fue el más grande en la historia de ese país: duró, en algunos estados, entre cinco y siete días. La causa fue una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que afectó seriamente al sector eléctrico en la mayoría de los 23 estados y en la capital, y causó graves problemas en hospitales, industrias, transporte y servicios de agua y múltiples saqueos a nivel nacional, principalmente en el estado de Zulia. Al 13 de marzo se habían registrado al menos 43 muertes. Ese mismo mes se produjeron otros dos apagones que afectaron a casi todo el país.

Hay regiones o países enteros que sufren un racionamiento de la energía y son sometidos a cortes de electricidad programados. Esto sucede en Cuba, que padece una inestabilidad energética desde hace décadas, agravada luego de que se cortara la ayuda de la ex Unión Soviética. Y si bien hoy Cuba recibe petróleo de varios países –entre ellos Venezuela, México y Rusia–, su sistema eléctrico envejecido y la falta de combustible fósil llevaron a una sucesión de apagones totales en octubre de 2024 e inicios de 2025, en medio de una grave crisis económica y alimentaria.

Ecuador, otro país petrolero, viene implementando desde hace dos años cortes programados de electricidad de entre tres y cuatro horas diarias en todo su territorio entre los meses de octubre y diciembre.

El estiaje (bajo caudal de ríos y embalses) condujo a la insuficiente capacidad para cubrir la demanda nacional. En marzo de 2024, hubo cortes sorpresivos relacionados con el aumento de la demanda y las fallas en el sistema, pero en septiembre y nuevamente a raíz del estiaje volvieron los cortes programados dado que el país no cuenta con un plan de contingencia para enfrentarlo (*Prensa Latina*, 2024). [6] Las centrales hidroeléctricas apenas producían energía y los cortes llegaban a durar 14 horas. El presidente Daniel Noboa reconoció que el país estaba sumergido en el caos (*Infobae*, 2024).

En Sudáfrica, pese a ser uno de los países más industrializados de África, la crisis energética comenzó en 2007-2008. En 2019, hubo cortes programados de electricidad de hasta catorce horas seguidas, llevados a cabo por la compañía estatal Eskom para evitar la sobrecarga, que obedece a un sistema obsoleto que funciona a base de carbón y deja a los sudafricanos frecuentemente sin luz (Hierro, 2022). Quienes más lo sufren son los sectores vulnerables, que no cuentan con equipos electrógenos y deben trasladarse para trabajar. Uno de los datos más inquietantes es que Eskom fue cuestionada por exportar electricidad a los países vecinos, pese a no tener la capacidad necesaria para satisfacer la demanda de Sudáfrica… Algo que podría suceder en la Argentina, donde gracias al RIGI las empresas tienen prioridad sobre insumos estratégicos como la electricidad y el agua por sobre la población o el abastecimiento interno.

A fines de abril de 2025, mientras corregía la edición de este libro, hubo un gran apagón en España, Portugal y el sur de Francia, que afectó a 55 millones de personas. Caos en el tránsito, trenes varados y una península a oscuras. Un hecho inédito que produjo un gran desconcierto, pues sus causas no son inmediatamente evidentes. No se trató de un ciberataque o de "raros fenómenos metereológicos", tampoco de un problema de cantidad de energías renovables, sino de algo que los ingenieros definen como un ajuste de protecciones en el sistema eléctrico y, por supuesto, de la falta de inversiones.

La Argentina también ingresó al club de países afectados por apagones. Ya en 2024, un informe del organismo encargado de la distribución de electricidad, Cammesa, señalaba que "la generación

térmica, hidráulica, renovable y nuclear, más las importaciones, no alcanzará para abastecer la demanda ante las olas de calor cada vez más frecuentes" (Maza, 2024). Obras públicas canceladas por el gobierno de Javier Milei y olas de calor más frecuentes, sumadas a la insuficiencia del sistema, potenciarían el problema en un contexto de mayor precarización laboral y desfinanciamiento y desmantelamiento de organismos estatales tradicionalmente abocados a las llamadas "catástrofes naturales".

Lamentablemente, cabe esperar que en el futuro próximo esto se acreciente y genere más incertidumbre y malestar social, sobre todo ante la falta, no solo de energía, sino de agua, el aumento de la inseguridad, los impactos negativos sobre la salud y la educación, sumados a la imposibilidad de llevar a cabo determinadas actividades económicas y sociales en contextos de creciente emergencia.

* * *

No existe más una normalidad climática. Estamos, como afirman los españoles Juan Bordera y Antonio Turiel, en "el final de las estaciones" (2023). Nosotros, hijos de la modernidad conquistadora, del Holoceno y la estabilidad del clima, hemos roto el ciclo normal de la naturaleza, al que estábamos acostumbrados. Hemos roto también el pacto intergeneracional, pues los jóvenes reciben un planeta dañado, que no es el mismo que conocimos nosotros en nuestra niñez y adolescencia.

Ciertamente, el deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y atraviesa todas las clases sociales y países, pero también nos hunde todavía más en el abismo de la negación. ¿Cómo entender, entonces, el colapso sin caer en la distopía, en la parálisis de la acción o incluso en la ecoansiedad? ¿Cómo pensar una transición ecosocial justa en un planeta dañado, donde las extremas derechas buscan desconocer los orígenes reales de la policrisis civilizatoria mientras desmantelan instituciones y políticas públicas

sociales y ambientales, legitiman desigualdades y cuestionan derechos humanos fundamentales? ¿Cómo trasmitir a niños y adolescentes que todavía viven "en la cálida paz de la incubadora" (como decía Saint-Exupéry en 1942, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial) que no es solo el futuro, sino el presente, este presente que vivimos, el que nos confrontará con un planeta hostil, cada vez más violento e irrespirable, al compás de colapsos climáticos localizados? ¿Cómo decirles a esos niños y niñas que hoy juegan inocentemente al fútbol, nadan, patalean y disfrutan en un río, más aún aquellos que pulsan repetidamente el botón de una PlayStation o viven prendidos al celular o la tablet como si fueran una extensión de su cuerpo, que deben prepararse para sobrevivir y habitar un planeta convertido en permanente zona de guerra?

Entender el colapso como parte de una policrisis civilizatoria, en el marco del Antropoceno/Capitaloceno, implica aceptar la idea de que forzosamente asistiremos a un cambio de régimen socioecológico. Significa reconocer y afrontar la transición ecosocial como un proceso insoslayable, pero también consciente. Como dicen los movimientos sociales, "la transición es inevitable, la justicia no lo es".[7]

---

[5] La tesis fundamental de los teóricos de la dependencia es que el subdesarrollo no es una fase (más) del desarrollo capitalista, sino un producto ligado a la expansión del capitalismo central. La idea de dependencia surgía de un diagnóstico asociado a las nuevas formas de penetración del capital internacional concentrado en las economías de la periferia, situación que ponía fin a las experiencias populistas-desarrollistas y conllevaba un reposicionamiento de la burguesía local en su vinculación con los capitales monopólicos. Ver Svampa (2016).

[6] Ver igualmente la crítica de Alberto Acosta (2024).

[7] La consigna pertenece a Just Transition Alliance, creada en 1997.

2. La clave geopolítica

Las patas cortas de la descarbonización

> Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.
> ***Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular desde los Pueblos del Sur,* 2023**
>
> Por falsas soluciones entendemos una combinación de tecnologías, políticas, programas, discursos y estrategias utilizadas por grupos, organizaciones y el conjunto de individuos instalados en las cúpulas de poder, a través de las cuales pretenden solucionar el problema (colapso climático) sin que, en realidad, nada cambie. Este proceso, al que suele calificarse como una condición pospolítica, sirve para eliminar todo debate sobre *qué es lo que se debe hacer*, al crear una apariencia de consenso que dicta *lo que es posible hacer*.
> **Carlos Tornel y Pablo Montaño*, Navegar el colapso*, 2023**

En mayo de 2023, fui invitada por la Agencia Francesa para el Desarrollo al coloquio "Los desafíos del comercio de las materias

primas", que reunió en París a representantes del gobierno francés y diferentes voces académicas y ONG de Francia y países de África y América Latina. La conferencia inaugural estuvo a cargo de un ignoto técnico francés que se quejó de lo relegada que había quedado América Latina en las relaciones exteriores de Francia en los últimos quince años, pero destacó con entusiasmo la nueva oportunidad que se abría con la presencia de minerales críticos estratégicos en esa región del Sur Global, necesarios para la transición energética y digital. En esa ocasión, me tocó compartir la mesa de debate con un joven funcionario del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, quien también habló con pesar del "modesto sector de minería europeo" y se refirió sin ruborizarse a la "nueva diplomacia de los metales" que habría que encarar con América Latina…

El tufillo colonial de la expresión me quedó dando vueltas. Al tiempo pude constatar que no había sido casual. Pocos meses después, en agosto de 2023, se reunieron en París representantes de 47 países consumidores y productores –con la exclusión de China y Rusia– bajo los auspicios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para trazar las primeras líneas de una "diplomacia de los metales" y además crear una agencia internacional de minerales y metales raros (*BFM Business*, 2023), en vistas de la transición energética.

Queda claro que, más allá de la dirección que adopte la transición energética, esta involucrará grandes conflictos sociales y geopolíticos, que serán el foco de este capítulo.

Matriz energética y metabolismo social

La matriz energética en América Latina está compuesta principalmente por hidrocarburos, entre ellos, gas natural (34%) y petróleo (31%); mientras que la hidroenergía aporta el 8% de la energía total; la energía solar, el 6%; y la geotermia y la energía

nuclear, el 1%. El 19% restante corresponde a diversas fuentes de energía, como carbón vegetal, bagazo o leña (Téllez, 2020). Así, aunque la dependencia de la región respecto de los combustibles fósiles es menor que la media global, la disponibilidad de estos recursos en varios países latinoamericanos, así como la persistencia de un imaginario desarrollista (tema que retomaré en el capítulo siguiente), hacen que la descarbonización de la matriz energética sea todavía una meta lejana.

Desigualdad y concentración son las características mayores del sistema energético de la región latinoamericana, resumido por Pablo Bertinat (2016) de la manera siguiente:

> Alta concentración respecto a la propiedad y el manejo de los recursos energéticos convencionales; fuertes impactos sobre las poblaciones afectadas por toda la cadena de exploración, extracción, transformación y uso de la energía; altos impactos ambientales sobre la biodiversidad en zonas rurales y urbanas; emisiones de gases con efecto invernadero, causantes del proceso de calentamiento global y cambio climático; impactos de las grandes obras de infraestructura energética –de todos los eslabones de su cadena– sobre los territorios, la biodiversidad y las comunidades afectadas, muchas de ellas desarrolladas con dineros públicos; inequidades relacionadas con las características de apropiación de la energía y sus beneficios en toda la cadena productiva; apropiación privada y con fines de lucro de los bienes y servicios energéticos; la mercantilización de las cadenas energéticas en todas sus etapas; en muchos países, normativa vigente en el sector energético proveniente del proceso neoliberal de los años noventa, en los cuales el consenso de Washington impulsó fuertes reformas; ausencia de la participación ciudadana en la construcción de las políticas energéticas y sobre todo en la posibilidad de decidir sobre los usos del territorio.

De este resumen-diagnóstico se desprende la necesidad de que cualquier transición energética que se lleve a cabo debe apuntar a una reforma integral que garantice la democratización del sistema energético. En esa línea, llamamos "transición energética justa" al proceso que conlleva al pasaje de una concepción de la energía de carácter concentrado a otra que la conciba en términos de "bien común", renovable y sustentable en sentido pleno, pública y descentralizada (Svampa y Bertinat, 2022).

Para ello es necesario abandonar las visiones sectoriales y desarrollar una más holística que conecte la transición energética con la transición socioecológica. Cualquier transición energética que no se inscriba en una visión integral, que no aborde la problemática de la desigualdad de la distribución de los recursos energéticos –entre ellos, la cuestión de la pobreza energética– o que no propicie la desmercantilización y fortalezca las capacidades de resiliencia de la sociedad civil, conducirá sin duda a una reforma parcial, sin modificar las causas estructurales del colapso socioecológico que estamos atravesando ni resolver las disparidades geopolíticas. ¿Con qué actores sociales, políticos y económicos? ¿Cómo transformar, cuáles son las alternativas, qué escalas involucra? ¿Quiénes pagarán la transición energética y cómo? ¿Cuál es el rol del Estado en los países capitalistas periféricos? ¿Cuáles son los límites de las energías llamadas renovables? Estas son algunas de las preguntas que recorren los debates actuales sobre la transición energética.

Ahora bien, en términos generales, el capitalismo ha ido profundizando un perfil metabólico insostenible, de carácter energívoro. Si bien el concepto de "metabolismo social" aparece ya en Marx, cuando señala la "ruptura metabólica" que implica la agricultura capitalista, en décadas recientes fue retomado por economistas ecológicos y utilizado para realizar un análisis de flujos de materiales. De manera extensa refiere a la demanda de materia y energía, ligada tanto al patrón de extracción y producción como al modelo de consumo, la circulación de bienes y la generación de desechos.

Pensar en términos de metabolismo social pone en evidencia una geopolítica del Antropoceno y la persistencia de la deuda ecológica,

con sus inequívocas raíces históricas y coloniales. Los países centrales industrializados continúan siendo importadores de naturaleza, rol que también asumen ahora las grandes economías emergentes, como China. Estos países realizan mayores emisiones, superiores a las producidas dentro de sus límites territoriales, porque importan más *commodities* o productos primarios y secundarios, externalizando así los impactos. Estas importaciones no contabilizan el consumo de agua, nutrientes y energía que supone su extracción, o bien lo subestiman. Así, el Sur Global carga con el peso de los costos de apropiación y extracción de las *commodities*, y asimismo con los pasivos socioambientales, lo cual convierte a sus territorios en zonas de sacrificio. Por otro lado, la globalización exacerbó el carácter insostenible del metabolismo social, de la mano de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la nueva arquitectura comercial mundial, que exige para el mantenimiento del modelo de consumo en los países ricos mayor cantidad de materias primas y energías, que en general provienen de los países del Sur Global, lo cual trae aparejado una mayor presión sobre los bienes naturales y territorios, y potencia los procesos de despojo y desplazamiento de poblaciones locales. En los últimos veinte años, esto se agravó por la presión de China sobre las *commodities*, país que atraviesa un acelerado proceso de urbanización.

La deuda de los países más desarrollados no es solo ecológica (destrucción de ecosistemas e importación de naturaleza), sino también climática, pues la responsabilidad del calentamiento global atañe a unos pocos países y empresas, casi todas ellas corporaciones fósiles. Entre 1751 y 2010, solo noventa empresas fueron responsables del 63% de las emisiones acumuladas de CO_2. En 1900, Gran Bretaña y los Estados Unidos representaban el 60% de las emisiones acumuladas de CO_2; en 1950, el 55% y casi el 50% en 1980. Lejos de tener una expresión uniforme, a lo largo de la última década, los cuatro emisores principales (China, los Estados Unidos, los 27 países integrantes de la Unión Europea e India) han contribuido con el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) (Pnuma, 2019). En cuanto a América Latina y el

Caribe, representan solo el 8,3% de las emisiones mundiales. La participación del sector energético en la emisión de GEI en la región latinoamericana es del 45%, seguido de un 23% proveniente de la agricultura y la ganadería y un 19% por cambio de uso del suelo, debido a la deforestación y el avance del agronegocio (Rabí, Pino y Fontecilla, 2021).

Pese a toda la narrativa sobre "energías limpias", la aceleración del metabolismo social continúa presente en los programas de transición energética de los países del Norte, visible en la exacerbación de la explotación de bienes naturales, asociados a un modelo de crecimiento infinito. Por eso, a la hora de analizar los procesos de transición ecosocial, y en especial la transición energética, es necesario reintroducir la problemática de la deuda ambiental del Norte con el Sur, y la amplificación de desigualdades que conlleva su persistencia y su vínculo con la deuda externa (Cantamutto y Peinado, 2024). Sin embargo, el reconocimiento de la deuda ecológica y climática no tiene por objetivo absolver los modelos de desarrollo hegemónico o maldesarrollo que se despliegan en los territorios del Sur Global en nombre del "derecho al desarrollo". En realidad, esos modelos que se invocan ya no son viables porque son los responsables del colapso ecológico y por eso mismo debemos exigir cambios profundos.

Por último, la mirada sobre la deuda ecológica y la responsabilidad de la crisis climática debe incluir el incremento de las desigualdades sociales. Los estudios de Oxfam apuntan que en 2019 el 1% más rico (77 millones de personas) fue responsable del 16% del total de emisiones según sus hábitos de consumo, una cifra mayor que la totalidad de las generadas por los desplazamientos en automóvil y el transporte por carretera. El 10% más rico produjo la mitad (50%) de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% más pobre solo contribuyó con un 10%. Amén de ello, el 1% más rico emite *per capita* cuatro veces más que el 99% restante. Estas emisiones están ligadas al consumo excesivo de recursos naturales y al estilo de vida. Cada año, las emisiones que produce el 1% más rico de la población mundial anulan el ahorro en emisiones de carbono que generan casi un millón de turbinas eólicas.

Entre 1990 y 2015, este pequeño grupo de la humanidad no solo no bajó sus emisiones, sino que fue el que más las incrementó, lo cual hizo crecer todavía más su participación en el total hasta llegar a emisiones *per capita* que hoy superan treinta veces el promedio. La proporción de las emisiones mundiales totales asociadas al consumo del 1% más rico no detendrá su crecimiento. Todo indica lo contrario, ya que pasó del 13% en 1990 al 15% en 2015, y se estima que llegará al 16% en 2030 (DFI y Oxfam, 2020). Lo que queda claro es que no hay posibilidad de transición ecosocial justa si no articulamos justicia social con justicia ambiental, y transición ecosocial con justicia climática y deuda ecológica. Y esto supone necesariamente reducir la riqueza y los consumos de los sectores más ricos.

Pactos Verdes, guerras y esquizofrenia pospandémica

En el Norte Global, los Green New Deals o Pactos Verdes reconocen la urgencia del cambio climático y la necesidad de combinar la justicia económica con la descarbonización. Más allá de las diferencias, estos se convirtieron en un marco de confluencia político-discursivo para reducir las emisiones de carbono y promover un crecimiento económico "equitativo" y supuestamente "sostenible".

El más importante, por su proyección y su envergadura en términos de políticas públicas, es el Pacto Verde Europeo, que arrancó en 2019 y se potenció a partir de la pandemia de covid-19. Sin dudas, se trata de un ambicioso programa de inversiones y reformas de la Unión Europea de gran alcance que se propone lograr emisiones cero en 2050 y abarca la energía, la movilidad, la agricultura, la construcción y la industria; además, incluye objetivos intermedios para 2030, fecha en la que la UE reduciría las emisiones en un 55% respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, aunque la justicia climática está presente en la agenda del Pacto Verde Europeo, al momento de destinar fondos de resarcimiento para

comunidades que históricamente han sufrido impactos ambientales negativos, todo se detiene puertas adentro. Dicho de otro modo, en su afán por hacer una transición hacia las energías renovables, la UE apenas si considera su impacto en los territorios del Sur Global, como bien lo refleja la discusión en torno a la Ley de Materias Primas Críticas (a la que nos referiremos más adelante). Por otro lado, este pacto europeo aparece como un intento de cambio de la fuente energética, sin poner en cuestión el sistema energético y la lógica dominante del crecimiento en el marco de la acumulación capitalista.

A su vez, el caso del Green New Deal en los Estados Unidos es, en buena parte, aspiracional. Bajo el gobierno de Joe Biden (2021-2025), lejos se estuvo del Green New Deal promovido por el ala izquierda del Partido Demócrata –representada por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez– y sostenido por intelectuales como Naomi Klein.[8] Esta visión más radical apuntaba a la descarbonización de la economía y la creación de empleos verdes (en salud e infraestructura, entre otros), para lo cual proponía una movilización de la base material para las clases trabajadoras, de la mano de un Estado planificador y democrático. Al asumir la presidencia, Biden dejó en claro que ese no era su plan cuando habilitó millones de hectáreas para la explotación petrolera *offshore* y la expansión petrolera sobre el Ártico de Alaska, con el Proyecto Willow, desdiciéndose de sus promesas electorales y poniendo en peligro un ecosistema en extremo frágil y ya castigado por el derretimiento de los hielos.

Lo cierto es que la guerra en Ucrania –que no es el único conflicto belico existente, pero sí el de mayor impacto en términos energéticos– profundizó aún más las conductas y políticas esquizofrénicas o de *double bind* (doble vínculo), por utilizar los términos de Gregory Bateson (Bringel y Svampa, 2023). En la Unión Europea, la agenda de transición energética entró en tensión con la seguridad energética debido a su dependencia del gas ruso y el consiguiente peligro de desabastecimiento. Antes de la guerra hubo una amenaza de embargo petrolero a Rusia que disparó todavía más las cotizaciones del crudo y el gas. Entre el tercer trimestre de 2019

y el tercer trimestre de 2022, los precios del gas natural licuado (GNL) se multiplicaron prácticamente por 14, lo que impactó sobre el consumo de energía en los hogares europeos y generó escenarios de pobreza energética, fenómeno muy conocido por los sectores más vulnerables de América Latina y otras regiones del capitalismo periférico.

A mediados de 2022, mientras buscaba expandir el Pacto Verde Europeo, la UE no tuvo problemas en regresar al carbón, usando como justificación la crisis energética acelerada por la guerra en Ucrania. Curiosas vueltas de la historia: en Alemania fue el vicecanciller y ministro federal de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, de Los Verdes (en la alianza de gobierno con socialdemócratas y liberales), quien ordenó la demolición de una aldea para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito, el más contaminante de los combustibles fósiles. La foto de la joven activista sueca Greta Thunberg, detenida y tomada de brazos y pies por la policía alemana, recorrió el mundo.

Algo similar sucedió con la energía nuclear. Mientras España y Alemania continuaron con el programa de desmantelamiento, Francia, líder pronuclear en Europa y segundo país en el mundo en centrales nucleares (cincuenta y seis reactores en dieciocho centrales repartidas por todo el territorio que aportan cerca del 70% de la electricidad**)** redobló la apuesta y el presidente Emmanuel Macron anunció la construcción de ocho centrales nucleares de agua ligera, de cara a 2050, pese a que las olas de calor durante 2023 obligaron a reducir la producción de dos centrales por la amenaza sobre la provisión de agua refrigerada. Uno de los episodios de *Colapso* –serie televisiva francesa de 2020 que narra en breves capítulos escenas cotidianas de colapso sistémico (en un supermercado, en una estación de servicio, en un asilo de ancianos)– muestra cómo un ingeniero intenta enfriar, desesperadamente y con la ayuda de voluntarios, el combustible de una central nuclear arrojando baldazos de agua.

Simultáneamente, luego de años de infructuosa discusión, en medio de la guerra en Ucrania el Parlamento Europeo aceptó que las centrales nucleares y el gas para generar electricidad fueran

considerados "sostenibles" y obtuvieran el "sello verde", lo cual los hizo beneficiarios de los subsidios asociados a las energías verdes.

Por miedo al desabastecimiento, la Unión Europea habilitó energías consideradas controversiales (nuclear) y no limpias (gas natural) por la gran mayoría del campo ambiental. Pero fue en Alemania, la principal potencia europea, donde la tensión entre transición verde y demandas de "soberanía y seguridad energética" llegó más lejos. En ese país, la calefacción de la mitad de los hogares y el funcionamiento del sector industrial dependían en un 55% del gas ruso que llegaba por tubo. El temor duró poco: en tiempo récord, en diciembre de 2022, Alemania ya había puesto en marcha un primer buque regasificador (planta que permite importar gas natural licuado), al que siguieron otros proyectos regasificadores para independizar al país de la importación de gas ruso. En el apuro, no hubo estudios de impacto ambiental ni reclamos ecologistas. Las terminales gasíferas se situaron en el mar de Wadden, un ecosistema declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y tampoco se debatió si el despliegue de nuevas infraestructuras no prolongaría la dependencia alemana de los hidrocarburos, retrasando la transición energética hacia fuentes limpias (Sevillano y Fariza, 2022). En la actualidad, las importaciones de gas estadounidense representan casi el 23% del consumo de gas fósil de los trece países importadores de GNL de la UE, casi en su totalidad extraído mediante *fracking*. El caso es que la importación se hace desde los Estados Unidos, por lo que la guerra en Ucrania dejó a una Europa "presa del *fracking*".

Como parte del plan europeo de recuperación tras la crisis, Alemania presionó a los Estados miembro de la Unión Europea para que destinaran parte de los fondos del Pacto Verde al desarrollo del hidrógeno verde, una alternativa para generar energía "limpia" cuyos efectos son muy cuestionables, sin olvidar que la infraestructura tiende a desarrollarse en los países del Sur Global, sobre todo en América Latina y el norte de África. Como explica el investigador ítalo-mexicano Luca Ferrari (2023: 71):

> El hidrógeno no es un combustible, sino un vector, lo que implica que, al no encontrarse de manera independiente en la atmósfera, deba obtenerse mediante una inversión energética, la cual sigue dependiendo, en su mayoría, de combustibles fósiles, por lo que sus posibilidades de "enverdecer" la economía globalizada son, a lo mucho, limitadas.

El hidrógeno verde exige también una gran cantidad de agua dulce y electricidad para ser generado (electrólisis). La gran escala de estos proyectos en el Sur Global conlleva concentración de tierra y un uso intensivo de las energías renovables, que irán entonces a parar a la exportación. Vale decir que no serán usadas en clave de soberanía energética para sostener hogares, hospitales o escuelas en sus países de origen. Por ende, los megaproyectos de hidrógeno verde reforzarán aún más las asimetrías geopolíticas y la tendencia a la exportación de *commodities*, que deja presos a los países periféricos.

Por otro lado, la esquizofrenia también se ve expresada en el aumento de los subsidios e inversiones en combustibles fósiles y otras energías contaminantes, que prolongan la vida útil del modelo fósil. En 2022, según el FMI, los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron un récord histórico de 7 billones de dólares, lo que equivale al 7,1% del PBI mundial; esto duplicó los niveles de 2021, que ya eran casi cinco veces los de 2020 (Black, Parry y Vernon, 2023). Ese mismo año, las ganancias de las empresas petroleras también se multiplicaron: en 2022 BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Shell y Total Energies duplicaron sus ganancias a 219.000 millones de dólares**,** y superaron récords anteriores, mientras que Aramco, la petrolera saudí, anunció un beneficio neto anual récord de 161.100 millones de dólares, un 46% más que el año anterior (Samaniego y Robaina, 2023).

Por último, asistimos a la captura de ciertos espacios multilaterales, como las COP (Conferencia de las Partes) climáticas. En 2022, la COP27, realizada en Egipto, no solo arrojó magros resultados en

términos de políticas globales, sino que contó con la presencia de 636 grupos de presión de los combustibles fósiles, un 25% más que en la cita anterior en Glasgow. Como bien señalaron irónicamente algunos medios internacionales, esa fue "la delegación más numerosa de la COP". En 2023, la COP se reunió en Emiratos Árabes Unidos, un petro-Estado autoritario, y el acuerdo alcanzado abrió la puerta a soluciones muy controversiales –como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, el hidrógeno, la energía nuclear, las tecnologías de remoción de carbono mediante geoingeniería– que no solo no implican un cambio de paradigma global, sino que acentúan la mercantilización de la naturaleza. En 2024, la cumbre se realizó en Bakú, Azerbaiyán, otro petro-Estado autoritario, cuyo presidente habla del petróleo como "un regalo de Dios" y ya anunció un aumento en la producción de combustibles fósiles.

En suma, si bien continúa la inversión en proyectos de transición verde, hubo expansión de las energías extremas (*offshore*, *fracking*), récord de subsidios a los combustibles fósiles, récord de ganancias de las empresas fósiles y récord de lobby de los combustibles fósiles en espacios internacionales como las COP. En esa línea, la transición energética que se plantea, antes que un cambio de matriz, significa una adición de nuevas fuentes de energía a las fósiles ya existentes. Por otro lado, si bien el temor al desabastecimiento energético parece haber quedado atrás, aún no se descarta el peligro nuclear, dada la cantidad de centrales en zonas de guerra. Nada impide que haya una escalada bélica de mayor envergadura que comprometa las fuentes energéticas en algún lugar de un mundo cada vez más interdependiente. Nada impide tampoco que la consolidación de gobiernos de extrema derecha, con Donald Trump a la cabeza, impulsen aún más la refosilización del sistema energético y aceleren con ello la policrisis civilizatoria.

Nueva diplomacia de los metales y consenso de la descarbonización

Por todo lo dicho, resulta difícil encontrar rasgos de una transición energética sistémica en el contexto global. Las actuales experiencias están asociadas a la descarbonización, a través de una adición de fuentes energéticas que no incluye la reforma del sistema. Buena parte de estas propuestas plantean reducir la transición ecosocial a la transición energética. En este contexto, asistimos a un tipo de transición corporativa movilizada desde el Norte hacia el Sur Global, visible en la continuidad de un modelo energético con la misma lógica de concentración y de negocios propia del régimen fosilista y que perpetúa el esquema vertical de intervención territorial característico de los extractivismos depredatorios.

Lo que llamamos "transición energética corporativa" (Svampa y Bertinat, 2022) va más allá de la esfera empresarial, ya que cuenta con adeptos diversos, como empresas multinacionales, Estados (en sus múltiples escalas), instituciones y organizaciones que sostienen esta visión como la forma más rápida de responder a la urgencia de la crisis a partir de la introducción de nuevas tecnologías, más eficientes. Es una perspectiva que ve en la transición energética una oportunidad de negocios, un potencial de acumulación de riqueza y de posicionamiento hegemónico geopolítico, que busca asegurarse el control de la propiedad y el acceso a las fuentes energéticas, los materiales y las tecnologías necesarias. Se trata de una transición vinculada a la narrativa capitalista-tecnocrática, esto es, a una visión que confía en el rol de las tecnologías como herramienta de eficiencia sin cuestionar el modelo vigente de crecimiento asociado al capitalismo neoliberal ni alterar las lógicas de consumo ni las relaciones sociales preexistentes.

En esta línea, existen numerosas investigaciones críticas sobre cómo la transición energética impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte Global y países emergentes presiona cada vez más sobre el Sur Global. Para que China, los Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización, se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Varios ejemplos abonan esta dinámica: la extracción de litio y cobalto para la producción de baterías de alta tecnología para vehículos eléctricos que afecta brutalmente los salares altoandinos

en América Latina y el norte de África; la creciente demanda de madera balsa para la construcción de aerogeneradores destinados a China y países europeos destroza comunidades, territorios y biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana; o la nueva puja por infraestructuras de hidrógeno verde, que tiende a incrementar el acaparamiento de tierras al tiempo que orienta las instalaciones de energía renovables de los países periféricos a la exportación.[9]

Como sostienen los investigadores B. Fornillo y M. Argento (2025), en el plano geopolítico la importancia del mercado del litio ilustra la nueva configuración del poder mundial, marcada por la concentración en relación con la extracción del litio y la cadena global de valor. Por un lado, son pocos los países que controlan esa cadena, esto es, los que pueden realizar el camino desde la extracción del mineral (carbonato de litio) hasta la elaboración de la batería. Chile y la Argentina exportan carbonato de litio, una *commodity* sin valor agregado. Más allá de los anuncios recurrentes de "industrialización", los países del llamado "triángulo del litio" están muy lejos de controlar la cadena global que va desde los salares hasta las baterías. Por otro lado, no solo existe una batalla por el control de los minerales críticos, sino también por el control de saberes en la cadena de valor. En el extremo de esa cadena encontramos que los principales fabricantes de automóviles y baterías eléctricas son chinos (con empresas como BYD) junto con automotrices tradicionales, como Volkswagen y BMW, que producen en China (con contratos *joint venture*) y tienen un lugar destacado empresas nuevas dedicadas a la producción de autos eléctricos, como Tesla. A esto se suma que el control de la extracción también se encuentra en pocas manos: las estadounidenses Albemarle y Livent Corp, la chilena SQM, la australiana Orocobre, la china Ganfeng, entre otras.

Este proceso empieza a conocerse en el activismo y en la academia crítica como "extractivismo verde" o "colonialismo verde" o "energético": una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, sobre todo en el Sur Global, con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde. Junto con Breno Bringel, hemos

sostenido que el colonialismo verde es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, al que definimos como "consenso de la descarbonización" (Bringel y Svampa, 2023). Se trata de un acuerdo global –en construcción– que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías "renovables". Su objetivo es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, profundiza las desigualdades existentes al exacerbar la explotación de bienes naturales y perpetuar el modelo de comodificación de la naturaleza. Este tipo de transición energética ilustra una *narrativa capitalista tecnocrática* que pretende salir de la crisis a partir de soluciones de orden tecnológico, como si el problema fuera solo de orden técnico y no político.

Desde América Latina, y en particular desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, hemos hecho fuertes críticas a este proceso de transición energética asociado a una mirada tecnooptimista. En junio de 2023, realizamos una gira por Europa con una delegación de ocho activistas y académicos críticos de Asia, África y América Latina, en la cual presentamos el *Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular*,[10] donde proponemos un diagnóstico de la actual transición verde. Nuestro objetivo era dialogar con diferentes sectores políticos y ONG críticas de Europa acerca del carácter corporativo y crecientemente colonial de esa transición. Cuando arribamos al Parlamento Europeo en Bruselas se estaba debatiendo la Ley de Materias Primas Críticas, que define el marco normativo para el acceso a las treinta y cuatro materias primas críticas necesarias para la transición energética y digital. Bastaba con circular por los pasillos del Parlamento para escuchar como en un eco interminable y en diferentes lenguas la frase-obsesión del día: "¡Materias primas críticas!". Mantuvimos reuniones con diferentes bloques partidarios de la UE, sobre todo del Partido Verde, socialdemocrátas e izquierdas. Asimismo, se nos permitió hablar siete minutos en el hemiciclo del Parlamento. Sin embargo, las conversaciones fueron en una sola dirección. Para los

diferentes bloques europeos, el acceso a los minerales críticos para la transición está fuera de toda discusión.

Esta intervención focalizada nos brindó la posibilidad de ver y analizar *in situ* cómo piensa la UE la transición energética y digital en un contexto aún abierto a la discusión pública, en la medida en que no está hegemonizada por una extrema derecha negacionista, sino –todavía– por fuerzas políticas de centro y de centroizquierda. En realidad, estas fuerzas tienen muy claro que "el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para implementar el Pacto Verde" y que para ello es imprescindible "asegurar la oferta de materias primas sostenibles, en particular las necesarias para la tecnología renovable, digital, espacial y de defensa". En este contexto, en marzo de 2023 se presentó el "Reglamento de materias primas críticas", destinado a garantizar un suministro seguro y sostenible para la Unión Europea, que contó con un trámite mucho más expeditivo que otras leyes.

Baste recordar que las materias primas incluidas son un listado de materiales identificados por la Comisión Europea que requieren una atención especial debido a su importancia económica y al alto riesgo que supondría una interrupción de su suministro. Si en 2011 este inventario contenía veinte minerales, en 2023 el número se había ampliado hasta incluir treinta y cuatro materias primas[11] necesarias para la transición energética (paneles solares, turbinas eólicas) y la transición digital (sobre todo, conductores), que atañen al funcionamiento tanto de la industria como de la defensa. Hay que añadir que el único país que cuenta con la casi totalidad de este listado, que incluye además las codiciadas tierras raras, es China. Las tierras raras son un grupo de diecisiete elementos químicos metálicos que se encuentran en la tabla periódica. Son escasos en la naturaleza y se utilizan para la fabricación de productos tecnológicos y armamento. El 40% de las reservas de tierras raras se encuentran en China. Desde teléfonos móviles y computadoras, pasando por vehículos híbridos, hasta armas y equipos médicos requieren tierras raras para su fabricación. La clave radica, en parte, en sus grandes capacidades magnéticas.

En el marco de una puja geopolítica en la que compite desde una posición rezagada con China, los Estados Unidos y Japón, la UE se lanzó a una carrera para garantizar la "seguridad jurídica" a los capitales con bases normativas y legales que posibilitaran la mayor rentabilidad empresarial. Es la "nueva diplomacia de los metales", como dijimos al inicio de este capítulo.

Sin embargo, como se explica en un informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales, la estrategia propuesta por la UE no conduce a un suministro sostenible de minerales críticos para Europa, ya que agravará los riesgos para los derechos humanos y el ambiente en los países del Sur, socavará la dinámica económica en los países socios y continuará reforzando el consumo insostenible en los países ricos. Por otro lado, no es casual que en los nuevos tratados bilaterales de comercio que negocia la UE (entre otros, con Chile y México) se hayan incorporado capítulos de energía y materias primas para garantizar un acceso a los minerales críticos para la transición. Como sostienen Ghiotto, Barcena y Muller (2024):

> La UE promueve estos TLC [tratados de libre comercio] e instrumentos relacionados, como las asociaciones estratégicas sobre materias primas, y los presenta como asociaciones en las que "todos ganan": la UE obtiene acceso a las materias primas críticas necesarias y ayuda a los países proveedores a desarrollar capacidades de procesamiento para avanzar en la cadena de valor de la economía verde. Sin embargo, con más de veinte años de experiencia con los TLC entre la UE y los países del Sur Global, la pregunta es si se puede cumplir la promesa europea y si los TLC son el instrumento más apropiado para ayudar a los países a salir de la trampa de recursos en la que se han mantenido durante siglos.

Así, lo novedoso en la actualidad es la multiplicación de megaproyectos corporativos y nuevas presiones extractivas sobre los

territorios del Sur, ahora en nombre de la "transición verde". Las asimetrías históricas y el legado colonial no solo persisten sino que se profundizan, impulsando las fronteras del neoextractivismo en el Sur Global, muy particularmente la minería, que es además una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Esto conlleva también una expansión de la deuda ecológica. La exacerbación en la extracción de minerales se orienta a la exportación, para asegurar el proceso de descarbonización de los países centrales, sin tener en cuenta lo que esto significa en términos de nueva fase de despojo –recargada– para el territorio y la vida de millones de personas del Sur Global.

Asimismo, numerosas proyecciones vienen alertando sobre el hecho de que, planteada de esta manera, la transición energética es insostenible desde el punto de vista metabólico. El propio Banco Mundial (Hund y otros, 2020) señalaba que la extracción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de allí a 2050 para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de 3000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, además de su almacenamiento, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 ºC en el futuro. Los informes más recientes son aún más preocupantes en lo que atañe al aumento del uso de "minerales para la transición". Como sostiene el periodista francés Guillaume Pitron (2021), "cientos de miles de turbinas eólicas, algunas más altas que la torre Eiffel, serán construidas en los próximos años y exigirán enormes cantidades de cobalto, zinc, molibdeno, aluminio, zinc, cromo… entre otros metales".

En suma, la transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética, mucho menos a una adición de nuevas fuentes que garantizan la continuidad de un modelo insustentable. Esta visión tecnooptimista continúa ignorando las fronteras planetarias, pues no hay planeta que aguante ni litio ni minerales críticos que alcancen si no se cambian los modelos de movilidad y los patrones de consumo. El hecho de que las baterías de litio, al igual que los

proyectos eólicos y solares, requieran también minerales (cobre, zinc, entre muchos otros) debería alertarnos sobre la necesidad de una reforma radical del sistema de transporte y del modelo de consumo existentes. En otras palabras, la transición energética corporativa, basada tanto en el crecimiento económico como en la exacerbación de la extracción de minerales, es de corto alcance o de "patas cortas", mucho más en un contexto de agravamiento tanto de la crisis climática como de los conflictos socioambientales.

¿Y por China cómo andamos?

Una característica importante del momento actual se vincula con la complejidad de las relaciones internacionales en un mundo multipolar marcado por la puja interimperial, donde la geopolítica se transforma en geoeconomía y colonialismos múltiples. No es solo la Unión Europea, carente de minerales críticos, la que busca acceso directo. China, pese a contar con ellos, se encuentra mejor posicionada en el Sur Global, donde desde hace casi dos décadas viene realizando inversiones muy agresivas en los sectores extractivos estratégicos, y es el socio comercial más importante para muchos países de la región y del mundo.

Contrariamente a lo que creen algunos, China está apostando fuerte a la transición energética. No olvidemos que es responsable del 27% de las emisiones de CO_2 y un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Con 1400 millones de habitantes, China continúa consumiendo mucho carbón, pero si en 2007 el 80% de su generación eléctrica provenía del carbón, en 2022 ese porcentaje se redujo al 61% (Fresco, 2024: 203-205). Ciertamente, el país tiene graves problemas de contaminación urbana, lo cual genera además serios problemas de salud. Pero si bien es el mayor emisor de CO_2 en términos absolutos del planeta, no lo es en términos relativos; por ejemplo, sus emisiones *per capita* son casi las mismas que las de Alemania.

Por otro lado, el rol de China como "fábrica del mundo" no tiene parangón. No hace mucho se publicó un libro blanco –esto es, un documento de fondo del gobierno– titulado "La transición energética de China" (*Xinhua Español*, 2024) que busca mostrar los logros históricos del país durante la última década en electrificación y nuevas tecnologías renovables. Así, China da cuenta del 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y la empresa BYD es la principal fabricante de autos eléctricos en el mundo. En 2023, exportó 1,2 millones, un 80% más que en 2022. En 2024, elevó sus ventas en un 41,26% hasta alcanzar los 4,27 millones de unidades, y superó así el objetivo de 3,6 millones que se había marcado para el ejercicio (*Swissinfo*, 2025). Los principales mercados compradores fueron Europa y la región de Asia-Pacífico. Se estima que alrededor del 45% de todos los vehículos vendidos en China en 2024 podrían ser eléctricos. También es el mayor fabricante de casi todas las tecnologías ligadas a energías renovables en el planeta: el 85% de los paneles solares, el 75% de las baterías de litio. A eso se agrega que el 60% de las tierras raras, tan preciadas para la transición digital, están en China. Y además es uno de los pocos países que controlan la cadena global del litio, desde la extracción del carbonato de litio, hasta la batería.

Los diferentes países latinoamericanos vienen desarrollando un fuerte vínculo comercial con China. De hecho, según la Cepal, entre 2000 y 2022 el comercio entre China y América Latina se multiplicó por 35. El informe de la Cepal (2024) muestra también que China busca extender su influencia en América Latina con una estrategia de inversión a través de la Nueva Ruta de la Seda: uno de los principales mercados para diez países, la mayoría de los cuales se encuentran en el sur de la región. Además, a partir de 2023, China estableció acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, y hasta la fecha veintiún países latinoamericanos se sumaron a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China.

Una de las particularidades de la nueva dependencia que genera China con los países latinoamericanos es que, si bien sus inversiones apuestan al largo plazo y se ubican en diferentes sectores

(agronegocios, minería, petróleo, infraestructura ligada a actividades extractivas), en términos de transferencias tecnológicas –muy particularmente en relación con la transición verde– se tiende a usar tecnología china de punta, lo cual incluye también, a veces, mano de obra de ese país.

Por otro lado, el ingreso de China a la región ilustra muy bien la distancia existente entre los discursos soberanistas en clave latinoamericana y los hechos. Hacia 2007, cuando esta gran potencia emergente hizo su ingreso a América Latina en términos comerciales, de la mano de Hugo Chávez, muchos argumentaron que esto ampliaría los márgenes de autonomía de la región respecto de la hegemonía estadounidense. Sin embargo, en términos comerciales, la relación con China estuvo lejos de afianzar una relación simétrica. Todo lo contrario: los países latinoamericanos prefirieron negociar de modo unilateral acuerdos y tratados de libre comercio con China, agudizando la competencia entre ellos como exportadores de *commodities*. Esto echó por tierra las posibilidades de afianzar la integración latinoamericana y redujo las posibilidades de un vínculo más igualitario con el gigante asiático desde un bloque regional común. Además, la localización de las empresas chinas y los préstamos contra *commodities* tendieron a potenciar las actividades extractivas en detrimento de otras con mayor valor agregado, reforzando el efecto reprimarizador de las economías latinoamericanas durante el llamado boom de las *commodities* (2003-2013).

Antes mencionamos a Ecuador, que se convirtió en el vendedor número uno del mundo de madera balsa, utilizada para fabricar las palas o aspas de los aerogeneradores (energía eólica). El 85% de la madera balsa que se extrae del país andino tiene como destino China, debido a la aceleración de la agenda de transición energética. Así, en 2019 y 2020, una oleada de inversionistas chinos precipitó el caos en la tala de madera balsa, lo que amenaza la Amazonía ecuatoriana, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Las consecuencias de la extracción descontrolada están a la vista: deforestación, tala ilegal, contaminación de aguas, prostitución,

consumo de drogas y alcohol y conflictos entre comunidades (Acción Ecológica, 2021).

En consecuencia, la relación comercial entre China y América Latina –y esto cuenta también para la agenda de transición energética– viene a consolidar asimetrías y profundizar el neoextractivismo en clave neodependentista. Los flujos de inversión extranjera directa provenientes de China se establecen mayoritariamente en actividades extractivas (minería, petróleo, megarrepresas) y en energía nuclear. Incluso las inversiones en el sector terciario se orientan al apoyo de las actividades extractivas y, si estas requieren obras de infraestructura, se encargan a empresas chinas con cuadros gerenciales de esa nacionalidad. Estos flujos de inversión extranjera directa no apuntan a desarrollar capacidades locales ni tampoco actividades intensivas en conocimiento o encadenamientos productivos (Svampa y Slipak, 2024).

Por último, si volvemos a la puja interimperial, esta se completa con los Estados Unidos. Aunque los temas de transición parecen estar ausentes en las declaraciones del Departamento de Estado, el interés de los Estados Unidos en las riquezas de América Latina nunca se ha aplacado, tal como lo evidencian diferentes declaraciones de la exjefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson. En enero de 2023, en un evento del Atlantic Council –un *think tank* que tiene lazos con la OTAN–, enumeró abiertamente las razones del interés de los Estados Unidos por la región: litio, petróleo, tierras raras y agua dulce (*Página/12*, 2023). Quien más estrechó lazos con los Estados Unidos en los últimos tiempos, aun antes de que Donald Trump asumiera por segunda vez la presidencia, fue Javier Milei, el presidente argentino, quien durante 2024 recibió dos visitas de Richardson para afianzar sus vínculos con el país e instalar una base de cooperación en el sur. Por último, cabe recordar que Rusia, actor importante en un mundo multipolar y gran potencia extractivista, está lejos de tener el alcance de las potencias mencionadas en el campo de disputa por la transición energética.

La otra pata de la descarbonización

El paradigma de la transición energética corporativa y su narrativa tecnocrática-capitalista se completa con la expansión de las soluciones basadas en la geoingeniería y el desarrollo del mercado de carbono para llegar a emisiones netas cero. Este modelo de "crecimiento verde" se fue delineando en las últimas décadas, pero encontró mayor empuje luego de la crisis financiera de 2008 y, por supuesto, a partir de la pandemia del covid-19. Su objetivo es retirar el CO_2 de la atmósfera y puede estar basada en soluciones naturales (reforestación) o tecnológicas (captura y secuestro de carbono) (Masera, 2023). Parte de la premisa de que las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser compensadas en su totalidad por opciones que retiran CO_2 de la atmósfera (emisiones negativas). Para cerrar este capítulo, veremos brevemente en qué consisten la geoingeniería y los mercados de carbono.

La geoingeniería se basa en el principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global a partir de una intervención deliberada sobre el clima a escala planetaria, sin por ello tener que reducir las emisiones o atender las causas de fondo. En tanto tecnología, supone una manipulación que entraña riesgos y varios efectos colaterales. Sin embargo, genera cada vez más expectativas entre quienes buscan mantener los actuales patrones de desarrollo –el sistema de producción, circulación y consumo de mercancías–. Algunos de sus promotores están ligados a la industria de los combustibles fósiles; otros, de modo más general, a una visión tecnooptimista. El caso es que desde hace un tiempo la hipótesis de la geoingeniería abandonó el ámbito de la ciencia ficción para integrarse a una agenda *proestablishment*, un proyecto de continuidad del capitalismo y sus estándares de vida para las élites de poder mundial.

Las posturas a favor de la geoingeniería minimizan los impactos directos reales, que según la tecnología desarrollada pueden ir desde sequías intensas y prolongadas en determinadas regiones del planeta (manejo de la radiación solar) hasta generación de zonas

muertas en los océanos (fertilización marítima) o colonización de millones de hectáreas (técnicas de captura y almacenamiento de carbono llamadas "emisiones negativas"). Asimismo, las técnicas de geoingeniería pueden producir alteraciones meteorológicas. Por ejemplo, una de las intervenciones sobre el clima consiste en inyectar sulfuro en la estratósfera, lo cual no conlleva una disminución de las concentraciones de CO_2, sino que las pospone. Esta técnica imita las erupciones volcánicas, que reducen la temperatura mediante la liberación de sulfato. Esto fue demostrado en 1991, cuando la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas disparó unos 20 millones de sulfuro y produjo una disminución de la temperatura global de 0,4 ºC. Sin embargo, al año siguiente disminuyeron las lluvias y hubo una baja afluencia de aguas. Así, habría regiones y países que estarían expuestos a las consecuencias (sequías o mayor cantidad de precipitaciones) pues no existen predicciones certeras sobre lo que podría suceder. De modo que el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

Además, implicaría ceder el control del termostato del planeta a las grandes potencias globales que cuentan con esas tecnologías, instalando lo que algunos autores denominan un "Leviatán climático", esto es, una suerte de soberanía planetaria autoritaria que "tome el control, declare una emergencia y traiga orden a la Tierra, todo en nombre de salvar la vida" (Mann y Wainwright, 2018: 67); un sistema de gobernanza global que decidiría quién, cómo y hasta dónde cada país o región puede emitir gases de efecto invernadero. Pese a ello, la expansión de técnicas de geoingeniería de remoción de carbono ha generado optimismo entre las corporaciones fósiles que consideran que estas tecnologías "son esenciales para salvar la producción de carbón, asegurar el futuro del petróleo y el gas, y 'desbloquear' el carbono que ahora se considera 'no quemable' por estar fuera de 'alcance'" (Ribeiro, 2023: 119).

Por otro lado, el modelo de "crecimiento verde" genera numerosos cuestionamientos porque implica una mercantilización de la naturaleza. Consiste en ponerle precio, al considerar que las

funciones de los ecosistemas pueden ser tratadas como mercancía y que, por lo tanto, sus "servicios" deben cobrarse (Pnuma, 2019: 44). Así, estas políticas promueven incentivos basados en el mercado para reorientar las inversiones del capital hacia las inversiones verdes; entre ellos, algunos nuevos mecanismos de financiación, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+). Esta iniciativa tiene por objetivo "la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del *stock* de carbono de los bosques en los países en desarrollo" (COP de Bali, 2007, cit. en Svampa y Viale, 2020). Estas soluciones de mercado consisten básicamente en ponerle un precio al carbono y focalizar el problema no en evitar el daño, sino en compensarlo comprando bonos de carbono. Los mecanismos de compensación funcionan, así, como permisos de contaminación ambiental. Por ejemplo, una empresa que hace *fracking* en Vaca Muerta (Argentina) puede compensar comprando bonos de conservación de un bosque en Costa Rica o en Kenia. No es que reduzcan sus emisiones *per se*, sino que aceptan ejecutar "soluciones basadas en la naturaleza", financiando proyectos de reforestación o conservación de bosques.

En líneas generales, se trata de mercados muy opacos, con escasas o incipientes regulaciones, cuya expansión acelerada genera un proceso de disputa por los bosques existentes y abre jugosos negocios a empresas, certificadoras, *brokers* financieros, ONG, supuestamente en pos de la deseada descarbonización. Todo ello está dando como resultado la construcción de una trama financiera multiactoral compleja en la cual tallan banqueros, gestores de alto riesgo, fondos de inversión y capitalistas de riesgos. Asimismo, se trata de una política ambiental que

> se fundamenta en dos mitos que, a pesar de ser infundados, son hegemónicos en el discurso ambiental: que el crecimiento económico se puede "desvincular" de sus impactos sobre la naturaleza y que es posible generar soluciones "ganar-ganar" en el contexto de la protección del

> ambiente –en las que gana el ambiente y gana el inversionista– (Lang, 2024).

Pueden distinguirse además dos tipos de mercados de bonos. Por un lado, los mercados "obligatorios", que vinculan a las naciones que aceptaron y adoptaron los límites de emisiones establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Este mercado está regulado mediante planes de reducción del carbono a nivel internacional, regional y subnacional, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio regulado por el Protocolo de Kioto, el Plan de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS) y el Mercado de Carbono de California, entre otros. A nivel nacional, la regulación depende del gobierno federal o estatal. Por otro lado, hay también un mercado internacional voluntario de créditos de carbono que carece de regulación estatal y no se integra en las metas oficiales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero permite que las empresas privadas y particulares adquieran bonos de carbono para compensar las "emisiones residuales" y llegar, supuestamente, a proyectos de *net zero* (cero emisiones) (Tornel y Montaño, 2023: 151-152). Este mercado es terreno propicio para turbios mediadores, como los *carbon cowboys*, que ven en la conservación un próspero negocio en medio de vacíos legales a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, desde 2021 se viene denunciando la manipulación y estafa a comunidades indígenas y afro en la Amazonía (a las cuales se les prometen grandes ganancias por conservar lo que siempre han conservado), sin respetar los procesos de consulta previa o que incluso buscan apropiarse de las tierras ancestrales, no tituladas.[12] En Brasil, ya existen varios casos de *carbon cowboys* acusados de "apropiación indebida de tierras públicas" (Antúnez, 2024).

En suma, este proceso de financiarización de la conservación se ha ido convirtiendo en una "ideología dominante" promovida por el Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea. A través de los créditos de carbono y de biodiversidad se instala la idea de que "salvar el mundo" debe convertirse también en un acción lucrativa. Como en el

caso de la geoingeniería, al no cuestionar el dogma del crecimiento económico, son mecanismos que no apuntan a reducir emisiones, sino a perpetuar el uso de combustibles fósiles.

* * *

La *narrativa capitalista tecnocrática* apuesta a salir de la crisis a partir de soluciones de orden tecnológico, sin generar cambios en el perfil metabólico de la sociedad ni cuestionar el crecimiento económico. Desde una perspectiva procesual, el consenso de la descarbonización incorpora y potencia lo que en otro lugar llamé el "consenso de las *commodities*" (Svampa, 2013), al tiempo que retoma elementos del Consenso de Washington. Entre ellos, el discurso de la inevitabilidad, que plantea que no hay otra alternativa. Si en los años noventa era el proyecto neoliberal y en los 2000 el consenso extractivo exportador, hoy el consenso de la descarbonización pretende instalar la idea de que, dada la urgencia climática, no hay otra transición energética posible que la corporativa y otras soluciones tecnológicas, que lejos están de abordar los problemas de fondo.

Estos acuerdos suponen una mayor concentración de poder en actores no democráticos (grandes corporaciones, actores financieros y organizaciones internacionales) que socavan las posibilidades de una gobernanza democrática, mucho más en un contexto conflictivo de "transición". La búsqueda constante por la ampliación de las fronteras capitalistas supone, en todos estos casos, el fomento de megaproyectos relacionados con el control, la extracción y la exportación de bienes naturales. Para ello, se apuesta a garantizar "seguridad jurídica" a los capitales con bases normativas y legales que posibiliten la mayor rentabilidad. En consecuencia, se advierte un problema mayor con relación al ingreso en los territorios y el respeto a las poblaciones. En no pocos casos, la extracción de litio o la "minería para la transición" avanzan sin licencia social o dividiendo a comunidades vulnerables, sobre todo indígenas, que habitan esos

territorios y denuncian el sobreconsumo de agua y sus impactos. Por ejemplo, en las Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, desde 2010 existe un conjunto de comunidades indígenas (conocidas como "las treinta y tres comunidades") que rechaza la extracción de litio en sus territorios y demanda una consulta previa, libre e informada, de la mano de una perspectiva holística y ancestral del territorio. Estas comunidades consideran el salar como "un ser vivo, dador de vida" y tienen como lema "El agua y la vida valen más que el litio", como se vio reflejado en el Aerocene Pacha, un globo aerostático sin combustible que el artista argentino Tomás Saraceno[13] elevó en enero de 2020 en las Salinas Grandes.

Asimismo, aunque tanto el consenso de las *commodities* como el consenso de la descarbonización poseen una lógica extractivista, los productos y minerales requeridos se han ampliado. En el primer caso, son fundamentalmente productos alimentarios, hidrocarburos y minerales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, la bauxita y el zinc, mientras que en el segundo, además de los minerales mencionados, el foco de interés recae en los llamados minerales críticos para la transición energética y digital, como el litio, el cobalto, el grafito, el indio, entre otros, y las tierras raras. En ambos casos, la extracción y la exportación de materias primas tienen consecuencias graves en términos de destrucción ecológica y generación de dependencia. Sin embargo, un aspecto clave que diferencia al "extractivismo verde" del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimarlo, ya que los actores que lo promueven afirman que es sostenible y es, además, la única vía posible para hacer frente a la emergencia climática (Bringel y Svampa, 2023).

En esa línea, una transición energética que exacerba la extracción de minerales chocará de modo inevitable con las resistencias existentes en el Sur Global, en particular en América Latina. Baste recordar que la minería a gran escala es una de las actividades más cuestionadas en la región, ya que, además de consolidar un marco normativo favorable a las grandes corporaciones, tiene fuertes impactos ambientales y tiende a imponerse de modo vertical sobre los territorios, violentando procesos ciudadanos y generando una

fuerte criminalización de las luchas. La minería ilustra como pocas figuras del extractivismo un "modelo de ocupación territorial" (Antonelli, 2009) y pone en marcha la ecuación "a más extractivismo, menos democracia" (Svampa, 2016). En países como la Argentina, donde existe una nueva legislación como el RIGI, no solo se incrementará la aceleración y la cantidad de esos proyectos, sino también la criminalización y represión de estas luchas.

Por otro lado, la narrativa tecnocrática capitalista encuentra en la expansión de metodologías basadas en las "emisiones negativas" una exacerbación del proceso de mercantilización de la naturaleza, que ya ha traído consencuencias muy destructivas y que en un contexto de mercados poco transparentes amenaza con generar nuevos procesos de despojo territorial. Tampoco conllevan una reducción real de emisiones, incluso cuando se ha exagerado la capacidad de captación de CO_2 a través de soluciones naturales o tecnológicas.

Por último, en términos filosóficos, la geoingeniería se encuentra lejos de ser un llamado a la autolimitación humana. Antes bien, privilegia las soluciones tecnológicas que ven a la naturaleza como algo completamente manipulable, marcando una continuidad agravada del paradigma antropocéntrico moderno. En realidad, su aspiración última es "rehacer" la naturaleza, adaptándola al patrón de desarrollo vigente. Sin duda, estas técnicas, que ya aplican algunas corporaciones de Silicon Valley, están llamadas a tener mayor prensa en el futuro pese a que, al no reducir la concentración de gases de efecto invernadero, funcionarían solo a corto plazo. Tampoco están pensadas como un medio, problemático o indeseado, que se inscribe en un proceso de transición ecosocial justa. Antes bien, su objetivo es el de perpetuar un modelo de desarrollo hegemónico. En fin, no sería descabellado que incluso negacionistas como el presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto de agravamiento de la crisis climática, abandonen parcialmente ese campo y se conviertan en fervorosos defensores de la geoingeniería con el objetivo de "salvar" al capitalismo.

[8] El Green New Deal tuvo un origen reformista-conservador, asociado a ciertos sectores partidarios de la economía verde. Surgió entre 2007 y 2008, en Europa, en el marco del Plan 20-20-20 (20% de reducción de emisiones GEI y 20% de energías renovables para 2020), lo que buscaba ubicar a la UE a la vanguardia para afrontar el cambio climático. El Partido Verde alemán y otros partidos verdes europeos lo adoptaron entonces como plataforma política. Sin embargo, en febrero de 2019 fue Alexandria Ocasio-Cortez quien logró darle una radical vuelta de tuerca. Para el tema, ver Svampa y Viale (2020).

[9] Ver, además de Svampa y Bertinat (2022), Lang y otros (2023), Svampa y Bertinat (2022), Sánchez Contreras y Matarán Ruiz (2023), Clacso (2023), Hamouchene (2024).

[10] Ver Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (2023).

[11] Las treinta y cuatro materias primas críticas son: antimonio, arsénico, bauxita, barita, berilio, bismuto, boro, cobalto, carbón coquizable, cobre, feldespato, fluorita, galio, germanio, hafnio, helio, elementos pesados de tierras raras, elementos ligeros de tierras raras, litio, magnesio, manganeso, grafito natural, níquel (grado de batería), niobio, fosfato de roca, fósforo, metales del grupo del platino, escandio, silicio metálico, estroncio, tantalio, titanio metálico, tungsteno y vanadio.

[12] Ver el episodio "Los *carbon cowboys*: los especuladores de los bosques colombianos" del podcast *A Fondo*, de M. J. Duzán, <n9.cl/2yqi7>.

[13] Ver <n9.cl/d4szaz>.

3. Entre el colapso del progresismo y los límites del neodesarrollismo

> Entre el relato y la realidad hubo mucha diferencia: todos queríamos *vivir* en el país del otro, porque lo que estábamos viendo era el relato.
> **Julio Fuentes, 2017, sobre los progresismos latinoamericanos**

> Una salida basada en el mandato exportador, sea la propuesta por el neoliberalismo o la del neodesarrollismo predominante, además de no cuestionar las consecuencias ambientales o sociales ni el estilo de desarrollo, no parece ser suficiente para superar la restricción externa si no se solucionan problemas centrales, como el endeudamiento externo, la falta de instrumentos de ahorro en la moneda doméstica, la excesiva extranjerización económica y la escasa reinversión productiva del excedente.
> **F. Cantamutto, M. Schorr y A. Wainer, *Con exportar más no alcanza*, 2024**

Hace tiempo que el progresismo latinoamericano se halla en estado de implosión. No es ninguna novedad. Primero se fue apagando como *ciclo*, hacia 2015, cuando dejó de ser un ambicioso movimiento regional caracterizado por un lenguaje común que alineaba diferentes gobiernos sudamericanos; luego se fue deshilachando como *campo* ligado a cierto consenso o valores transversales al compás de la concentración y personalización del poder en los Ejecutivos y el surgimiento de las derechas antiprogresistas; hoy, a la luz de lo que sucede en varios países de la

región, parecería extinguirse como *imaginario* o *narrativa política alternativa*. Esta crisis de los progresismos gubernamentales –que no es un cierre silencioso ni un gemido, sino un estallido, una implosión– preocupa y desvela porque va más allá del progresismo y afecta al conjunto de las narrativas de cambio, vinculadas a derechos múltiples, en un contexto que pretende cuestionar su legitimidad y catapulta al centro de la escena política a las derechas radicales y autoritarias que hoy se expanden por doquier.

En razón de ello, en este capítulo me propongo actualizar la lectura sobre las diferentes crisis de los progresismos latinoamericanos, sus promesas, sus límites y sus puntos ciegos.

Las promesas de los progresismos

Hagamos un poco de historia; sucinta y abreviada. El ciclo progresista, la llamada "marea rosa", arrancó en el año 2000 en América del Sur, generando grandes expectativas políticas de cambio. Se construyó una *lingua franca* en torno a varios ejes compartidos: la crítica al neoliberalismo, la promoción de políticas económicas heterodoxas, la promesa de la inclusión social, el rol creciente del Estado, el latinoamericanismo desafiante y también, no debemos olvidarlo, el neodesarrollismo extractivista que se expandió junto con la conflictividad socioambiental.

A lo largo del ciclo progresista (2000-2015), hubo quienes tendieron a identificar, de manera más o menos automática, progresismos con izquierdas. Sin embargo, a escala nacional y regional, desde las izquierdas, el esclarecimiento de lo que se entendía por progresismo fue objeto de ásperos debates e interpretaciones, sobre todo en relación con cuestiones ligadas a la concepción del cambio social, el rol de los movimientos sociales y los estilos de desarrollo. Estas pujas revelaron la tensión entre diferentes narrativas políticas de pretensiones descolonizadoras, sobre todo entre la narrativa nacional-desarrollista, muy ligada a la

visión tecnooptimista, y la indianista[14] e incluso la (incipiente) ecologista, que tuvieron protagonismo en el cambio de época (año 2000), esto es, en el proceso de cuestionamiento de la hegemonía neoliberal y la apertura de un nuevo escenario político. La narrativa nacional-desarrollista, actualizada en clave de neoextractivismo, iría articulándose con otras dimensiones propias de la tradición populista latinoamericana, tan profundamente arraigada en nuestras latitudes, lo que con el correr de las aguas daría lugar a un *populismo progresista de alta intensidad*,[15] en sus diferentes expresiones.

Uno de los elementos más relevantes del *ciclo progresista* es que sus gobiernos fueron traccionados por fuerzas y energías sociales muy movilizadas que apostaban a más democracia, nunca a menos. Así, hubo nuevas Constituciones fundacionales, como la de Ecuador, que sancionó los derechos de la naturaleza, instalando un paradigma relacional inédito; y la de Bolivia, que incluyó la plurinacionalidad del Estado y abrió el espacio de representación y reconocimiento pleno de los pueblos indígenas; se crearon consejos comunales venezolanos en los tiempos de Hugo Chávez –algo así como "sóviets" sentados sobre barriles de petróleo o un "socialismo petrolero"–, y, en Brasil, un Lula todavía vigoroso desde su origen obrero-sindical prometía un programa social que terminaría con la pobreza.

En la Argentina, el kirchnerismo como vertiente progresista del peronismo ató su promesa fundacional a la crisis de 2001, una crisis sistémica e hiperbólica que casi se lleva puesto al conjunto de la clase política y económica; hoy se diría la "casta". Sin la radicalidad de otros regímenes latinoamericanos, pero al calor de una crisis extraordinaria, la promesa de Néstor Kirchner no fue dinamitar a la casta política sino acercar a representantes y representados; a esto se sumó la voluntad de controlar las movilizaciones plebeyas y de clase media para volver a poner a la política en el centro de la esfera institucional. Por eso, su apuesta política inicial fue remover a una Corte Suprema de Justicia desacreditada y vincularse con las luchas en defensa de los derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas a la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Esto conllevó una revalorización del progresismo, también en clave de

"justicia social", asociado a una política de empleo, reducción de la pobreza y contención e incorporación de diferentes movimientos sociales, entre ellos, los desocupados, mediante una batería de planes sociales, parte de la cual ya había sido puesta en marcha por el gobierno provisional de Eduardo Duhalde (2002-2003).

A partir de 2008, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) le daría su impronta personal al peronismo progresista desde el poder, en la que convergían un liderazgo casi magnético en el uso de la palabra con un populismo nacionalista más centralizado y un estilo político rígido, con escasa capacidad de gestión del conflicto y de diálogo con actores diferentes. El progresismo de CFK, aunque extremadamente vertical en su vínculo con el conjunto de los actores sociales y políticos, apuntaba a una narrativa de derechos. A las políticas de inclusión social –por vía del consumo y planes sociales– y de derechos humanos con relación al pasado dictatorial, se sumarían la de la diversidad sexual (matrimonio igualitario y disidencias) y, a partir de 2015, la "marea verde" feminista, convertida en un movimiento de movimientos, que lograría, en su segundo intento, bajo el gobierno de Alberto Fernández, la legalización del aborto (2020) y la promoción de una política más activa de género y diversidades.

Volviendo a la escala latinoamericana, durante esos quince años (2000-2015) mucha agua corrió bajo el puente. La construcción de la hegemonía progresista estuvo impulsada por el boom de las *commodities* y la reducción de la pobreza. Hacia 2012, un informe de la Cepal daba cuenta de la caída global de la pobreza (de 44% a 31,4%) entre 2001 y 2011, así como del descenso de la pobreza extrema (de 19,4% a 12,3%). En todos los países, este descenso estuvo ligado no solo al aumento de salarios, sino también a la expansión de una política de bonos o planes sociales (programas de transferencia condicionada).

En línea con la reducción de la pobreza, los trabajos basados en el coeficiente de Gini daban cuenta de una reducción de la desigualdad, entre 2002 y 2010, que incluía a diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, varios autores matizaron estas afirmaciones. El economista Pierre Salama (2012: 26) sostuvo que

los datos disponibles solo medían períodos cortos y no permitían una mirada de largo plazo.[16] Por otro lado, la baja en la desigualdad de ingresos estuvo atada a un aumento de los salarios, pero no a una reforma del sistema tributario, que continuó siendo muy complejo, opaco y sobre todo regresivo (Salama, 2015).

Hoy sabemos que parte importante del crecimiento económico en América Latina durante el boom de las *commodities* fue capturada por los sectores más ricos de la sociedad. Datos de la revista *Forbes* muestran que la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos (con fortunas superiores a mil millones de dólares) creció a un ritmo del 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento seis veces superior al del PBI de la región (3,5% anual) (Benza y Kessler, 2021: 86). En 2013-2014, según Oxfam (2021), el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con el 37% de los ingresos; pero si se medía la riqueza, estos datos ascendían de modo abrumador, mostrando que el 10% más rico acumulaba el 71%, mientras que el 1% más privilegiado se quedaba con el 41%.

Por encima de la polarización política, los progresismos fueron consolidando un esquema de gobernanza, un pacto social, en el cual la tendencia a la inclusión social (expansión de derechos, beneficios a los sectores más postergados e inclusión por el consumo) convivió –aun de manera contradictoria– con el pacto con el gran capital (agronegocios, sectores extractivos, e incluso sectores financieros en algunos casos). Pese al proceso de nacionalizaciones (que habría que analizar caso por caso, país por país), los progresismos establecieron alianzas con grandes corporaciones transnacionales y aumentaron su peso en la economía nacional. Ejemplos sonantes son Ecuador, donde las empresas más importantes incrementaron sus ganancias respecto del período anterior; la Argentina, que durante el ciclo kirchnerista mostró una mayor concentración y extranjerización de la cúpula empresarial; y Brasil, donde el consenso lulista impulsó la alianza con el sector del agronegocio al tiempo que favoreció al sector financiero.

La crisis llegó en 2011 con la caída del precio de las *commodities*, que puso de manifiesto la volatilidad de las reformas ante la ausencia de cambios estructurales (no hubo reformas fiscales

progresivas), mientras la pobreza, que efectivamente se había reducido en tiempos de vacas gordas, volvía a crecer y la concentración de la riqueza aumentaba. En ese quinquenio excepcional pudimos ver cómo se hacía más rígido el campo de los progresismos gubernamentales al compás de la profundización de la concentración del poder en manos de líderes cada vez más verticalistas.

Al cierre del ciclo económico, se sumaron hechos de corrupción que involucraron a gobiernos progresistas, neoliberales y conservadores. Además del connotado caso de Brasil, el escándalo de la empresa constructora brasileña Odebrecht[17] salpicó a Colombia, El Salvador, Honduras, la Argentina (pese a que se reconocieron los sobornos, no hubo imputados) y Ecuador (el vicepresidente Jorge Glas fue apartado del cargo en 2017). Aunque el ejemplo más radical se dio en Perú, donde cuatro expresidentes fueron llevados a la justicia.[18] Si bien el caso Odebrecht involucra a diferentes partidos y dirigentes políticos, sin distinción de orientaciones ideológicas, la cuestión de la corrupción golpeó más fuerte en los progresismos, horadando la credibilidad y el capital político de sus líderes, que comenzaron a ser caracterizados por los sectores de derecha y una parte de la sociedad como "populismos irresponsables", reducidos a una suerte de cleptocracia perversa beneficiada por el período de rentabilidad extraordinaria ligada a las *commodities*.

Hacia 2015, el proceso de deshilachamiento del campo progresista latinoamericano se había acelerado, pero la crisis no alcanzaba a borrar la impronta primera que coloreó la "marea rosa" en su articulación con organizaciones del campo popular: a saber, la promesa de más democracia, de más derechos, en el marco de una nueva institucionalidad estatal, en países atravesados por tantas dictaduras, por tantas desigualdades sociales, por procesos de exclusión multidimensionales. Más simple todavía: los progresismos parecían haber cumplido su ciclo, había decepción, cansancio y mucho desencanto, traiciones y manipulaciones, y sobre todo, un enorme desajuste entre políticas y discursos. Como dijo con pesar el sindicalista argentino Julio Fuentes, citado en el epígrafe de este

capítulo. La distancia entre relato y realidad era cuestionable, pero no así la narrativa de derechos, que trascendía esas experiencias y seguía siendo legítima.

De la polarización a los puntos ciegos

Uno de los elementos más relevantes del ciclo progresista fue el surgimiento y la consolidación de escenarios de polarización política, que enfrentaron los oficialismos con la reacción antiprogresista de amplio espectro. Esta polarización fue configurando "campos de acción" (Bringel y Domingues, 2018) donde estas corrientes sociales compitieron con los progresismos gubernamentales en masividad en las calles y fueron una ventana de oportunidad en la que se fue decantando una derecha política radical que buscaría barrer, no solo a esos gobiernos, sino también a la totalidad de las banderas levantadas por la narrativa progresista y su proyecto de sociedad.

A partir de 2015, el giro a la derecha fue más pronunciado, el *backlash* adquirió configuraciones abiertamente electorales mientras los progresismos gubernamentales acentuaban su declive. Más allá del caso de Brasil, que retomaremos en el capítulo 4, también hubo mutaciones internas como la de Lenín Moreno en Ecuador (2017-2021), quien pese a haber sido ungido por Rafael Correa giró a la derecha en cuanto llegó al gobierno. O la deriva del gobierno de Nicolás Maduro luego de la muerte de Hugo Chávez (2013), que afianzaría una estrategia capilar de bloqueo electoral ante una derecha agresiva y clasista para concluir en un fraude estruendoso en 2024, y cuya crisis económica y política produjo la expulsión/emigración de más de 6 millones de venezolanos. Pese al "devenir de un sistema autoritario y la neoliberalización de la economía, del régimen en Venezuela" (Terán Mantovani, 2024), este continúa utilizando de manera obscena una narrativa progresista y antiimperialista. Otro caso es Nicaragua, donde el matrimonio Ortega-Murillo instaló una dictadura implacable, desarrollando un

sistema represivo que erosionó la ya débil institucionalidad democrática, e instauró un régimen de persecución de los críticos que abarca a todos los sectores de la sociedad civil. Tampoco es posible soslayar la represión de la protesta en Cuba. En 2021, tuvieron lugar las protestas conocidas como "el 11 de Julio" u "11-J", una serie de manifestaciones contra el gobierno cubano debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia de covid-19, la escasez y el racionamiento de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión. Estas protestas masivas fueron reprimidas y la justicia de ese país condenó a manifestantes y referentes del Movimiento San Isidro (MSI), integrado por artistas e intelectuales, a penas durísimas de hasta veinticinco años de cárcel (Stefanoni, 2022).

Asimismo, mucho se habló del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, un expresidente de raíces campesinas-indígenas que avanzó en la democratización de la sociedad boliviana, pero cuyo infatigable deseo de perpetuidad lo llevó a forzar las instituciones para invalidar el resultado del referéndum de 2016 que había rechazado la posibilidad de una reforma constitucional que implementara la reelección presidencial indefinida. Todos estos factores volvieron a reavivar en Bolivia el peor de los demonios, el racismo antiindígena. Pese a ello, el régimen de facto no pudo consolidarse y en 2020 se llamó a elecciones libres, que permitieron la vuelta al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque no de Evo Morales. Sin embargo, el MAS boliviano se vio reducido a una lucha cruel y fratricida entre el liderazgo de Morales y el del actual presidente, Luis Arce, en medio de una crisis económica atada al fin (¿temporario?) de la abundancia del gas y las denuncias por estupro contra el exmandatario.

Tampoco a nadie se le escapa –y mucho menos a sectores de la derecha– que los giros autoritarios de diferentes gobiernos –como en Venezuela y Nicaragua– han sido mal procesados en el interior del campo de los progresismos. Existen sectores de izquierda que todavía leen la crítica a estos procesos en clave exclusivamente conspirativa, empeorando el daño que ya hacen esas derivas autoritarias en el campo de las izquierdas críticas. Conspiraciones de

la derecha siempre hubo, nadie lo niega, pero no pueden usarse para borrar de un plumazo todas las tensiones y errores políticos desencadenados por procesos de raíz endógena y mucho menos justificar la ausencia de autocrítica e incluso la represión. Así, la respuesta a la hipótesis del "fin de ciclo" y a la ofensiva neoliberal mostró el peor costado de los progresismos ya declinantes, tal como lo expresara, por ejemplo, el Foro de San Pablo en su declaración de julio de 2018. Si, por un lado, ese foro repudiaba la persecución y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva (algo efectivamente condenable), también afirmaba de modo enfático su solidaridad incondicional para con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, países donde se han comprobado graves violaciones de los derechos humanos, además de manipulaciones fraudulentas del sistema electoral.[19] El rechazo a cualquier tipo de autocrítica produjo un daño enorme en el campo de las izquierdas/progresismos, pues consolidó sus puntos ciegos políticos. Asimismo, habilitó una serie de argumentos de parte de sectores liberales, conservadores y autoritarios, que englobaron al conjunto de las izquierdas acusándolas de estar siempre dispuestas a movilizarse en contra del imperialismo, pero que supuestamente "no se interesarían por los derechos humanos" o bien los considerarían temas relacionados con la "democracia liberal", sin contenidos sustantivos…

Por último, no olvidemos que, en el marco de la polarización con sectores de derecha, varios progresismos hegemónicos terminaron por absorber otras corrientes progresistas disidentes, anulando así cualquier posibilidad de alternativa o posible alternancia desde la izquierda. Lo que sucedió en la Argentina es un claro ejemplo. Después de doce años de gobierno (2003-2015), el kirchnerismo afrontaba ya una crisis y un agotamiento profundo. La primera alternancia electoral poskirchnerista, entre 2015 y 2019, con Mauricio Macri, se propuso aplicar un programa de políticas neoliberales, pero aún se insertaba en un clima político y social dominado por la narrativa progresista en torno a los derechos. El fracaso del gobierno neoliberal fue demoledor: aumentó las tarifas de los servicios públicos, potenció la pobreza y el deterioro del salario, no logró bajar la ya alta inflación que venía impactando en

sectores medios y populares, y por si esto fuera poco contrajo un préstamo millonario e impagable con el FMI que sirvió para exacerbar la fuga de capitales por empresarios y amigos del poder.

No es extraño, entonces, que en 2019 volviera a ganar una coalición política de connotación progresista controlada por el kirchnerismo, pero en un escenario político diferente. El Frente de Todos, autodefinido como "una coalición peronista y progresista", nació bajo el control férreo de CFK, quien eligió como candidato a presidente, sin consulta con sus socios partidarios, a Alberto Fernández, a quien solo se lo conocía como un hábil operador y jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuya vocación "negociadora" revelaba una intención que muchos, en aquel momento, encontraban razonablemente conservadora… La crisis económica, agravada por la pandemia de covid-19, las fotos de la fiesta privada en la Quinta de Olivos y una sequía prolongada que afectó al sector agroexportador configuraron no solo la imagen de un presidente débil y sin autonomía, sino también, como contracara, la imagen de una vicepresidenta (CFK) fuerte pero mezquina e incapaz de asumir la responsabilidad por los resultados negativos de la gestión en curso.

En este punto es importante subrayar que, en su afán por confrontar y vencer a la derecha neoliberal en el plano electoral, el kirchnerismo terminó por absorber e incorporar lo que quedaba del espacio de la centroizquierda partidaria independiente en el país.[20] La gran "vaca peronista" (no hay otro rumiante que simbolice mejor la perennidad del peronismo, pese al presente actual, y su centralidad en el modelo político-económico argentino) digirió en alguno de sus cuatro estómagos todo lo que quedaba de las fuerzas de centroizquierda e izquierda nacional partidaria, que al menos se había mantenido con cierta independencia desde 2003. El caso es que en 2019, si hablamos de opciones de izquierda/centroizquierda, fuera del espacio poligástrico panperonista/panprogresista, solo quedaban un sector del socialismo (aliado a la Unión Cívica Radical) y el trotskismo, que pese a tener líderes y lideresas políticas de fuste y estar presente en un número importante de conflictos sociales cuenta con una representatividad política menor.

En suma, todo indica que el nuevo *cambio de época* viene de la mano del vaciamiento del campo progresista y sus narrativas de cambio, cuyos impactos políticos a largo plazo son enormes e impredecibles en un contexto de policrisis civilizatoria, reflejado no solo en el empoderamiento de las derechas sino en el claro agotamiento de los progresismos gubernamentales como proyectos alternativos de sociedad. Y si bien parece resurgir un polo progresista, de carácter inorgánico y no hegemónico, no ha sido suficiente para contrarrestar el clima de época, donde lo disruptivo y lo interpelante, sobre todo en sectores de la juventud, son las derechas radicales. El polo progresista muestra la coexistencia de figuras innovadoras como Gustavo Petro en Colombia, único líder latinoamericano que busca unir las banderas de la justicia social con la justicia ambiental, otras más o menos continuistas como Gabriel Boric en Chile, debilitado por el rechazo a su propuesta de nueva Constitución, y el regreso de Lula da Silva en Brasil, cercado por fuerzas conservadoras y de derecha en el marco de una sociedad fuertemente bolsonorizada (Nunez, 2024). En México, Andrés Manuel López Obrador, que terminó el sexenio con altos niveles de popularidad, no solo impulsó un modelo desarrollista-estatista casi propio de los años setenta, sino que funcionó como un "progresismo tardío", en palabras del investigador Massimo Modonesi (2018), con escasos vínculos con el ciclo progresista sudamericano anterior. Sin embargo, hay que destacar que su rotundo éxito electoral y su buena imagen luego de seis años de gobierno se desarrollan en un contexto de retroceso del resto de los progresismos. La gestión de Claudia Sheinbaum (desde 2024), la primera mujer presidenta de México, apenas comienza y sería apresurado aventurar alguna hipótesis de cambio.

Neodesarrollismo y consenso extractivo exportador

¿Cómo fue posible que el desarrollismo, una corriente de ideas políticas y estrategias económicas que nació hacia 1950, estrechamente vinculado a la industrialización interna y a un Estado planificador, se haya desligado por completo de esta tradición ideológica para reconectarse con una visión reprimarizadora de la economía y esté dando forma a un consenso extractivo exportador (CEE), compartido tanto por gobiernos neoliberales y progresistas como por economistas ortodoxos y heterodoxos, e incluso por libertarios de extrema derecha?

El debate sobre el desarrollo es uno de los grandes temas de la economía y de la sociología política crítica latinoamericana (desde el estructuralismo cepalino y las teorías de la dependencia en los años sesenta), que arrancó en la época de los populismos nacionalistas (Perón, Vargas, entre otros). Si bien este modelo industrializador en clave nacional-estatal (el "desarrollo hacia adentro" o industrialización por sustitución de importaciones) ofrecía diferentes variantes, entró en crisis hacia 1960-1970 cuando América Latina ingresó, como analizaron los dependentistas, en la fase del capitalismo monopólico que hizo estallar el pacto entre burguesía nacional, Estado y sectores de la clase trabajadora, con un rápido deslizamiento hacia escenarios autoritarios y represivos. La "nueva dependencia" –esto es, la subordinación del capital nacional al capital extranjero– llevó a cuestionar la viabilidad de un proyecto nacional integrador conducido por el Estado en alianza con otros actores (como la burguesía nacional), pese a que algunos –como F. H. Cardoso en Brasil– hablaron de la posibilidad de un "desarrollo dependiente asociado". A partir de ahí, como señalaría Guillermo O'Donnell tras un largo debate sobre el rol de la burguesía, habría que referirse a una "burguesía local", con un alcance más limitado, más dependiente, más allá de los contextos democráticos o autoritarios (Svampa, 2016).

La aspiración a un desarrollo relativamente autónomo de la mano de un Estado planificador terminó por deshilacharse hacia 1980, en un escenario de dictaduras ya languidecientes, transiciones a la democracia y estallidos de hiperinflación que abrió las puertas al neoliberalismo en la región como "única alternativa". Hacia 1990, la

globalización neoliberal asimétrica exigió otras garantías para el capital transnacional y una fuerte primacía del capital financiero, acentuando el escenario de desindustrialización. Al compás del declive de las corrientes críticas de pensamiento, muy particularmente de la economía política, se abandonaron los debates en torno al desarrollo y las visiones más macroeconómicas. Eran tiempos del Consenso de Washington…

Veinte años después, hacia 2010, volvieron a la agenda pública los debates sobre el desarrollo, asociados a una suerte de "neodesarrollismo" promesante. ¿Qué había sucedido entonces y qué connotaciones tenía este nuevo desarrollismo? A partir de 2003 asistimos al boom de las *commodities*, ligado a la demanda de materias primas, energía y alimentos, traccionado sobre todo por las potencias emergentes, como China. El alza de los precios internacionales de las *commodities* benefició a los países latinoamericanos, que de pronto se encontraron ante una coyuntura económica sumamente favorable, en la que convergían rentabilidad extraordinaria y ventajas económicas comparativas. Todos los países –independientemente del color político de sus gobiernos– escalaron en la extracción y exportación de bienes naturales, fueran hidrocarburos, minerales o el agronegocio vinculado a la soja transgénica y las nuevas tecnologías de siembra directa. Hacia 2010, casi todos los gobiernos de la región lanzaron sus grandes "programas nacionales de desarrollo", asentados en la aceleración de la exportación de una o más materias primas (Svampa, 2017).

En ese contexto, el brasileño Luis Bresser-Pereira se atrevió a llamar las cosas por su nombre y publicó un artículo sobre la vuelta al neodesarrollismo, donde afirmó que "en la era de la globalización, el crecimiento liderado por las exportaciones es la única estrategia sensata para los países en desarrollo" (Bresser-Pereira, 2010). En ese entonces, los argentinos Feliz y López (2012), así como Saguier y Peinado (2014), asociaron esta posición a un "neoestructuralismo progresista" que enfatizaba las condiciones privilegiadas de América Latina en esa fase, en términos de "capital natural" o de recursos naturales estratégicos demandados por el mercado internacional, más allá de los movimientos especulativos. Se instalaba incluso una

ambigüedad entre la noción de *commodities* y recursos naturales estratégicos, al tiempo que la cuestión ambiental se deslizaba hacia un punto ciego.

Voy a ahorrar a los lectores del largo *racconto* de los debates que se produjeron, pues atraviesan libros e investigaciones diversas, tanto de otros colegas de la región como propias.[21] El resumen será acotado. En algunos países estos debates arrancaron temprano y con mayor intensidad: dos ejemplos destacados son Bolivia y Ecuador, donde los gobiernos progresistas nacieron con la promesa de instalar otros modelos de desarrollo, ligados al Buen Vivir y el respeto de la Madre Tierra. Si bien esto finalmente no ocurrió, el blanqueamiento de la estrategia extractivista en clave progresista no estuvo ausente de conflictos; todo lo contrario. En otros países, como en la Argentina, los debates entre los defensores del "neodesarrollismo" asociado al consenso extractivo exportador y quienes critican ese modelo en nombre de la defensa de la tierra y el territorio fueron más tardíos pero no por ello menos virulentos.

La cartografía latinoamericana de la extracción incorporó nuevos registros, porque si bien la región vivía un período de crecimiento económico y reducción de la pobreza, esto fue acompañado por una tendencia a la reprimarización de la economía, visible en la acentuación de actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Al compás de esta aceleración del metabolismo social del capital, aumentó la presión sobre los territorios y los bienes naturales. La expansión de conflictos socioambientales y el surgimiento de movimientos ecoterritoriales, de la mano de una narrativa que aglutina ecología, defensa del territorio y visión comunitaria, fue otro de los rasgos distintivos del período. Así, la consolidación del modelo extractivo-exportador abrió también una nueva fase de desposesión de territorios con evidentes consecuencias en términos de monocultivo, desplazamiento de poblaciones, pérdida de biodiversidad y contaminación. La bibliografía crítica introdujo una reflexión en clave latinoamericana sobre el "neoextractivismo" (Gudynas, 2009; Acosta, 2012; Svampa, 2011; Machado Aráoz, 2014), categoría adoptada por la totalidad de los movimientos socioambientales de la región e incluso más allá.

Lamentablemente, nuestra región se convirtió en la zona más peligrosa del planeta para los activistas ambientales y los defensores de la naturaleza. Desde que Global Witness comenzó a documentar esta situación, de 2012 en adelante, fueron asesinados más de 2200 activistas en todo el mundo. En 2022, asesinaron a una persona cada dos días. En 2023, asesinaron a 196 activistas en todo el planeta: 166, o sea el 85%, en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Brasil (Global Witness, 2024). Un reguero de crímenes asociados a la expansión del agronegocio, la minería a cielo abierto y la expansión de la frontera forestal.

Por último, la relación entre extractivismo, acaparamiento de tierras y desigualdad alcanzaría niveles muy altos. Según consta en un informe de Oxfam (2016), hacia el final del ciclo progresista y del boom de las *commodities* (2014), América Latina continuaba siendo no solo la región más desigual del mundo en cuanto a distribución de los ingresos, sino también en distribución de la tierra: es cierto que los países expandieron la superficie cultivada, pero lo hicieron en favor de los grandes propietarios y los cultivos transgénicos.

Lo que se fue instalando cada vez más dramáticamente, aun antes de ingresar a un nuevo ciclo en el que se debate la transición energética (ver capítulo 2), es que, más allá de las variantes, este consenso extractivo exportador ponía en evidencia la incompatibilidad entre, por un lado, la expansión de la frontera de derechos (derechos territoriales, derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos indígenas), que enunciaban las Constituciones y los movimientos sociales de diferentes países con gobiernos progresistas, y, por otro lado, la expansión de la frontera de las *commodities* (megaproyectos mineros, petroleros, agronegocios, megarepresas, infraestructura conectada a actividades extractivas, hidrovías).

Asimismo, este consenso extractivo dejó traslucir claras conexiones, tópicos y marcos comunes entre el neodesarrollismo progresista y la perspectiva neoliberal, aun si ambos establecen diferencias con relación al rol del Estado y las esferas de democratización. En la visión progresista, el Estado tiene un rol diferente al que desempeña en gobiernos neoliberales o

conservadores, ni qué decir en gobiernos ultraneoliberales y reaccionarios como el de Javier Milei en la Argentina. En este aspecto, si bien durante el ciclo progresista el Estado recuperó ciertas herramientas y capacidades institucionales, esta concepción estatalista encontró límites: en el marco de las teorías dominantes de la gobernanza mundial, la tendencia imperante no es que el Estado nacional devenga un "megaactor" o que su intervención garantice cambios de fondo en los instrumentos de regulación. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, ONG y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. De este modo, aunque el planteo progresista sea heterodoxo desde el punto de vista económico y se aparte del neoliberalismo en lo atinente al rol orientador del Estado, está tan lejos de cuestionar la hegemonía del capital trasnacional en la economía periférica como de compensar las asimetrías existentes entre actores locales y actores transnacionales.

En líneas generales, la visión del progresismo neodesarrollista y la perspectiva neoliberal comparten varios elementos de la tradicional visión del desarrollo y la narrativa tecnocrática-capitalista. Muy especialmente, la visión productivista, que apuesta a la expansión del crecimiento económico sin límites, lo cual, en el marco de la aceleración de la crisis climática, significa ni más ni menos que la no aceptación de las fronteras planetarias. En otras palabras, ambas comparten una suerte de negacionismo climático implícito, más allá de que apelen a nociones como sustentabilidad (débil), responsabilidad empresarial y capitalismo verde.

En el progresismo neodesarrollista, esto aparece vinculado al hecho de que en América Latina gran parte de las izquierdas han sostenido tradicionalmente una visión del desarrollo[22] que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital y trabajo y tiende a minimizar aquel entre capital y naturaleza, y por ende a subestimar

o incluso descalificar las luchas sociales centradas en la defensa de la tierra y el territorio, y en la acción climática.

Por último, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, se fue instalando un "consenso" sobre la imposibilidad de resistir la inflexión extractivista, que terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas, suturando de este modo la posibilidad de un debate. La aceptación –tácita o explícita– de ese "consenso" contribuye a generar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la "sensatez y razonabilidad" de un capitalismo progresista, imponiendo la idea de que no existirían otras alternativas (Svampa, 2013). En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad y la negación del progreso, en el de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista, cuando no es adjudicado lisa y llanamente a la influencia de actores supuestamente foráneos (ONG ambientalistas, sean o no de origen extranjero).

En suma, la visión neodesarrollista es producto de la convergencia entre un paradigma extractivista, asociado a la reprimarización de la economía, y la comoditización de la naturaleza, cuyo rasgo saliente es el crecimiento económico basado en las exportaciones y la competitividad a ultranza, una perspectiva apenas rejuvenecida por la utilización siempre oportuna y lábil de ciertas categorías globales: sustentabilidad, responsabilidad social empresaria, gobernanza o incluso otras soluciones ligadas a la financiarización de la naturaleza, como el mercado de bonos. Desde su perspectiva, no es la economía la que debe adaptarse a las fronteras planetarias, sino a la inversa, la naturaleza debe adaptarse a las actividades económicas. En ese marco, la actual dinámica de desposesión se convierte en un punto ciego, no conceptualizable.

Mandato exportador e ilusión neodesarrollista

En 2024, tres investigadores argentinos, F. Cantamutto, M. Schorr y A. Wainer, publicaron un notable libro, *Con exportar más no alcanza (aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso)*, que sin duda constituye la crítica más aguda y radical realizada al neodesarrollismo, sobre todo en su versión progresista, desde la economía política. Los autores parten de la idea de que uno de los argumentos centrales del neodesarrollismo (compartido por los neoliberales) es que existiría una restricción externa al crecimiento: "en lo esencial, que el nivel de actividad de una economía se encuentra condicionado por una insuficiente disponibilidad de divisas" (2024: 23). Vale la pena citar un párrafo de la introducción del libro:

> El neodesarrollismo no asocia la restricción externa al modo específico de funcionamiento de la economía nacional y sus principales actores, cuya solución requeriría cambios estructurales. Por eso, durante los gobiernos de esa orientación se atacaron sus efectos (por ejemplo, estableciendo controles de cambios) y se promovió como solución de fondo una propuesta que no se ha diferenciado en sus aspectos nodales de la visión neoliberal: aumentar las exportaciones a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas que posee el país. Una vez más, y ante el abismo de una nueva (y recurrente) crisis, la propuesta de solución de los neodesarrollistas no parece estar en alterar el funcionamiento estructural del país y construir políticamente con el foco en ese objetivo, sino en profundizar el mismo sesgo que nos trajo hasta aquí. Como dijimos, darle más potencia exportadora, "agregar más agua al balde", en lugar de arreglar sus rajaduras. Esperar salir adelante a fuerza de insistir en la reproducción de lo mismo es, de mínima, algo extraño (2024: 15-16).

Apelando a la tradición de la economía crítica latinoamericana, van desmantelando uno a uno los argumentos de quienes defienden la

visión neodesarrollista, cuya bandera mayor es atacar el problema de la restricción externa aumentando las exportaciones primarias; o sea, exportando más minerales, más hidrocarburos, más soja.

Cuestionamientos al neodesarrollismo los hay y no son pocos, como vimos en el apartado anterior. Pero quizá porque en esta ocasión la crítica radical del consenso extractivo-exportador viene del lado de la economía política (y no de la ecología política ni de la economía ecológica) es que, en lo que sigue, me permitiré resumir algunos de los argumentos centrales de los autores.

Primero: ellos consideran que uno de los problemas básicos del neodesarrollismo es que presenta una visión ahistórica, plana y lineal del funcionamiento estructural de la economía actual. Se hace necesario reponer un recorrido histórico de la restricción externa –para el caso argentino y por momentos latinoamericano–, ligándola a la dinámica y los cambios ocurridos en las últimas décadas en la relación asimétrica entre países centrales y países periféricos, que incluye la sujeción de estos últimos a las necesidades del capital financiero y productivo de los primeros.

Segundo: si se habla de restricción externa, corresponde aclarar que no es la misma de 1950-1960. Desde los años noventa, el peso de los actores transnacionales y de la financiarización de la economía es mayor, a lo que se añade la consolidación de actores económicos nacionales con capacidad de veto (como el sector agroexportador) que apuestan a varios espacios de acumulación. Además, contrariamente a lo que se piensa, entre 1976 y 2023 hubo solo doce años de déficit comercial, y los momentos deficitarios corresponden casi todos a los períodos de la dictadura, la convertibilidad y el gobierno de Macri (2024: 124). De modo que, pese a que en la Argentina las exportaciones superan a las importaciones, el problema radica en que las divisas se van (la metáfora del balde con rajaduras) debido a varios factores, entre ellos la financiarización y globalización de la economía, ilustrada por la remisión de utilidades al exterior por parte de las empresas, la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Así,

> la restricción no está en la generación de divisas, sino en su retención: las salidas no solo se han magnificado, sino que se han descalzado del ciclo de actividad. Ya no se exporta más para crecer, sino para sostener el flujo de salidas y, solo si se puede, crecer. Más que restricción externa al crecimiento, hay crecimiento *para* la restricción externa (2024: 65).

Tercero: los autores se preguntan quién es el "sujeto social" real del neodesarrollismo. Como "plataforma conceptual" promovida por una fracción productivo/industrial del bloque de poder, al menos en el caso argentino, el neodesarrollismo sirvió en los primeros años para salir de la crisis neoliberal, en un contexto de default y de recuperación de la industria. Uno de los problemas fundamentales es que esta estrategia de sustitución interna fue limitada: funcionó, sobre todo, en los primeros años de la posconvertibilidad. En años subsiguientes, la centralidad económica de la burguesía agroexportadora se hizo más evidente, a tal punto que se convirtió en una herramienta de presión política (la crisis de 2007, el conflicto entre el gobierno de CFK y los sectores sojeros). En consecuencia, según los autores el neodesarrollismo se fue quedando sin sujeto social que le diera sustento, entre una burguesía local convertida en una suerte de entelequia, mientras cobraba mayor protagonismo una burguesía agroexportadora sin ninguna vocación por construir un país integrado. En suma, los gobiernos neodesarrollistas siguientes fueron muy limitados en cuanto a sus propuestas de cambio y por ello terminaron abrazando las mismas tesis y principios que quienes sostienen una visión ortodoxa de la economía acerca de exportar más, sin ir a la raíz del problema.

Cuarto: el neodesarrollismo no incorpora la cuestión ambiental; antes bien, suele exhibir una gran indiferencia al respecto, a lo que se añade un desprecio mayor por las luchas territoriales. Prueba de ello es que, durante el gobierno de Alberto Fernández, economistas y periodistas heterodoxos, e incluso funcionarios del gobierno argentino, construyeron como antagonista no a la burguesía

agroexportadora, cuya vocación nacional es nula, sino al movimiento socioambiental. Aducían que en realidad se trataba de pequeños grupos o sectores urbanos acomodados que presentaban preocupaciones exageradas, y que si bien algunas demandas podían tener asidero no estaban en el mismo nivel que la necesidad de sacar a la gente de la pobreza (2024: 143). Podríamos agregar, por nuestra parte, que es tan grande el esfuerzo manifiesto por no indagar las causas y seguir navegando las aguas de una supuesta normalidad climática –que ya no existe–, que incluso cuando el campo argentino sufrió una gran sequía entre 2022 y 2023, como ya señalamos en el primer capítulo, con pérdidas del 50%, y las exportaciones de productos primarios cayeron un 35,7% y se liquidaron 17.000 millones de dólares menos que en 2022 (Leiva, 2023), una vez superada la sequía, economistas ortodoxos y heterodoxos, élites políticas y burguesía agroexportadora, lejos de poner en relación estos hechos con los eventos cada vez más frecuentes y repetidos de la crisis climática, retomaron su discurso productivista sin matices.

Quinto: pese a que se habla mucho del derrame económico ligado a las exportaciones, el derrame –esto es, la distribución– nunca llega. Las actividades extractivas no son trabajo intensivas, además de generar economías de enclave y procesos de reprimarización y estar altamente masculinizadas. En la Argentina, petróleo y minería generan el 2% del empleo registrado en el país. Sin embargo, suele agitarse el fantasma del desempleo para promover estas actividades, ocultando que los trabajadores mineros y petroleros con salarios muy altos son minoría, y están sujetos a condiciones muy flexibles, jornadas muy extensas y riesgos extremos. El empleo de calidad que se crea es poco y el resto es de mala calidad, vinculado a los servicios o precarizado, lo cual genera todavía más desigualdades intersectoriales y otras de carácter urbano y regional. El impacto en términos de "desarrollo" es bajo, podría decirse insignificante, tal como muestran los altos índices de pobreza del país, situación que se replica en las zonas extractivas.

En suma, curiosas vueltas de la historia, sin proyecto social alternativo, sin sujeto social real al cual referirse, el neodesarrollismo

progresista buscó atacar al antagonista más débil antes que interpelar a los actores económicos más poderosos, en una suerte de fuga desesperada hacia delante. Incluso –como señalara Schorr en varias intervenciones– sus economistas relegaron la propuesta de redistribución económica (el "derrame") al final del proceso, cuando, en realidad, para poder garantizar condiciones mínimas de igualdad, la redistribución económica debería estar al comienzo del proceso de transformaciones –por vía de reformas tributarias–. El conservadurismo político-económico y el empecinamiento antiambiental devenido negacionismo climático implícito llevaron al neodesarrollismo a coincidir con la ortodoxia neoliberal, sin ver que con ello también resignaba algo más: la posibilidad de construir un proyecto alternativo, sobre la base de alianzas políticas y sociales más amplias, y apuntar a transformaciones que abordaran los problemas de fondo.

Esto trajo consecuencias desastrosas porque obstaculizó la posibilidad de tender puentes, de construir un enfoque integral que diera cuenta de la complejidad y transversalidad de la problemática socioecológica. Por último, en un momento de agotamiento de las narrativas emancipatorias, esta negación contribuyó a obturar la imaginación política, imposibilitando pensar o debatir otros escenarios políticos-civilizatorios o alternativas realmente transformadoras.

La discusión que no fue

No hay nada que moleste o que incomode más a las élites políticas y económicas nacionales que tener que abrir obligadamente la agenda de la discusión pública a las demandas socioambientales. Llegado a este punto, suelen ser tratadas *prima facie* como obstáculos al "desarrollo" y al crecimiento económico, cuando no minimizadas, infantilizadas, exotizadas o consideradas exageradas en sus argumentos y reclamos en nombre del realismo político, de las

necesidades sociales imperantes y de las promesas asociadas a la solución tecnológica.

Las demandas ambientales son molestas e incomodan, no solo porque cuestionan poderosos intereses económicos, sino también porque exigen otro modo de ver la realidad y entender el desarrollo y sus límites, otro modo de entender la relación economía/fronteras planetarias, otro vínculo con la naturaleza y el respeto por las diferentes formas de vida, hoy amenazadas. Generan incomodidad porque ponen de manifiesto la ceguera epistémica de las élites económicas y políticas, globales y nacionales. Esta ceguera epistémica no solo persiste, sino que, hoy por hoy, se ha potenciado de la mano del negacionismo climático libertario.

Durante las últimas décadas, los gobiernos latinoamericanos buscaron oponer lo social y lo ambiental. Los diferentes progresismos justificaron el neoextractivismo y la destrucción ambiental en nombre del desarrollo y de la reducción de las desigualdades, lo cual generó una situación paradójica: se instaló una agenda selectiva de derechos que, a la par que abría a demandas de derechos sociales y culturales, negaba o desestimaba las demandas socioambientales y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. Por su parte, los gobiernos neoliberales y conservadores, sin esgrimir discursos vergonzantes, apostaron a la radicalización del neoextractivismo amparados en un discurso neodesarrollista.

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos, desestimando el hecho de que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y resistir los embates del extractivismo y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas). Por eso, no es casual que los mapas de la pobreza o la exclusión social coincidan en todo el mundo con los de la degradación ambiental, como apuntó desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental y climática (Svampa y Viale, 2020). Esto recrudeció durante la pandemia por su

impacto desigual en los barrios más vulnerables, donde se multiplicaron los contagios debido al déficit estructural de vivienda y acceso a servicios básicos, el desempleo y la cobertura social insuficiente.

Si volvemos a enfocarnos en la Argentina anterior al estallido de la derecha radical, los debates socioambientales en medio de la pandemia de covid-19 provocaron gran preocupación en los distintos sectores del progresismo neodesarrollista. Lo cierto es que durante la campaña electoral de 2019 ninguno de los candidatos presidenciales, a excepción del candidato de la izquierda, planteó el debate sobre los modelos de desarrollo ni tampoco señaló la importancia de avanzar en una agenda socioambiental que incluyera la participación ciudadana. Ninguno puso siquiera algún tipo de reparo contra la explotación hidrocarburífera a través del *fracking* (más allá de las diferencias en torno a cómo y hasta dónde avanzar con Vaca Muerta), la megaminería y el agronegocio.

En este escenario tan poco alentador, a menos de un mes de asumido el nuevo gobierno de Alberto Fernández (diciembre de 2020), la población mendocina se volcó a las calles y las rutas cuando el gobernador recién electo, Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos), en acuerdo con el Frente de Todos, decidió modificar la Ley 7722 para habilitar el ingreso de la minería a cielo abierto, actividad que utiliza millones de litros de agua potable. La modificación de la ley se hizo en el marco de una legislatura vallada, con una sociedad movilizada y en un contexto de déficit hídrico histórico. Solo una semana más tarde, ante la masividad del levantamiento social y con la provincia paralizada, el ejecutivo provincial retrocedió y envió la nueva ley para su derogación, restableciendo de pleno la Ley 7722. Fue la mayor manifestación en defensa del agua jamás vista en la Argentina, incluso una de las más grandes que se recuerde en América Latina. Tiempo después, algo similar ocurrió en Chubut, donde a raíz de la colusión entre sectores mineros y algunos diputados del oficialismo se buscó reformar la Ley 5001, que prohíbe la minería con cianuro, y las movilizaciones sociales lo impidieron.

Tras los triunfos de las puebladas mendocinas y chubutenses, entre 2020 y 2021 se inició el debate sobre las megafactorías porcinas (con inversiones procedentes de China) y la expansión petrolera *offshore* en las costas bonaerenses. Gracias a la articulación opositora entre diferentes sectores sociales y ambientales, las megafactorías porcinas no prosperaron, pero fue sin duda el rechazo a la exploración petrolera *offshore* lo que hizo que el oficialismo y los economistas vinculados a este perdieran los estribos y reaccionaran con virulencia contra el campo ambiental y sus referentes. Comenzaron a hablar de "ambientalismo falopa" y economistas heterodoxos salieron con los tapones de punta en las redes sociales, e incluso se alentó la acción con trolls desde el Ministerio de Producción. Se buscó maliciosamente asociar el rechazo a las megafactorías de cerdos con posiciones reaccionarias y xenofóbicas (antichinas) o con sectores veganos urbanos burgueses, bien integrados. Se buscó despreciar el alcance y la "autenticidad" de las luchas socioambientales, o bien minimizar su arraigo territorial en las provincias afectadas. En el caso de la exploración petrolera *offshore*, suspendida durante un año por un amparo ambiental, la presión del gobierno nacional fue tanta que un tribunal de Mar del Plata sobreactuó su lealtad y de modo completamente irresponsable trató de "fascistas ambientales" a quienes se movilizaban en defensa de los ecosistemas marinos (Svampa y Viale, 2023). En este escenario de denostación contra toda propuesta de regulación ambiental, indefectiblemente tildada de "prohibicionismo", tampoco prosperó la Ley de Humedales, necesaria ante tamaña profusión de incendios y el avance de urbanizaciones privadas, ley que ya andaba por su tercer tratamiento en más de diez años y fue cajoneada por el gobierno de entonces con fuerte apoyo de sectores de la derecha neoliberal.

La discusión se fue tornando cada vez más asimétrica, en la medida en que diferentes medios de comunicación cerraron el micrófono a las voces del ambientalismo que consideraban demasiado críticas o radicales, mientras se afianzaba el consenso en torno a la explotación en Vaca Muerta y se buscaba avanzar en la exploración petrolera mar adentro, una vez obtenido el aval judicial.

Periodistas, funcionarios y economistas neodesarrollistas comenzaban sus intervenciones con el clásico saludo a la bandera, afirmando la "importancia del ambiente" y de la "sustentabilidad", pero acto seguido, refrendaban una perspectiva lineal y productivista donde lo ambiental no figuraba o era algo meramente decorativo, una expresión vaciada de sentido ("desarrollo sustentable") cuando no una columna más en el balance contable de la empresa, que terminaba por afirmar la necesidad de las divisas para el "desarrollo del país".

Así también, una parte importante de las ciencias naturales, sociales y humanas, sea por indiferencia, por comodidad o por pura negación, ha venido dándoles la espalda a las problemáticas socioambientales, que aparecen confinadas a ciertos "nichos" (ecología política, sociología ambiental, economía ecológica, geografía crítica) o reservadas a especialistas de las ciencias naturales o ciencias de la tierra, como si lo ambiental no hablara del planeta, de nuestra casa común, y solo remitiera a un aspecto parcial, una variable más, abordable desde una de las tantas disciplinas existentes. Sucede que como lo ambiental incomoda y cuestiona los credos desarrollistas preexistentes, como lo ambiental supone levantar el velo que cubre los modelos de apropiación, de producción, de consumo y de desechos que todos reproducimos, son muchos los que prefieren no abandonar la zona de confort. Más aún: para una parte importante de las ciencias sociales vinculadas al campo progresista, centrar la atención en lo ambiental no solo conllevaba un cuestionamiento de sus credos desarrollistas, sino que implicaba también interrogarse sobre las consecuencias de sus adhesiones políticas.

* * *

En este capítulo, mi objetivo consistió en comprender y presentar algunos aspectos de la implosión de la narrativa progresista

promesante y el avance de una visión neodesarrollista, más allá del encuadre ideológico, y analizar sus consecuencias.

El clima político en América Latina ha ido mutando y enrareciéndose cada vez más: hoy la tendencia es el rápido corrimiento ideológico y la normalización de los autoritarismos, la expansión de estructuras criminales como el narcotráfico y el retorno de las recetas neoliberales como "única" salida a la crisis económica y social. Los gobiernos cambiaron, y no por una única vía: lo hicieron a través de elecciones libres, pero también de mutaciones internas y golpes parlamentarios. La crisis es de corte político y económico, pero además revela un agotamiento ideológico, visible en la transformación de los progresismos en modelos de dominación tradicional con escasa o nula autocrítica política. En consecuencia, cabe preguntarse si la narrativa progresista podrá sobrevivir, no solo frente al embate derechista contra las políticas de derechos, sino también ante tanta derrota política y moral, incluso de cara a la abismal distancia entre discurso público y prácticas privadas. En otras palabras, asistimos a una crisis sin precedentes del imaginario progresista como proyecto alternativo de sociedad.

---

[14] Me refiero a la narrativa en torno al rol de los pueblos originarios, la plurinacionalidad, la centralidad del territorio y el horizonte del Buen Vivir. Ver Svampa (2016).

[15] Tal como desarrollé en otros trabajos, como *Debates latinoamericanos* (2016) y *Del cambio de época al fin de ciclo* (2017).

[16] En algunos casos, como el de la Argentina, desde 2007 no podían obtenerse más datos confiables a raíz de la intervención del Indec.

[17] Odebrecht es uno de los casos de corrupción más resonantes en América Latina, con la distribución millonaria de sobornos para políticos, empresarios y exfuncionarios de doce países, varios de ellos expresidentes, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

[18] En marzo de 2018, el presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar, y en abril de 2019, quien fuera dos veces presidente, Alan García, líder del alicaído APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), produjo una conmoción internacional al preferir la vía del suicidio antes que comparecer ante los estrados judiciales.

[19] Ver la Declaración del Foro de San Pablo de julio de 2018, <n9.cl/wam2j>.

[20] Frente a la dificultad de disputar el espacio de centroizquierda, prácticamente hegemonizado por el kirchnerismo, hemos asistido a diferentes y sorpresivas metamorfosis y alianzas. Así, son varios los dirigentes y dirigentas de centroizquierda que optaron por realizar un giro de índole pragmático, buscando seducir a otros electorados supuestamente no cautivos del kirchnerismo o desencantados con él. Desde el Partido Comunista Argentino, un sector del Partido Socialista, el Partido Nuevo Encuentro, pasando por Libres del Sur y posteriormente, en 2019, incluso Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas, estas fueron algunas de las fuerzas de centroizquierda e izquierda que finalmente se incorporaron al espacio kirchnerista.

[21] Ver Svampa (2013), Svampa y Viale (2020) y los trabajos del Grupo de Trabajo de Alternativas al Desarrollo, impulsado desde 2011 por la Fundación Rosa Luxemburgo.

[22] Hay que destacar que desde los años noventa viene desarrollándose una corriente ecomarxista de la mano de autores como J. O'Connor, J. Bellamy Foster, J. Moore y, más recientemente, A. Malm y K. Saito. En diferentes países de América Latina, tambien hay corrientes de izquierda que incorporaron la cuestión de la "fractura metabólica" y el extractivismo. Tal es el caso, en la Argentina, de diferentes referentes del trotskismo, que en los ultimos años vienen publicando trabajos sobre el extractivismo.

4. La expansión de las derechas radicales autoritarias

> La debilidad fundamental de Occidente es la empatía.
> **Elon Musk, 8 de marzo de 2025**

> Cuando hay un apocalipsis en el horizonte, los demagogos de la sangre y la tierra salen a la luz.
> **Timothy Snyder, 2015**

Vivimos un mundo multipolar, con tensiones interimperiales, donde las diferentes potencias –los Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia– buscan obtener un mejor posicionamiento geopolítico y un acceso o control directo de los recursos y los llamados minerales críticos estratégicos. El ascenso de las derechas radicales autoritarias, como fenómeno global, apunta a tensionar aún más este escenario, tan marcado por las desigualdades sociales y geopolíticas, al cuestionar un conjunto de narrativas y políticas asociadas con la defensa de los derechos y de la democracia.

Las derechas radicales no solo están generando un cambio de época, donde la xenofobia coexiste con la llamada "batalla cultural" y los exabruptos y las *fake news* son moneda corriente. Su objetivo principal es generar además un cambio de régimen, lo que implica un corrimiento de la política que naturaliza el autoritarismo y, en el límite, propone consolidar un (nuevo) régimen autocrático.

En este capítulo propongo en primer lugar caracterizar a las derechas radicales y establecer algunas diferencias entre sus vertientes, más allá de que pertenezcan al Norte o al Sur Globales. En ese punto, me interesa pensar la polarización asimétrica como el dispositivo común al que recurren en el proceso de acumulación

política. Abordaré también la cuestión del negacionismo climático y, aunque aparezca poco en los análisis actuales, la presencia de un discurso ecofascista en algunas derechas radicales.

Las derechas radicales autoritarias

¿Cómo denominar a estas fuerzas de extremas derechas que se consolidan en el continente americano, desde los Estados Unidos y Brasil hasta la Argentina, sin soslayar que en otros países de la región emergen también nuevos liderazgos que aprovechan la oportunidad de montarse sobre la ola libertaria? ¿Cómo influye esto sobre las derechas radicales con presencia significativa en casi todos los países de la Unión Europea? ¿Cómo negar que en la actualidad las derechas radicales, con su discurso xenófobo y reaccionario, se han convertido en una alternativa de poder global?

La primera pregunta, la pregunta por el nombre, no es banal. Muchos hablan de diferentes vertientes de la "ultraderecha" (Mudde, 2021) o de "populismo" (Illouz, 2023), también de "neoliberalismos autoritarios", de "trumpismo" (Urbán, 2024), de "posfascismo" (Traverso, 2018) o de "fascismo fósil" (Malm, 2024), o incluso "neofascismo", mientras otros se refieren a "derechas radicales" (Stefanoni, 2021) o simplemente a "extremas derechas". En este capítulo, propongo retomar la caracterización de derechas radicales autoritarias –como ya hice en otro trabajo (Svampa, 2020)– o extremas derechas descartando el término populismo, ya que este suele instalar una zona de confusión que supone aceptar el cliché de que populismos de izquierdas y populismos de derechas son lo mismo. Esta confusión parte del hecho de que, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, suele establecerse esta identificación. Por supuesto que esto no significa que las derechas radicales no tengan rasgos populistas. Al contrario; desde mi perspectiva, el populismo es un rasgo presente en ellas, pero eso no nos habilita a pensarlo como una categoría que engloba el fenómeno como tal,

porque las derechas radicales, lejos de plantear una tensión entre elementos democráticos y elementos autoritarios (como sí lo hacen los populismos de centroizquierda sudamericanos), proponen la supresión de la democracia liberal por vía de modelos autocráticos. Como alegaré en este capítulo, es necesario olvidar el estereotipo y, sobre todo, analizar la configuración polarizadora diferente que establecen las derechas radicales.[23]

El mundo de las extremas derechas es amplio y heterogéneo y es posible encontrar en él muchísimas variantes. Pero todas tienen en común la utopía neorreaccionaria de que la nación está en peligro, amenazada en lo que constituye su esencia. Por ello, proponen retornar a un supuesto pasado de grandeza protegiendo la cultura nacional, identificada con el pueblo (o sea, con una parte del pueblo a la que consideran legítima). Y esto supone, desde luego, la configuración del enemigo. En el caso de Europa, esta amenaza remite a la teoría del "gran reemplazo" que responsabiliza a los inmigrantes (extracomunitarios, preferentemente de religión musulmana) por la desnaturalización de la nación. En los Estados Unidos, es encarnada por inmigrantes latinos, a quienes el trumpismo trata abiertamente de "delincuentes". En América Latina, la amenaza es más difusa, puede provenir de la "decadencia", la "distorsión", la "deformación" producidas por las políticas progresistas (según Bolsonaro y Milei) y es encarnada sobre todo por los feminismos, sectores de la cultura, comunidades indígenas, minorías sexuales y grupos ambientalistas. La utopía reaccionaria, sintetizada por Donald Trump con el MAGA ("Make America Great Again"), se asienta sobre el triple eje de la defensa de la nación, una retórica anti-*statu quo* y la invocación del "pueblo" considerado legítimo. En todo caso, para el conjunto de las extremas derechas, la amenaza proviene de la sociedad multicultural y del llamado "marxismo cultural", que habrían penetrado con sus valores "disolventes" la cultura y las sociedades occidentales, de la mano de sectores progresistas globalizados.

Este etnonacionalismo tuvo a Jean Marie Le Pen como modelo, con su propuesta del diferencialismo cultural (no biologicista) basado en la preservación y el respeto mutuo de regiones etnoculturales

separadas y limitadas y la política de "preferencia nacional" –inspirada en la nueva derecha francesa de fines de los años ochenta, y de ahí fue exportado a todo el continente. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que estas extremas derechas se "normalizaran" y expandieran hasta formar parte del sentido común.

Según Mudde (2021), estaríamos en la cuarta ola, marcada por la desmarginación de la ultraderecha y la normalización de sus reivindicaciones políticas. Esta ola habría sido beneficiada por tres grandes "crisis": los atentados a las Torres Gemelas (2001), la recesión posterior a la crisis financiera de 2008 y la crisis de los refugiados, que se vivió en Europa, en 2015. En términos temporales, el cambio de época se vincula asimismo con el cuestionamiento a la globalización neoliberal, algo que ilustran tanto la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (el Brexit de 2016) como el primer triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (2016). Pero hay que incluir también gobiernos "iliberales" no tan recientes, como el de Viktor Orbán en Hungría, sobre todo a partir de 2010; Benjamin Netanyahu en Israel, quien presidió varias coaliciones de gobierno desde 2009 hasta 2021 y regresó en 2022 con una nueva coalición ultraderechista. En América Latina, el punto de inflexión fue el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-2022), en una región que hasta ese momento se creía a contramano del proceso de radicalización de las derechas. En 2023, Javier Milei ganó las elecciones en la Argentina y, en enero de 2025, Donald Trump regresó al poder en los Estados Unidos. Nada impide que surjan otros referentes y partidos de extrema derecha en una época que tiene el radar orientado hacia los autoritarismos.

En las últimas elecciones del Parlamento Europeo (junio de 2024), las extremas derechas obtuvieron casi un cuarto de los escaños. Antes de esa votación ya existían veintiún partidos de extrema derecha representados en la legislatura europea con sede en Bruselas. En las elecciones adelantadas que se llevaron a cabo en Alemania en febrero de 2025, la AfD (Alternativa por Alemania), un partido de orientación neonazi, obtuvo el 20% de los votos. Cada proceso eleccionario parece haberse convertido en una suerte de test general sobre el destino de la Unión Europea, que enfrenta a

quienes abogan por la continuidad a partir de la defensa del *statu quo*, el libre comercio y la moneda europea (conservadores, verdes, partidos de centro y socialdemócratas) con una extrema derecha que reclama la salida del euro y el cierre de fronteras a la inmigración extracomunitaria, a la que culpa de la crisis múltiple. Este rechazo al neoliberalismo en su versión globalizadora y elitista se traduce en la afirmación de políticas proteccionistas, en el caso de los Estados Unidos, lo cual no significa un repudio al neoliberalismo como tal, sino un reordenamiento de la economía puertas adentro en un momento de crisis.

Las derechas radicales proponen –al menos nominalmente– un discurso antielitista que opone "la mayoría silenciosa" y "el sentido común", a la "dictadura de la élite" y la "cultura woke" (vinculada a los derechos de las mujeres y la agenda de la diversidad sexual, ecologista y étnica). No es casual que el enemigo no sea solo político, sino también "cultural", una "casta" de izquierda o sectores progresistas culturales globalizados que promueven desde su perspectiva "valores disolventes".

En Brasil, con el escándalo ya citado de Odebrecht, la crisis del sistema democrático produjo la caída de la clase política y empresarial junto con la descomposición del sistema político tradicional. En el período que va entre la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva, en 2018, se fue tejiendo una cadena de equivalencias[24] sobre la cual se montaron las demandas del campo más conservador y autoritario, que lograron encontrar una traducción político-electoral. En lo político, y más allá del sentimiento antipetista de las clases medias y altas brasileñas y la eficacia de las *fake news*, el triunfo de Jair Bolsonaro expresó un llamado social a restablecer los valores morales tradicionales y las jerarquías depuestas. Emergió así una nueva oferta política, una derecha radical con importantes elementos de fascismo explícito, en la cual convergen la agresión verbal permanente, con la apelación a un orden capitalista clásico autoritario, el llamado al orden patriarcal tradicional, el de la previsibilidad de las divisiones binarias, el de la distinción entre "lo

normal y lo patológico, lo desviado" (es decir, la diversidad reducida a una patología clínica o criminal).

Asimismo, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, los ataques contra la educación y las universidades públicas –en particular contra las ciencias sociales y humanas– son un claro ejemplo del afán de instalar otros valores y otro sentido común. No solo se repudia la condición de "expertos" de los académicos, sino que además se los responsabiliza por ser voceros de discursos y prácticas de "adoctrinamiento" que atentan contra los "valores de la familia y la vida". Como suele preconizar uno de los principales ideólogos de Milei, Agustín Laje, tras la caída del Muro de Berlín la izquierda perdió la batalla en el plano político y económico, pero ganó la batalla cultural. Se le atribuye el dominio de la cultura y, por ende, la reproducción de una determinada mirada del mundo a través del "adoctrinamiento" en la educación y la cultura.

Mientras que en los Estados Unidos y Europa este discurso antielitista se opone al globalismo y apunta contra los inmigrantes del Sur Global, en América Latina la derecha radical es primordialmente antigarantista o antiderechos y embiste contra el progresismo y las izquierdas. Sin embargo, en la dinámica misma, las derechas radicales del Sur Global construyen también otros enemigos internos, más allá de la "cultura woke". Así, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, la política antiindígena fue una marca del gobierno, algo que la derecha neoliberal y la extrema derecha promueven en la Argentina mediante un discurso sobre todo antimapuche unido a la defensa de la propiedad privada y contra la inseguridad.

Se ha dicho muchas veces que, visto desde abajo, este escenario de proteccionismo económico y xenofobia política expresa el enojo, la rabia y la decepción de sectores de la población ante las consecuencias desiguales de la globalización liberal y los partidos políticos que la sostienen, que incluyen desde los demócratas (en los Estados Unidos) hasta la socialdemocracia; en suma, lo que Nancy Fraser (2017) denominó con acierto "neoliberalismos progresistas". Sin duda, el fracaso de las socialdemocracias y los progresismos, su agotamiento como proyectos de transformación e integración social,

es un dato estructurante de la época. Incluso podría decirse que, además de la pandemia de covid-19, tanto la guerra en Ucrania como la destrucción de Gaza por Israel han profundizado esta crisis. En suma, el vaciamiento de las izquierdas como narrativas promesantes allanó el camino para la extrema derecha. Por otro lado, no es menos cierto que, a pesar de que existen diferencias entre las viejas derechas o derechas *mainstream* en cuanto a la concepción de lo social y sus valores (Svampa, 2020), no son pocas las que se han subido al carro de la radicalización, adoptando la agenda de reivindicaciones de la derecha radical.

En la actualidad, las extremas derechas encarnan "lo nuevo", con capacidad de movilizar una estructura de sentimientos que expresa desde abajo una experiencia de pobreza, frustración, carencias y descontento de sectores populares. Frente a la crisis múltiple, el llamado anti-*statu quo* y la crítica a los valores y posicionamientos del progresismo les abren la posibilidad de empoderarse como individuos. Sujetos de clases medias y populares perjudicados o desplazados por el avance del capital global en busca de regiones más baratas –y entre ellos, en particular, los varones blancos– constituyen el núcleo duro de estas derechas. Y a ellos se suma, cada vez más, un incipiente subproletariado joven (masculino) estancado en una zona de precarización, sin promesas de futuro estable. En otros casos, captan los votos de las derechas tradicionales, clases medias y pequeñas burguesías provinciales. Hay también, como muestran los casos de Francia y Alemania, un importante componente regional (zonas desindustrializadas o marginadas). En la dinámica política, que lleva más de una década, el campo social se ha ido extendiendo; así lo evidencia el voto a Trump en 2024, que obtuvo mayor apoyo del voto negro (un 50% más que en 2020) y del voto latino (Brown y otros, 2024). Sin embargo –como han mostrado el primer gobierno de Trump en los Estados Unidos, el de Viktor Orbán en Hungría y el de Javier Milei en la Argentina–, las derechas radicales atacan los derechos sociales y, muy particularmente, desarrollan una política antisindical: apuntan a una mayor flexibilización laboral y al desconocimiento de los

derechos colectivos, poniendo en el centro al individuo (Tokatlian, 2024).

Estrategias de acumulación política y polarización asimétrica

Es posible resumir algunos de los elementos que comparten las derechas radicales a la hora de desarrollar una estrategia de acumulación política, entre ellos la polarización asimétrica, la manipulación política de las emociones, la articulación con los superricos y, por último, la construcción de una nueva economía afectiva.

En primer lugar, a diferencia de otros regímenes y corrientes políticas, las derechas radicales autoritarias buscan instalar una polarización asimétrica o desigual. Tal como la entiendo, la polarización asimétrica se propone establecer una configuración política bipolar que no se ejerce por igual desde ambos polos, pues lo específico de la asimetría es que desde uno de sus lados se pone en escena un discurso antipluralista que se combina con una práctica política violenta (sea por vía verbal, redes sociales o represión de la protesta social), radical y desproporcionada que busca deliberadamente la invalidación del otro como interlocutor legítimo, que va más allá de los políticos o parlamentarios opositores e incluye además periodistas, artistas, investigadores, escritores o trabajadores de la cultura.

Cabe aclarar que, en clave latinoamericana, la polarización política que se instaló durante el ciclo progresista no puede ser homologada a la polarización asimétrica que hoy promueven las derechas radicales. La polarización política es un esquema de antagonismos, una lógica binaria que simplificó de modo maniqueo la lucha político-partidaria, tanto en la calle como en el Parlamento, y que, sin duda, dividió también a la sociedad. Mientras unos alegaban defender los intereses del "pueblo" (progresismos y populismos nacionalistas de

centroizquierda), otros decían defender la "República" y sus fronteras (fuerzas de centroderecha y de derecha). Ambos se proclamaban custodios de un "bien" y pujaban por apropiarse, redefinir y validar lo que entendían por democracia y derechos de los votantes. En ese marco, la polarización política instaló un campo binario; pero, pese a las tensiones políticas (sobre todo con medios de comunicación de la oposición) y los riesgos de ruptura que esto conllevaba, pocas veces se trasponía el límite que supone instalar la exclusión y deshumanización del otro como principio político rector. Cuando ese límite polarizador se rebasa o transgrede desde los oficialismos, las democracias se rompen y estallan en mil pedazos como sucedió en Venezuela con Nicolás Maduro y en Nicaragua con el matrimonio Ortega-Murillo, dos países donde se consolidaron gobiernos dictatoriales.

En cuanto a la polarización asimétrica, esta prospera en el ocaso del ciclo progresista, lo cual hace que las ultraderechas latinoamericanas sean ostensiblemente antiprogresistas y antigarantistas (Stefanoni, 2021). Un ejemplo de esta estrategia de acumulación política es el ataque a la cultura y la educación, que lejos de ser un efecto colateral es central en ciertas extremas derechas.

Esto se vio en Brasil y comenzó en 2011 con el "kit gay", que hacía referencia a un proyecto de política pública de Dilma Rousseff, que en realidad era un programa que incluía talleres, educación sexual y capacitación de profesores para saber cómo afrontar situaciones de discriminación y *bullying*.[25] Más tarde, en 2018, Bolsonaro no dudó en utilizar el "kit gay" en su campaña contra el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. La embestida bolsonarista se viralizó a través de redes sociales, con *fake news* que afirmaban que el PT había distribuido biberones con forma de pene en las guarderías. En 2019, envalentonados por la victoria electoral, y apoyados también por la bancada evangélica, los seguidores de Bolsonaro instaron a la ciudadanía a mandar videos para denunciar a profesores que buscaban "adoctrinar" a los alumnos. Esto catapultó el proyecto Escuela sin Partido, que luego de una ardua disputa fue rechazado por el Congreso nacional, y apuntaba a una reforma

profunda de la educación expulsando todo contenido relacionado con derechos de las mujeres y diversidades sexuales y, por supuesto, buscaba contar la historia de la dictadura militar con una mirada empática.

En fin, aunque todavía no se hablaba de wokismo, el ataque contra la cultura fue amplio, contundente y con vocación refundacional porque buscó quitar financiamiento y deslegitimar a esos sectores. Incluso llegó a decir que había que eliminar el Ministerio de Cultura y se censuraron libros y obras de teatro. Los cuatro años del gobierno de Bolsonaro erigieron a la cultura y a sus referentes más icónicos –Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque– en enemigos. Y estos tres baluartes, forjados en la lucha contra la última dictadura militar, junto a nuevas generaciones de jóvenes artistas y festivales como el Lollapalooza Brasil se convirtieron en emblema de lucha contra el autoritarismo y el oscurantismo del gobierno. En la Argentina, como veremos, sucede algo similar, mientras que en Estados Unidos, la voluntad de censurar se expresó en el Proyecto 2025, en el cual participaron 140 exempleados de Trump, y que proponía una larga lista de libros y autores para vetar. Este listado fue obra de la Heritage Foundation, de tendencia muy conservadora y conocida por su defensa del negacionismo climático.

Un segundo elemento en común –y en línea con lo anterior– está vinculado con la manipulación o captura política de la emocionalidad de los extremos, una estrategia analizada en un libro muy iluminador por el analista ítalo-francés Giuliano Da Empoli (2020). Pasiones extremas que son direccionadas, de la mano de las nuevas plataformas de internet y el uso de los algoritmos, hacia determinados objetivos, por ejemplo, movilizar el voto de los desmovilizados y desmovilizar el de quienes votarían por la oposición. En esa línea, Da Empoli habla del pasaje de la política tradicional newtoniana (los expertos) al mundo de los "empresarios políticos" (los ingenieros del caos) que en tiempos de algoritmos se dirigen a captar los extremos, explotando los sentimientos de ira y de frustración social. El autor insiste en señalar que mientras la extrema derecha ha sabido utilizar estas nuevas herramientas mediante un lenguaje político que se torna particularmente tóxico y

persecutorio en las redes sociales, con equipos de trolls y el uso recurrente de *fake news* y tesis conspirativas, las izquierdas y los progresismos todavía apelan a la vieja política analógica.

Un tercer elemento que destacar es de índole superestructural; me refiero a la alianza estratética de CEO y multimillonarios con la derecha radical. La fotografía donde aparecen los CEO de Facebook, Tesla y Amazon (plataformas ligadas a las nuevas tecnologías) en la asunción de Trump en el Capitolio no es un detalle anecdótico. Esto sucede en un momento en que las ganancias de los superricos se siguen multiplicando, abonando a un proceso de reproducción ampliada de las desigualdades. Solo en 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023 (Oxfam, 2025). En términos de cambio de época esta articulación entre líderes autoritarios, CEO y grandes corporaciones (reflejada en el pasado por regímenes como el fascismo y el nazismo) representa la emergencia de una nueva narrativa, a la que llamo "pancapitalismo del fin", esto es, una ideología o visión reaccionaria del mundo que va más allá de la narrativa tecnooptimista, pues en su defensa radical del capitalismo acelera de modo exacerbado su marcha hacia la destrucción de derechos, bienes, territorios, libertades y democracia.

Por último, desde abajo se va delineando una nueva economía afectiva ligada a la valoración del individualismo y el neoliberalismo, que en sus expresiones extremas promueve otro "régimen de afectividad" (Giraldo y Toro, 2020) marcado por la falta de empatía y la distancia con el sufrimiento de los sectores más vulnerables, como también por la indiferencia respecto de los estragos producidos por la crisis climática y la acentuación de los extractivismos. Es este alineamiento de los marcos cognitivos-emocionales operados por las nuevas tecnologías digitales en épocas de conmoción y policrisis el que ha disparado el éxito de las extremas derechas y su enraizamiento en las subjetividades sociales. En términos políticos, este régimen de afectividad instala un "piso" en una peligrosa dinámica de acumulación de poder, cuyo "techo" es la consolidación de un proyecto de destrucción, antipluralista y de regresión de

derechos, que históricamente está demostrado que conduce a las peores formas de autoritarismo político, incluso al fascismo.

En suma, la polarización asimétrica marca la emergencia de los contornos de una nueva política, la punta de un iceberg que nos muestra cómo la política tradicional es fagocitada y colonizada por otra lógica, propia de las pasiones extremas, la posverdad y el trato agresivo en las redes sociales. En esa línea, debe ser interpretada no tanto como un exceso de emocionalidad sino como una estrategia deliberada de construcción de una economía afectiva, llevada a cabo desde el poder sobre la base de la emocionalidad (captura y manipulación de emociones como la ira, distanciamiento respecto del sufrimiento de los otros), que empuja el corrimiento de lo políticamente posible y el umbral de lo socialmente decible.

Los dos momentos del negacionismo climático y el tiempo de las políticas antiambientales

El negacionismo está en ascenso, como sostiene la investigadora italiana Donatella Di Cesare (cit. en Schuster, 2023), autora de *Si Auschwitz no es nada. Contra el negacionismo*. Sus expresiones son variadas, pues incluyen no solo la negación del Holocausto o el cambio climático (como antes fue el negacionismo de los impactos del consumo de tabaco sobre la salud humana), sino también la negación de la pandemia, el rechazo a las vacunas, la negación de la crisis de los migrantes. El negacionismo no plantea una "duda constructiva", sino lo que Di Cesare llama "una duda hiperbólica". "Los negacionistas, que operan como 'dobermans del pensamiento' no preguntan inocentemente por una cifra, no tienen una duda real y una vocación de conocer más y mejor un fenómeno. Lo que hacen, en rigor, es instalar una duda que contiene en sí el planteo negacionista" (cit. en Schuster, 2023).

En esa línea, bien podría decirse que el planteo negacionista de las derechas radicales busca reforzar la polarización asimétrica, como

parte de su estrategia de acumulación política. Por un lado, el negacionismo histórico amplió sus fronteras. Si en Europa aludía al Holocausto judío, al cual se niega o se tiende a relativizar, en América del Sur se aplica a las dictaduras militares de los años setenta. No es casual que ambos negacionismos refieran a hechos cruciales cuyo proceso histórico y reconocimiento está en la base de las democracias actuales. Con ello se busca destruir la memoria y aspectos de la comunidad democrática que se ha construido en torno a ella, como sostiene Di Cesare.

En suma, pensar que el negacionismo de las extremas derechas es exclusivamente climático es un error. Porque el negacionismo incluye también determinadas interpretaciones de la historia que, por lo general, aluden a hechos muy traumáticos, como masacres y genocidios. Esto sucede en Brasil y en la Argentina, donde coexiste con el negacionismo histórico de las atrocidades cometidas por las últimas dictaduras militares de ambos países o, en su defecto, se busca aminorar el crimen, equiparando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con los crímenes de las organizaciones armadas que actuaron en aquella época.

La duda hiperbólica –la sospecha instalada sobre los científicos y las supuestas lagunas del conocimiento– también fue la base del negacionismo climático entre 1990 y 2000. Consiste en rechazar los resultados de la investigación científica y negar los orígenes antrópicos de la crisis climática, que se expresa en la negativa a implementar cualquier política pública nacional o internacional que apunte a la reducción, mitigación o adaptación de los gases de efecto invernadero. El negacionismo climático tiene como efecto liberar tanto a los Estados como a los individuos de la responsabilidad de la catástrofe ambiental.

Dicho esto, hay que distinguir dos olas diferentes de negacionismo climático. La primera, nacida luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, se extiende hasta los primeros años del siglo XXI; la segunda, desde 2015 en adelante, acompaña y alimenta la expansión de las extremas derechas. En su versión más clásica, el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora que objeta el rol regulador del Estado y de las instituciones globales

multilaterales. Tanto en problemáticas ambientales –negación del cambio climático– como sanitarias –negación de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud humana–, la estrategia utilizada fue siempre la misma: rechazar, en nombre de la "libertad" individual y de mercado, cualquier intervención reguladora del Estado instalando una "duda hiperbólica" casi siempre asociada a una hipótesis conspirativa o teoría del complot.

El parteaguas de esta cruzada negacionista fue el gobierno republicano de Ronald Reagan (1981-1989), cuya política desreguladora abrió una brecha aún mayor entre los partidos Republicano y Demócrata respecto de estos temas (Oreskes y Conway, 2018). Se crearon poderosas instituciones ligadas a las corporaciones fósiles que cooptaron a científicos marginales para incidir en el debate a nivel internacional, negando las bases científicas del calentamiento global y oponiéndose a cualquier tipo de regulación que limitase las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el ecomarxista Andreas Malm (2024), se trató además de "una máquina de negación para proteger un elemento de la ideología dominante contra la ciencia del clima" vinculado a varias fracciones del capital fósil. Entre otras, Global Climate Coalition, muy activa entre 1981 y 2002, contó con el apoyo de la petrolera ExxonMobil. El caso de Exxon es paradigmático, dado que entre los años setenta y ochenta esta empresa contrató a calificados científicos para investigar el problema del calentamiento global, quienes confirmaron que este existía y estaba ligado a actividades humanas. Pese a estos resultados, la petrolera continuó asumiendo una posición negacionista e incluso contribuyó a evitar que los Estados Unidos ratificaran el Protocolo de Kioto, firmado en 1992. El ejemplo más conocido es el Instituto Heartland, fundado en 1984, un *think tank* neoliberal con sede en Washington financiado por donantes anónimos ligados a corporaciones fósiles y por fundaciones de extrema derecha vinculadas a Koch Industrie, que desde 2008 organiza reuniones internacionales de escépticos y negacionistas del cambio climático.

Los daños producidos por el negacionismo climático son incalculables y de larga duración. Ya en 1995, el IPCC había llegado

a la conclusión de que las actividades humanas (antrópicas) afectan el clima global. Sin embargo, pese a la intensa campaña que estas fundaciones y empresas fósiles llevaron a cabo contra los científicos del clima para relativizar y difamar los informes del IPCC, hacia los primeros años del nuevo siglo el negacionismo comenzó a debilitarse. En 2006, se dio a conocer el documental *Una verdad incómoda*, del exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que tuvo gran repercusión mundial. Por otro lado, los movimientos por la justicia climática eran cada vez más fuertes, en especial en Europa, y accionaban en los espacios multilaterales para lograr nuevos acuerdos internacionales. De cara a esta realidad, varias corporaciones fósiles se retiraron de las fundaciones y entendieron que, al menos públicamente, lo mejor era apostar al *greenwashing.* [26]

Al fin, parecía que los planetas se alineaban. De ahí en más ya nadie podría poner en duda el origen antrópico del cambio climático ni sus consecuencias sobre la vida en el planeta. Se abría así una nueva oportunidad, que la COP de París, realizada en 2015, aprovecharía para trazar una vía clara para la reducción de CO_2 a fin de no trasponer el límite de 1,5% de incremento de la temperatura con relación al período preindustrial. Por supuesto que había desacuerdos acerca del horizonte temporal, puesto que la velocidad o el ritmo de estos cambios no se pueden prever del todo y varían de un país al otro. Pese a no ser de carácter vinculante, el Acuerdo de París fue firmado por 197 Estados que se comprometieron a presentar programas nacionales de reducción de emisiones.

Sin embargo, el escenario internacional se complicó una vez más con el impulso que tomaron las extremas derechas antiglobalistas en Europa y, sobre todo, con la primera presidencia de Donald Trump en 2017. Arranca así la segunda ola negacionista, ya no digitada solamente desde los *think tanks* de las corporaciones fósiles y sus fundaciones, sino desde gobiernos y partidos de extrema derecha que negarán el cambio climático o su origen antrópico e impulsarán políticas públicas fósiles y de corte antiambiental.

Esta revancha política del capital fósil redefinió el campo de batalla y logró adeptos impensados, al punto de debilitar los movimientos ecologistas precisamente allí donde eran fuertes y tenían mayor incidencia política, como en Alemania, Dinamarca y Suecia. Como sostiene Malm, quien dirigió la investigación más completa sobre la relación entre etnonacionalismos y negacionismo climático, para los partidos de extrema derecha el apocalipsis no es el clima, "un engaño de los comunistas" como alega Trump. El verdadero apocalipsis es la invasión de extranjeros no blancos en sus países (Malm, 2024: 63). No es casual que ambos tópicos, el rechazo del cambio climático y la afirmación del peligro migratorio, aparezcan de modo obsesivo. Según Mark Steyn, autor de *American Alone*, los musulmanes y los movimientos climáticos supuestamente comparten una mirada anclada en la "reprimivitización" del planeta, pues ambos "detestan a Occidente" y critican la modernidad (Malm, 2024: 87).

En esa línea, las extremas derechas rechazan la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, trazada en el Acuerdo de París, donde se detallan diecisiete objetivos para reducir la pobreza, lograr un planeta saludable, disminuir las desigualdades de género, erradicar el hambre y crear empleo decente. Nada a lo que alguien medianamente sensato pudiera oponerse. Pero tampoco hay que engañarse: más que un plan de acción global, la Agenda 2030 es una declaración de principios. En definitiva, el problema no son sus objetivos sino los espacios multilaterales que proponen una gobernanza ambiental mundial,[27] instalándose en una esfera que para las derechas radicales son de atribución exclusiva de los Estados nacionales. Por eso, para ciertas corrientes estratégicamente más "sensibles" a la crisis ambiental, la fórmula será "nacionalizar" la cuestión.

De este lado del Atlántico, sin duda, Trump (primer mandato, 2017-2021) y Bolsonaro (2018-2022), como ahora Milei en la Argentina (2023-), muestran hasta dónde pueden llegar las extremas derechas con sus políticas negacionistas. No es solo el hecho de retirarse de las negociaciones multilaterales (COP, Acuerdo de París), sino principalmente el desmontaje sistemático de la legislación ambiental y energética nacional y el impulso redoblado que toman los

combustibles fósiles. Fiel a su concepción fósil de la economía, apenas asumió, Trump volvió sobre las medidas de su predecesor Barak Obama y firmó la Orden Ejecutiva para Promover la Independencia Energética y el Crecimiento Económico. En esa línea, desmanteló el Plan de Energía Limpia (que ponía límites a las plantas de carbón e impulsaba nuevas exigencias de eficiencia y reducción de emisiones de vehículos automotores), desreguló la industria fósil, nombró numerosos funcionarios vinculados con ella y, por supuesto, tal como había prometido, salió del Acuerdo de París (Lander, 2019: 146-147).

En los primeros seis meses, Trump lanzó America First ("Estados Unidos primero"), el componente energético de su estrategia global para obtener no solo la independencia de Medio Oriente y la soberanía energética, sino el "dominio energético" basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales extraídos a través del *fracking*. Todo acompañado por una política antiambiental que se extendió a la cancelación del lenguaje ambiental:

> Desaparecieron las referencias al cambio climático y se alteró la forma en que los temas ambientales eran abordados en las páginas web de estas instituciones gubernamentales, comenzando por la Casa Blanca (cit. en Lander, 2019: 149).

Muchas páginas web sobre estos temas desaparecieron de la noche a la mañana, lo que impidió el acceso a la información pública. En muchas, el cambio climático fue sustituido por conceptos como "sustentabilidad" o "resiliencia". Después de un año en que los Estados Unidos fueron golpeados con particular intensidad por desastres naturales asociados al cambio climático, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) eliminó al cambio climático de su plan estratégico.

Algo similar sucedió con Bolsonaro. Para el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo (2019):

> La izquierda secuestró la causa ambiental y la pervirtió hasta el paroxismo, estos últimos veinte años, con la ideología del cambio climático, el climatismo. […] El climatismo es simplemente una táctica globalista para instilar el miedo, para obtener más poder.

Así, el negacionismo fue también la excusa para atacar al "globalismo", asociarlo con un "neoimperialismo" representado por las organizaciones multilaterales y afirmar así un lenguaje soberanista –poco creíble– en relación con la Amazonía (Urbán, 2024: 188). También se implementó una política acelerada de flexibilización ambiental y desmantelamiento de las leyes vigentes. Las organizaciones públicas encargadas de poner en obra la política ambiental –vigilancia, protección, fiscalización– fueron desestructuradas financiera y administrativamente en nombre de la desburocratización. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente fue recortado en un 25% y la Secretaría de Cambio Climático fue suprimida. Además, la Amazonía sufrió la peor deforestación desde 2008 y los peores incendios. Es muy recordado "el día del fuego", instaurado por Bolsonaro, en el que ganaderos y otros productores salían a hacer las quemas.

Por otro lado, la supresión de órganos de fiscalización y control estatal, sobre todo en relación con la Amazonía, afectó muy particularmente a los pueblos indígenas. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue judicializado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. No por casualidad los pueblos indígenas se convirtieron en los principales opositores al gobierno de Bolsonaro, junto con el mundo de la cultura. Apropiación de tierras indígenas, deforestación, minería ilegal, interrupción de suministros de alimentos y medicamentos; al menos 570 niños del pueblo yanomami murieron bajo el gobierno de Bolsonaro por desnutrición o malaria, entre otros problemas de salud. Los indígenas aseguran que más de 20.000 mineros ilegales, conocidos como *garimpeiros*, entraron a su territorio a partir de 2019. Roraima, la zona en disputa, fue declarada en emergencia sanitaria recién en 2023, con la tercera

presidencia de Lula Da Silva. “La Amazonía es una zona muy rica. En Roraima hay una tabla periódica bajo tierra”, había expresado Bolsonaro (Louault, 2020), quien hoy enfrenta una acusación por incitación al genocidio, tratada por el Supremo Tribunal de Justicia desde 2023.

Entre el discurso dilatorio y el ecofascismo

Mencioné más arriba que antes de las elecciones de junio de 2024 había en la UE veintiún partidos de extrema derecha representados en el Parlamento en Bruselas, que votan regularmente en contra de políticas ambientales y energéticas –dos de cada tres, según un estudio citado– (Urbán, 2024: 189). Ahora bien, el Pacto Verde Europeo es una política de Estado, a nivel regional, e incluye un paquete importante de financiamiento orientado a la transición energética. Esto hace que los partidos de extrema derecha no puedan evitar hablar y debatir sobre crisis climática. Además, se torna cada vez más difícil negar el impacto del cambio climático ante eventos extremos, como inundaciones, olas de calor o, más recientemente, la DANA, que arrasó con la zona de Valencia, un fenómeno metereológico exacerbado por la crisis climática y la ausencia de alertas tempranas.

Sin embargo, cuando estos partidos acceden a cargos ejecutivos en varias comunas –como sucede con Vox en España–, se resisten a implementar las políticas públicas propuestas o bien a obedecer la Ley de Cambio Climático de la UE. Se produce así el giro hacia el negacionismo interpretativo, pues se reconoce que el cambio climático existe, pero se lo minimiza o se distorsionan sus causas. Tal es así que en investigaciones académicas se habla de un cambio de táctica de las extremas derechas y un giro hacia un discurso “retardista” o “dilatorio” que busca nacionalizar la problemática ambiental, revindicando “la inocencia nacional” o la falta de

responsabilidad frente a otros países más contaminantes (Elorza y otros, 2023).

Este discurso dilatorio es posterior a la expansión de movimientos juveniles como Fridays for Future, surgido en 2018 como militancia estudiantil contra el calentamiento global y cuya referente más conocida es la activista sueca Greta Thunberg. Se trata de un discurso que articula diferentes estrategias, en apariencia contradictorias, como muestra un estudio realizado por la Universidad de Cambridge (Lamb y otros, 2020). Por un lado, acompañan el tecnooptimismo, que suele apostar al *bussines as usual*; por otro, enfatizan los efectos negativos de las políticas climáticas sobre el nivel de vida de la sociedad.

Este tipo de discursos sobre los impactos negativos en el nivel de vida de la sociedad apela a los miedos, sobre todo de las clases medias y bajas, miedos que tienen su parte de verdad dado que en el marco de políticas de transición esos sectores suelen ser los más perjudicados. Ahí está el ejemplo aleccionador de los "chalecos amarillos", el movimiento social que irrumpió en Francia en 2018 contra el alza del precio de los combustibles bajo el gobierno de Macron, que mientras penalizaba a sectores medios y medios bajos establecía políticas fiscales para bajarles los impuestos a los más ricos.

Por otro lado, en la extrema derecha han surgido sectores ecofascistas que plantean la necesidad de responder a las demandas de un electorado potencial sensible a la crisis climática. El partido que picó en punta fue el de Marine Le Pen, que hacia el año 2000 abandonó el negacionismo para incorporar temas ambientales; una nueva impostación que algunos llaman *ecobordering*, pues propone cerrar las fronteras con la excusa de la ecología. El *ecobordering* o ecofrontera sostiene que la inmigración es una amenaza para el ambiente local o nacional ante la escasez de bienes naturales y la creciente contaminación. Arraigo a la tierra, supremacismo blanco-occidental y ambientalismo son los tres elementos clave. "Si se es nómada, no se puede ser ambientalista", expresó alguna vez Marine Le Pen, mientras su delfín Jordan Bardella manifestaba que "las fronteras son el mejor aliado del ambiente; es a través de estas que

salvaremos el ambiente" (cit. en Santolini, 2024: 31). El ecofascismo deviene así en una suerte de proteccionismo ambiental a escala nacional que continúa negando la asociación entre capitalismo y crisis climática pero busca responsabilizar a la inmigración masiva, los "vándalos ambientales", que serían lo opuesto a los "custodios nativos" (Santolini, 2024).

El ecofascismo no solo no es algo nuevo, sino que pone en duda la idea generalizada de que la ecología está exclusivamente en sintonía con una ideología progresista. Existe una corriente malthusiana asociada a la ecología que, ante la finitud de los recursos, ve en la sobrepoblación el mayor problema ambiental. Asimismo, en sus orígenes, la ecología se insertó en un cuadro reaccionario, vinculado a la simbiosis entre sociedad humana y ambiente natural, donde podía leerse un rechazo a la modernidad, la revolución burguesa, el liberalismo, el laicismo y la vida contaminada o corrupta de las ciudades como opuestos al tradicionalismo rural.

La serie inspirada en la novela *El cuento de la criada*, de Margaret Atwood, retrata con una estética de la crueldad un régimen teocrático y ecofascista. Sin embargo, sin necesidad de recurrir a la ficción, cabe recordar que la Alemania nazi fue el terreno propicio donde se desarrollaron las bases de un ecofascismo anclado en la teoría del *lebensraum*, del espacio vital, la tesis de la sangre y el suelo en la que convergían nacionalismo y racismo. No hay que olvidar que Hitler era vegetariano y Göring, animalista; por su parte, Himmler había creado, en el campo de concentración de Dachau, una gran extensión de tierras de regadío donde los prisioneros realizaban trabajos forzados. El nombre que la macabra imaginación de la SS le dio a esta empresa agrícola fue "jardín de herbolaria". Himmler también promovía la creación de una "medicina popular" naturista, "un proyecto de gran prestigio en la política sanitaria del nacionalsocialismo".[28]

Sin embargo, el ecofascismo aparece como una "modalidad organizativa del pensamiento ecológico más reaccionario", antes que como un movimiento organizado (Santolini, 2024), y es utilizado por extremas derechas como el Reagrupamiento Nacional en Francia, el Partido Nacionalista Suizo y el British National Party, que dice ser "el

único partido verde de Europa". En 2024, surgió un partido de extrema derecha ecologista en Rumania que, a todo lo dicho, suma una perspectiva anticolonial al posicionarse como país periférico –"un lugar que no importa"– y celebra al "auténtico campesino rumano" (Mihai y Ungureanu, 2024).

El término "ecofascista" comenzó a difundirse luego de que un etnonacionalista australiano, que se autoidentificó como tal, atacó en 2019 dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y asesinó a 51 personas y dejó un tendal de 40 heridos. Poco después hubo un atentado similar en el supermercado Waltmart de El Paso, en los Estados Unidos, contra personas de origen mexicano, y el asesino hizo un alegato ecofascista difundido en internet donde declaraba que "el nacionalismo verde es el único nacionalismo" y concluía:

> No hay conservadurismo sin naturaleza, no hay nacionalismo sin ambientalismo. Nacimos de nuestras tierras y nuestra propia cultura fue moldeada por nuestras tierras. La protección y preservación de estas tierras tiene la misma importancia que la protección y preservación de nuestros ideales y nuestras creencias. No hay tradicionalismo sin ambientalismo (cit. en Santana, 2019).

Estas manifestaciones ecofascistas retoman la teoría del reemplazo poblacional, tan en boga en Europa, y suponen una adaptación de la problemática ambiental en términos de nacionalización, negando sus rasgos globales y su conexión con la dinámica capitalista. Su accionar, aunque aislado, no escapa a la preocupación de un movimiento y un activismo ambientales que, en líneas generales, son progresistas. En su libro *On fire*, Naomi Klein escribió:

> Lo que yo me temo es que, a menos que la forma en que nuestras sociedades afrontan la crisis ecológica cambie significativamente, seremos testigos con mucha más frecuencia de este tipo de ecofascismo supremacista blanco, convertido en una racionalización rabiosa de la negación de

> asumir nuestras responsabilidades climáticas colectivas (Klein, 2021: 64).

* * *

Existen distintas variantes de la extrema derecha, aunque todas comparten la estrategia de la polarización asimétrica como lógica de construcción política. Más allá de que algunas se moderan cuando llegan al poder y otras se radicalizan, la invalidación del otro es menos una cuestión retórica que el signo de un "cambio de época", no es tanto un "techo" como un "piso", ya que augura un cambio de régimen, un horizonte en expansión hacia regímenes antipluralistas o iliberales que buscan consolidar un modelo autocrático de poder. Así, el proyecto de las extremas derechas apunta a la fascistización de la sociedad, que ante la envergadura de la policrisis y el derrumbe de las certezas se refugia en imágenes de un pasado glorioso y feliz, en una utopía neorreaccionaria.

Asimismo, como hemos visto, es preocupante la utilización de las nuevas tecnologías de compilación y análisis de datos para capturar y canalizar los sentimientos más extremos, y en especial el modo en que las derechas radicales –los ingenieros del caos– hacen uso de ellas. Por último, en su alianza con los CEO y multimillonarios, las derechas radicales expresan lo que he dado en llamar un "pancapitalismo del fin", que exacerba aún más el capitalismo extractivista y la supresión de derechos, acelerando la policrisis civilizatoria.

En el marco del agravamiento de la crisis climática, las extremas derechas no solo ensayan nuevas formas de negacionismo, sino que incluso abren la puerta a un ecofascismo bajo formatos nacionalistas que expresan el rechazo feroz a un régimen climático de gobernanza global. Ciertamente, las propuestas ecofascistas comparten con las soluciones globalistas una mirada optimista del cambio tecnológico como medio para resolver la crisis climática, pero proponen a rajatabla una nacionalización de la cuestión ambiental, que invierte

las responsabilidades y conlleva el racismo y la exclusión. La utopía reaccionaria y la refosilización del sistema que promueven las derechas radicales constituyen un salto sin escalas al capitalismo del caos y el choque con las fronteras planetarias.

Por último, el telón de fondo de este proceso es que las fuerzas progresistas y las izquierdas institucionales se han quedado sin imaginario político transformador. Lejos de apostar a propuestas de transformación radical y a acciones transversales en términos de justicia, no solo han avalado el proceso de profundización de las desigualdades, sino que incluso hay quienes, ante la embestida derechista, retroceden todavía más en términos político-sociales facilitando de este modo el camino más directo de acceso al poder para las extremas derechas.

---

[23] Propongo retomar las elaboraciones teóricas realizadas por la sociología política de América Latina en relación con los populismos o lo nacional-popular, lectura que propone una mirada comprensiva y crítica sobre los regímenes populistas de mediados del siglo XX, así como los de principios del siglo XXI, vinculados a los progresismos latinoamericanos (Svampa, 2016), tema que ya abordé en el capítulo 3.

[24] Por cadena de equivalencias, entendemos, de acuerdo con Laclau (2005), la articulación entre demandas sociales insatisfechas y heterogéneas, en torno a un símbolo común que transciende esas demandas.

[25] Todo esto estaba en evaluación cuando empezó a ser cuestionado por sectores evangélicos, católicos y de ultraderecha. Bolsonaro, entonces diputado, fue el vocero de esta campaña de difamación y Dilma Rousseff finalmente cedió a la presión.

[26] El término *greenwashing* o "lavado de imagen verde" es una estrategia de marketing utilizada por empresas para dar la impresión de que son respetuosas del ambiente. A través de promesas y campañas que exageran o distorsionan la realidad de sus prácticas ambientales, buscan ganar la confianza de los consumidores y mejorar su imagen pública.

[27] Incluso el Acuerdo de París contempla el poder decisor de los Estados nacionales en el proceso de reducción de las emisiones de CO_2.

[28] Ver <n9.cl/gq3r9>.

5. El experimento Milei

> Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad de que "donde nace una necesidad, nace un derecho", pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada "la justicia social", que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo.
> **Javier Milei, agosto de 2023, tras las elecciones primarias**

> Que ser fascista se vuelva vergüenza / que la empatía se haga costumbre.
> **Cartel en la marcha convocada por las organizaciones GLTBQI+ y feministas, 1 de febrero de 2025**

¿Cómo fue posible que un recién llegado a la política, un representante del anarcocapitalismo, de la derecha radical, casi sin estructura partidaria, pródigo en insultos y descalificaciones, ganara las elecciones presidenciales en la Argentina a finales de 2023? ¿Qué cambió en los últimos años en la sociedad argentina para que se buscara de manera deliberada desconocer los consensos mínimos sobre la democracia y los derechos construidos a lo largo de cuatro décadas? ¿Qué emociones y sentimientos se activaron a la hora de votar? ¿En qué consiste el proyecto de transformaciones radicales que Milei busca implementar en la Argentina? ¿Existe un acoplamiento entre el neoliberalismo desde arriba y el neoliberalismo

desde abajo? ¿Hasta dónde llega el apoyo de la sociedad argentina a Milei?

Las preguntas planteadas no son meramente retóricas y merecen ser abordadas en diferentes niveles de análisis. Por ello, dividiré este capítulo en cinco secciones. En primer lugar, me centraré en los elementos que Milei comparte con otras derechas radicales y en sus especificidades (el paleolibertarianismo). Siguiendo esta línea, en segundo lugar, buscaré caracterizar el modelo político de Milei, tal como viene delineándose luego del primer año de gestión. En tercer lugar, resulta importante sondear algunas de las transformaciones de la subjetividad popular ocurridas en las últimas décadas para poder reflexionar sobre el apoyo a las medidas adoptadas. En cuarto lugar, abordaré la pregunta acerca del nuevo ciclo de luchas en relación con la "batalla cultural". Por último, trataré el negacionismo climático y la política ambiental del gobierno, que se revelan como núcleos centrales del programa de Milei, con su Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el avance acelerado del extractivismo sobre los territorios.

Lo común y lo específico de un experimento radical

Aunque los rayos del sol peguen de diferente manera en el sur del planeta, Milei reproduce en clave vernácula lo que vienen escribiendo a nivel internacional en el manual de la derecha radical, desde Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en los Estados Unidos, Benjamin Netanyahu en Israel y Victor Orbán en Hungría hasta los variopintos líderes de los partidos de derecha italianos, incluida la actual primera ministra Giorgia Meloni, y Santiago Abascal, adalid de Vox, en España. Al igual que otros líderes recientes, Javier Milei se hizo conocido en los medios televisivos y de ahí saltó a la política. Hasta hace unos años era solo un personaje bizarro, caracterizado por sus ataques iracundos y sus ideas radicales en economía; pero gracias a su estilo agresivo e histriónico,

en pocos años escaló desde los programas de variedades hasta el *prime time*.

En su primera incursión en la política partidaria, en las elecciones parlamentarias de 2021, Milei obtuvo un sorpresivo 17,3% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual logró dos escaños en la cámara baja. Dos años más tarde, en agosto de 2023, su triunfo en las elecciones primarias abrió la reconfiguración del escenario político argentino al romper la bipolaridad instalada entre peronismo y derecha neoliberal y reinscribirla en una nueva clave: la oposición entre la derecha libertaria y la "casta". Su victoria en la segunda vuelta, con el 56% de los votos frente al 44% del candidato del peronismo unido Sergio Massa, fue posible gracias al acuerdo explícito con la fuerza comandada por el expresidente Mauricio Macri. Milei obtuvo así un triunfo contundente que atravesó todas las clases sociales y casi todas las provincias argentinas, a excepción de tres, entre ellas la más importante, Buenos Aires, dominada por el peronismo kirchnerista, a la que se sumaron las norteñas Santiago del Estero y Formosa. En un escenario de rápida normalización de la derecha radical, funcionarios y representantes de Propuesta Republicana (PRO) e incluso exfuncionarios peronistas dieron el salto a LLA mientras se consolidaba una dinámica de polarización asimétrica.

En el capítulo cuatro, definí la polarización asimétrica como una configuración política bipolar que no se ejerce por igual desde ambos polos, marcada por un discurso antipluralista y una práctica política agresiva, de abierta invalidación del otro. La polarización asimétrica marca el surgimiento de los contornos de una nueva política, la punta de un iceberg que nos muestra cómo la política tradicional es fagocitada y colonizada por otra lógica, propia de las pasiones extremas, que busca instalar una economía afectiva basada en el hiperindividualismo y en el desprecio por el Estado y las formas de solidaridad colectiva.

Tal como sucedió en otros países con el avance de la derecha radical, asistimos atónitos al desfile de personajes inverosímiles, completos desconocidos para la ciudadanía argentina, que además de utilizar un lenguaje vulgar y agresivo y revelar un gran

desconocimiento de los acuerdos básicos de la vida política y social, impusieron una agenda de destrucción de derechos arremetiendo contra los consensos mínimos de la democracia argentina. La toma del aparato estatal por una "nueva élite", con sus posturas promercado y sus alianzas empresariales, hace que políticas de Estado vinculadas a la cultura, los derechos humanos, la salud y la educación, sostenidas durante décadas, se vean cuestionadas y sean desfinanciadas o lisa y llanamente desmanteladas.

Por otro lado, si bien durante su ascenso Milei utilizó sellos políticos preexistentes y obtuvo apoyos imprescindibles de la llamada "casta" o "vieja política" (González, 2023), a la cual continúa atado para aprobar leyes o sostener decretos de necesidad y urgencia y vetos presidenciales, su núcleo duro está compuesto por personajes variopintos, sin trayectoria política ni *expertise* alguna, que lograron dar el salto al Congreso nacional solo por haberse enrolado y respaldado a tiempo la candidatura presidencial de Milei. A esta *troupe* bizarra pronto se sumaron políticos y oportunistas de diferente color que migraron de la derecha *mainstream* (PRO) hacia la derecha radical (como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, excandidata a la presidencia por el PRO). Contrariamente a lo que muchos creían, y pese a contar con una minoría de representantes en el Congreso, en el transcurso del primer año y medio la derecha radical comenzó su trabajo de absorción de la derecha *mainstream*, en un contexto triunfalista avalado por la baja de la inflación y un severo programa de ajuste.

Hace poco, el historiador estadounidense Quinn Slobodian acuñó el concepto de *crack up capitalism* (capitalismo de la fragmentación) para referirse a la multiplicación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, zonas donde no hay derechos sociales ni regulaciones estatales, zonas libres de impuestos. Esto es, zonas francas, ciudades-Estado, paraísos, enclaves, puertos libres, polos de innovación que se expanden a mansalva, libres de cualquier regulación estatal: Liechtenstein en Europa, comunidades cerradas en los Estados Unidos, enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, distritos en Dubái. Hacia 2023 había más de 5400 zonas liberadas –algunas muy pequeñas, apenas un megaproyecto

urbano, como la Nueva Ciudad de Songdo (Distrito Internacional de Negocios de Songdo) en Corea del Sur, Neom en Arabia Saudí o Fujisawa en Japón– que funcionan como ciudades-Estado privadas con sus propias reglas. "Los defensores de las zonas sugieren que la utopía del libre mercado podría alcanzarse mediante actos de secesión y fragmentación, creando territorios liberados dentro y fuera de las naciones, con efectos tanto disciplinarios como de demostración para otros Estados", nos dice Slobodian en la introducción del libro, publicado en 2023 en español bajo el sugestivo título *El capitalismo de la fragmentación. El radicalismo de mercado y el sueño de un mundo sin democracia.*

También se los llama "ciudades chárter" a estos enclaves semiautónomos, como es el caso de Próspera ZEDE (zona de empleo y desarrollo económico), en Honduras, un experimento libertario creado en 2013 por una ley especial, que se promociona como un centro de innovación tecnológica y de longevidad, con un régimen fiscal y regulatorio propio.

Hasta no hace mucho, este sueño radical de múltiples e infinitas zonas liberadas de control estatal o cualquier tipo de regulación parecía ser el proyecto de algunos superricos, como Peter Thiel, fundador de PayPal y socio de Facebook, que se atrevió a proponerlo tempranamente luego de la crisis financiera de 2008. Pero lo cierto es que, en tiempos de ganancias extraordinarias del capital, en el que el libertarianismo pasó a ser la filosofía de los ricos, estas zonas liberadas parecen instalarse como demanda. Hoy, en los Estados Unidos, se las llama abiertamente "ciudades libres" o "ciudades de la libertad" y el objetivo de sus promotores es la creación de áreas desreguladas en cada estado.

Así, la aspiración de los libertarios es generar vías de escape hacia un mundo sin regulaciones, con más países libres de impuestos y de "cargas" estatales. Javier Milei es uno de los anarcocapitalistas o paleolibertarios que adhieren a esta visión y que, a diferencia de los superricos que apuestan a más microzonas liberadas, propone un experimento radical que implica un salto de escala, en clave de Estado nación, de este capitalismo de la fragmentación. No es casualidad que Milei se refiera a los empresarios que fugan dólares

como “héroes” que “escaparon de las garras del Estado” (*La Nación*, 2024), como dijo en el Foro Llao Llao celebrado en Bariloche en abril de 2024. Poco antes, en el Foro Internacional de Davos, había expresado:

> No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. […] Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del período de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado, el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con la Argentina como un aliado incondicional.[29]

En consecuencia, el neoliberalismo radical de Milei le añade un plus no menor a esta alianza entre política y gran capital, en sintonía con la ideología de los superricos: a saber, el desmantelamiento del Estado, que comienza con políticas de ajuste (la motosierra), “las más radicales en la historia de la humanidad” según el presidente argentino, y se dirige a una mayor desregulación, al desconocimiento de derechos sociales y laborales, a la creación de una Argentina “libre” en clave pancapitalista.

El anhelo del anarcocapitalismo de Milei es convertir a la Argentina en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos como Elon Musk o, en su versión local, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que se radicó en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina. Este plus libertario tiene como mentor a Murray Rothbard, un economista marginal estadounidense al que Milei leyó hace ya diez años e hizo que cambiara su visión de la economía, por entonces alineada exclusivamente con la escuela austríaca. Dentro del

paleolibertarianismo, el individuo y la propiedad privada son uno y lo mismo para Rothbard; el individuo es concebido como una entidad suprema que se impone libremente en el mercado, sin regulaciones de ninguna especie. Por eso Milei sostiene que el Estado es un "violador serial" y un "degenerado fiscal" que oprime al individuo y bloquea el funcionamiento del libre mercado. En suma, se trata de una narrativa pancapitalista que desconoce por completo lo colectivo y por ende toda regulación social en nombre del bien común. No por casualidad, dentro de esta concepción, todo puede ser comprado y vendido, los bienes pueden ser privatizados ya se trate de órganos, ríos, océanos o ballenas, como han dicho más de una vez Milei y varios de sus mentores y equipo.

De modo que no es mero cholulismo –aunque lo haya– la admiración excesiva de Milei por megamillonarios como Musk, a quien se acercó desde el inicio de su gestión; es también una señal de identificación ideológica. Lo notorio de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario no se había animado a tanto, salvo en determinadas ciudades o zonas; pero nunca un país entero. Milei les devuelve el sueño hecho realidad, a la medida de la filosofía libertaria, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio "libre" para un pancapitalismo donde solo existirían el mercado y el derecho absoluto del capital.

Cambio de régimen

La gestión de Milei arrancó con una estrategia de shock (ajuste fiscal, megadevaluación del 60% y liberalización total de la economía). El primer megadecreto, de enero de 2024, abarcó temas clave como la desregulación económica, la reforma del Estado, la liberalización de las relaciones laborales, el comercio exterior, la energía, el espacio aéreo, la justicia, la sanidad, la comunicación, el turismo y el deporte. Esto muestra desde el inicio que el cambio de régimen no es solo de índole económico-social: aspira a ser político-

institucional. De un plumazo se barre con un conjunto de derechos sociales y laborales, de leyes incluyentes que suponen un mejor acceso a servicios básicos y una restricción a los oligopolios.

En junio de 2024, luego de un primer intento fallido, se aprobó la Ley Bases, una ley de leyes que es una reforma constitucional encubierta que además de otorgar poderes extraordinarios al presidente durante un año, permite privatizaciones de empresas públicas, introduce un régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y profundiza la mercantilización de los bienes naturales a extremos escandalosos, entre otros numerosos temas. Esto se logró gracias al apoyo parlamentario de la derecha *mainstream* y de espacios como la Unión Cívica Radical, algunas conversiones provenientes del peronismo y otras fuerzas menores.

Así, fueron sancionadas cientos de medidas que no solo benefician a las grandes empresas, arrasando con cualquier derecho social, económico y ambiental previo, sino que en ciertos casos benefician a "determinadas" empresas. Se habló mucho del involucramiento de equipos jurídicos de grandes empresas en la redacción de diferentes artículos, en esta suerte de piñata ofrecida por Milei: medicina privada, sistema bancario y financiero, medios de comunicación, productos farmacéuticos, organizaciones de grandes industriales, supermercadistas, empresas de hidrocarburos e incluso ingenios azucareros habrían sido beneficiados por megadecretos y leyes que dejan literalmente desamparado al grueso de la sociedad argentina, e incluso a la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas.

La estrategia de shock se monta también sobre el explícito afán de revancha social y política de la derecha neoliberal, que lamenta no haber realizado las reformas durante el período previo, entre 2015 y 2019, cuando Mauricio Macri era presidente y el clima político y social era adverso a un ajuste salvaje. La política de "motosierra" se viene aplicando en detrimento de las jubilaciones y del funcionamiento de áreas clave del Estado y del empleo privado. Tras el ajuste, solo durante el primer año de gobierno de Milei se perdieron 185.000 puestos de trabajo en el sector formal, 119.000 en el sector privado, mientras que 51.000 fueron del sector estatal

(*Infobae*, 2025). Estos últimos corresponden mayoritariamente a la administración pública y a empresas estatales y abarcan desde la paralización de la obra pública, despidos en hospitales, el desguace del Instituto de Cine, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto de Lucha contra la Discriminación, la supresión del Ministerio de la Mujer, la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena,[30] entre otros organismos oficiales. Incluye además el desfinanciamiento de las universidades públicas y del Conicet. En realidad, el proceso de regresión es tan grande que resultaría imposible armar un listado completo de las instituciones y políticas de Estado que Milei ha atacado o suprimido.

Durante 2024 cerraron más de 12.000 empresas, sobre todo en la construcción, el comercio, la reparación de vehículos, el transporte y el almacenamiento, lo cual provocó una caída del PBI y del consumo. Según el Indec, en el tercer trimestre de 2024 el desempleo llegaba al 6,9%, un 1,2% más que el mismo trimestre de 2023 (*Página/12*, 2025). A estos guarismos claramente negativos se debe contraponer la caída de la inflación, que en 2024 fue del 117,8%, casi 100 puntos porcentuales menos que en 2023. Por otro lado, al comienzo la pobreza dio un salto importante: en el primer semestre de 2024 alcanzó el 52,9%, once puntos más que cuando Milei asumió el gobierno. Sin embargo, hacia el segundo semestre bajó a un 38,9% gracias a la desaceleración de la inflación, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, según un informe del gobierno ratificado por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA. Al mismo tiempo, los datos de distribución del ingreso del tercer trimestre difundidos por el Indec indican que la brecha entre ricos y pobres se amplió a 18 veces (Muzio, 2024).

En términos sociales, el gobierno de Milei adoptó una política de disciplinamiento de la protesta de la mano de Patricia Bullrich, nuevamente ministra de Seguridad, cargo que ya había ejercido durante el gobierno de Mauricio Macri. Bullrich activó un dispositivo fuertemente represivo (mediante el protocolo antipiquetes) y anticonstitucional que busca generar una política del miedo y desalentar las movilizaciones sociales. En febrero de 2024, cuando

se debatió por primera vez la Ley Bases, 285 personas resultaron heridas; el 10% eran comunicadores y periodistas. Durante la aprobación de dicha ley, en junio de 2024, 34 personas fueron detenidas al azar y pasaron varios días en prisiones de alta seguridad imputadas con figuras penales desmesuradas, como sedición o intento de golpe de Estado. Un informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2024 destaca la pérdida de derechos durante el primer año de gestión de Milei y advierte sobre "el achicamiento del espacio cívico y de protesta". Señala también que durante 2024 se confirmó un mínimo de 1155 personas heridas en contexto de represión, muchas con lesiones graves, de las cuales 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión. Asimismo, "la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva" (Amnistía Internacional, 2024). El 12 de marzo de 2025 se produjo una fuerte represión en la marcha semanal de jubilados frente al Congreso, en esa ocasión acompañada por hinchas de equipos de fútbol, que dejó más de 50 heridos, uno de ellos de gravedad, el fotoperiodista Pablo Grillo. El informe anual de Reporteros sin Fronteras señala que durante la gestión de Javier Milei la Argentina es uno de los países donde se registra un mayor deterioro de la libertad de prensa, una caída de 47 lugares, entre 180 países (*La Nación*, 2025).

La instalación de un discurso libertario violento viene acompañada de una política deshumanizante, caracterizada por la falta de empatía hacia los sectores más vulnerables, se trate de los jubilados (quienes son apaleados sistemáticamente en sus marchas semanales al Congreso Nacional, vallado y militarizado para la ocasión), de enfermos con patologías críticas (a quienes les interrumpieron el suministro estatal de medicamentos), de personas con discapacidad (modificaron la normativa para otorgar este tipo de prestaciones, utilizando incluso términos discriminatorios en el Boletín Oficial) o del desguace de hospitales psiquiátricos.

En suma, desde hace más de un año la Argentina se encuentra inmersa en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales) y de entrega explícita, sin pudor

alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

Neoliberalismo "desde abajo"

El triunfo de Milei representó una ruptura con la polarización existente y su reescritura en una nueva matriz, ya que su crítica apunta no solo al kirchnerismo sino también a la derecha *mainstream*, ambos símbolos de la "casta". Milei vino a encarnar "lo nuevo" al movilizar una experiencia de pobreza, rabia y frustración, carencias y descontento de amplios sectores populares que vieron en él la posibilidad de un cambio social radical y de empoderamiento en tanto individuos, independiente del Estado.

En esta línea, el voto a Milei refleja una nueva inflexión en el proceso de transformación de las clases populares, pues en los últimos veinte años se produjo un deterioro del trabajo asalariado, y se consolidó una franja cada vez mayor de trabajadores pobres. La pospandemia agravó este fenómeno de los trabajadores cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. En 2022, el 44% de los trabajadores tenían un empleo precario: el 26% eran trabajadores informales y 18% eran autónomos precarios o de subsistencia. Y si bien en los primeros trimestres de 2021 y 2022 el empleo formal creció un 2%, su recuperación fue impulsada por el empleo informal, que creció el 18% (Sosa y Smith, 2022).

Por otro lado, los datos de la inflación de la última década y los fracasos económicos de los últimos gobiernos no hicieron más que empeorar la desconexión de diversos sectores sociales con el Estado. Tengamos en cuenta que luego de la crisis de 2001 el kirchnerismo logró reestablecer una conexión entre el Estado y los sectores populares, a través de una política de subsidios (que se consolidaría con la Asignación Universal por Hijo [AUH]) y de un modelo de inclusión anclada en el consumo (Svampa, 2017). Además, entre 2004 y 2011, hubo también generación de empleo y

restablecimiento de los convenios colectivos de trabajo. A partir de 2011, con la contracción en la economía (caída de los precios de las *commodities*) y el deslizamiento hacia un nuevo ciclo de crisis económica, el escenario social fue mutando. A partir del gobierno de Macri y muy especialmente durante la gestión de Alberto Fernández, con la escalada de la inflación, este contrato social entre Estado y sectores populares fue erosionándose cada vez más. En 2020, la inflación fue del 36,1%; en 2021, alcanzó el 50,9%; en 2022, el 94,8%; y, en 2023, el 211,4%, la cifra más alta desde 1991 (214%). Ya dijimos que en 2024, primer año de la gestión Milei, la inflación cerró en 117,8%. Pese a la contracción fuerte del consumo, es precisamente la baja de la inflación y el aumento del monto de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar (aun si su actualización está por debajo de la inflación) la que sustentan gran parte del respaldo social al programa económico de Milei.

Por último, se ha hablado mucho del apoyo de los trabajadores a Milei, sobre todo aquellos vinculados al nuevo capitalismo de plataformas. Estos sectores precarizados encontraron en Milei un referente insoslayable en su crítica a la clase política y al papel del Estado, cuya crisis se profundizó durante la pandemia, en el marco del encierro y de la pérdida de lazos económicos, sociales y familiares. Muchos de ellos salieron a la calle a protestar contra el confinamiento con el lema "No es la pandemia, es la cuarentena". Sin embargo, sería un error pensar que el voto a Milei, como antes el de Bolsonaro, se agota ahí. Además de ser un voto interclasista, el apoyo a Milei da cuenta de la importancia de una ideología invidualista, de tipo emprendurista, algo que los antropólogos Pablo Semán y Nicolás Welschinger (2023) han explicado bajo el término "mejorismo":

> La de emprendedor no es una categoría meramente económica sino centralmente moral: "la gente de bien" no permite que nadie le regale nada. Para los *mejoristas* el esfuerzo personal es la medida de todas las cosas y la

> cuantificación de su rentabilidad la vara con que juzgar la dignidad ajena.

Estos sectores promercado habrían encontrado en las ideas libertarias de Milei un incentivo. En esta línea, la idea de "hacerse cargo de uno mismo" y entender la precariedad en clave de autonomía (Semán, 2024) reflejaría el acoplamiento entre un neoliberalismo desde arriba y un neoliberalismo desde abajo. Como viene sosteniendo José Luis Coraggio, el neoliberalismo no es solo un "discurso de poder", sino parte del "sentido común"; una estructura construida sobre la base de determinadas categorías que indican lo correcto, lo posible y lo no posible (Coraggio, 2010: 391). Así, existe también un "neoliberalismo desde abajo" (Gago, 2014), expresado, por ejemplo, por las economías populares, revestido de una gran capacidad polimórfica y atravesado por tensiones, y que debe ser leído en clave de subjetividades y prácticas:

> No entender el neoliberalismo de esta manera y obviar sus formas subjetivas y capilares (cuando no reproducirlas desde discursos desarrollistas) ha llevado a muchos movimientos progresistas a la derrota en América Latina, no solo en lo electoral que siempre es un síntoma, sino sobre todo y más fundamental, en la construcción de nuevos imaginarios, relaciones y prácticas que nos permitan superar el neoliberalismo en todas sus formas.[31]

Como en otras latitudes, hay que sumar a esto el apoyo importante de jóvenes, cuyo ciclo de politización arrancó con los debates sobre la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y tuvo su punto de inflexión durante la pandemia, que cuestionan el kirchnerismo y la narrativa de derechos, entendiéndolos como "privilegios", pero también critican el fracaso del macrismo (Vázquez, 2024: 118-119). La presencia importante de jóvenes varones es también expresión de un *backlash* vinculado al avance de las luchas feministas, la "marea verde", que instaló la necesidad de

despatriarcalizar la sociedad y repensar la distribución de los roles de género, los límites del punitivismo y la política de la cancelación. Ante esta encrucijada, había dos alternativas para los hombres jóvenes: una progresista, que promovía la deconstrucción del mandato patriarcal de masculinidad, y otra que consistía en afirmar aún más el mandato de masculinidad patriarcal tradicional y profundizar la distancia con los feminismos, oportunidad que se abrió con la nueva derecha radical. Hasta qué punto influyó esto, no lo sabemos con claridad, pero lo cierto es que muchos hombres jóvenes encontraron en Milei la chance de redefinir y afirmar su masculinidad amenazada frente al empoderamiento feminista y los nuevos mandatos de deconstrucción antipatriarcales.

Por último, como dije en el capítulo 3, el fracaso rotundo del kirchnerismo está lejos de ser inocente en esta tremenda derrota política que alejó a buena parte de la sociedad de propuestas incluyentes que apunten a la igualdad y la justicia social. A esto se suma la escasa autocrítica de estos sectores en cuanto a su responsabilidad por el aumento de la pobreza y la alta inflación. El caso es que, frente a un Estado extendido y deficiente, agravado por los multiefectos de la crisis, la corrupción y el largo encierro por el covid-19, Milei logró capturar gran parte de ese descontento, de esa rabia que se profundizó durante la pandemia. En consecuencia, pese a que el peronismo cuenta con una gran estructura política partidaria, en la actualidad encuentra dificultades para interpelar la heterogénea experiencia popular en clave de justicia social. Más aún, durante 2024 la oposición peronista no supo encontrar un eje desde el cual articular un discurso atractivo para los votantes, entrampada en liderazgos verticalistas y desgastados como el de Cristina Fernández de Kirchner.

En suma, en un contexto de fuertes transformaciones sociales, Milei logró rearticular el sufrimiento social, pero también las aspiraciones "mejoristas" de diferentes sectores que veían al Estado como un punto de obturación antes que como un facilitador de acciones individuales. Esa rearticulación se implementó bajo una ideología individualista, en la cual las ideas de "libertad" y "casta

política" todavía son altamente eficaces, en oposición a una narrativa colectivista que gira en torno de la justicia social.

Batalla cultural y polarización asimétrica

El lenguaje político se tornó particularmente tóxico y persecutorio en las redes sociales. Desde la Casa Rosada, un ejército de trolls invadió redes como X dispuesto a insultar, perseguir y doxear a quien se atreviera a criticar al nuevo presidente y sus políticas. No todos parecieron entender que esto no es algo personal ni típicamente argentino, sino parte de una ensayada –y aparentemente exitosa– estrategia de las extremas derechas a escala global. Los enemigos del régimen, englobados en la llamada "cultura woke", abarcan desde los artistas, las diversidades y los representantes de la cultura, los investigadores del Conicet y las universidades públicas.

En esta línea, la llamada "batalla cultural" es parte de la lógica de construcción política de las derechas radicales. Como sostienen las investigaciones pioneras del sociólogo Ezequiel Saferstein, desde el principio Milei consideró la "batalla cultural" como parte de su programa de gobierno.[32]

Quien impulsa con mayor fervor estos tópicos desde la extrema derecha argentina es el asesor de Milei, Agustín Laje, autor de varios libros, uno de ellos titulado *La batalla cultural* de 2022, para quien la lucha contra los progresismos, los feminismos y las izquierdas remite también a la discusión de las ideas que conforman una determinada representación del mundo. El concepto de "batalla cultural" se atribuye a Antonio Gramsci, el gran teórico marxista italiano, aunque muchas veces se lo asimila con la categoría de hegemonía, que es mucho más amplia y atraviesa diferentes dimensiones. Gramsci entendía la hegemonía como la construcción de un bloque histórico en términos de valores, ideas, creencias, como la dirección político-ideológica para la conquista y construcción del (nuevo) Estado.[33]

Como bien decían Saferstein y Goldentul (2022), antes del triunfo de Milei:

> Uno de los ámbitos en donde se escenifican la batalla cultural y la batalla política son las presentaciones de libros y el mercado editorial. Allí los nuevos referentes de la *alt right* construyen comunidades de lectores y se revelan como personalidades que atrapan y se amoldan con un contexto más amplio que desde hace años habilita ideas y políticas de derechas, antiigualitarias, jerarquizadoras y excluyentes.

Ya bajo el gobierno de Milei, esa dimensión de la batalla cultural se tradujo en un primer ataque contra la literatura, no por casualidad, escrita por mujeres. Comenzó con el ataque a las novelas *Cometierra*, de Dolores Reyes, *Las Aventuras de la China Iron*, de Gabriela Cabezón Cámara y *Las primas*, de Aurora Venturini, a las que después se añadió *Si no fueras tan niña,* de Sol Fantin. Estas obras desataron la ira de la derecha radical, que las acusó de "pornográficas". Reyes fue hostigada y amenazada de muerte en las redes sociales. Estas tres novelas notables, como el ensayo testimonial que completa el cuarteto, denuncian situaciones de abuso sexual y violencia de género o reescriben la historia de un clásico argentino –el *Martín Fierro*– en clave feminista. El disparador de las críticas no fue que hubiera alguna escena de sexo, sino que los cuatro libros fueron incorporados a las bibliotecas de los colegios secundarios de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna uno de los principales opositores al gobierno de Milei, el peronista Axel Kicillof. Sin embargo, esto es solo una parte del "problema", porque en realidad este episodio no es un puro "efecto colateral" de esa (anticipada) batalla. Como ya dije, forma parte del programa integral de Milei. Así, es probable que el ataque se extienda a otras obras, a otros autores y autoras del campo cultural, tal como viene sucediendo con el campo de la ciencia pública y con instituciones vinculadas con los derechos humanos, la construcción de la memoria

y la intervención social y ambiental, o incluso contra artistas populares.

Dije en el capítulo anterior que nada de esto es original, que esta película ya se vio en Brasil, donde hubo intentos de prohibición de obras artísticas y fueron los referentes de la música y la cultura quienes encabezaron numerosos actos en contra de Bolsonaro.

No es casual que esto se repita bajo el gobierno de Milei: las variaciones son mínimas; el patrón, muy similar. En la Argentina suma también el oportunismo de una derecha radicalizada (PRO y UCR) que avala estas medidas y contribuye a consolidar un patrón abiertamente iliberal. La polarización asimétrica o desigual va instalando así los marcos de la denominada "democracia iliberal", [34] que cuestiona el pluralismo político y el respeto a la diversidad para instalar un clima de miedo que no solo genere oscurantismo sino "pánico moral" y disciplinamiento social (bajar la cabeza), algo que amenaza abiertamente al pluralismo democrático. Queda claro que el lenguaje de la polarización asimétrica es menos un exceso de emocionalidad (ligado a las características de una personalidad –el presidente– psicológicamente inestable) y mucho más una estrategia de acumulación política llevada a cabo desde el poder sobre la base de la emocionalidad, que empuja el corrimiento de lo políticamente posible –y el umbral de lo decible– y cuyo objetivo es promover el disciplinamiento y la fascistización de la sociedad. Por último, no hay que olvidar que los rasgos de una sociedad disciplinada y fascistizada no desaparecen de la noche a la mañana, con el ocaso de un líder. Un ejemplo de esta permanencia es Brasil, donde hoy existen una sociedad y una política bolsonarista más allá de que Bolsonaro haya perdido las últimas elecciones presidenciales y esté inhabilitado para ser candidato.

Este pasaje a la polarización asimétrica o desigual, que involucra el ataque a la cultura y a las instituciones públicas, marca un cambio de época que reconfigura el escenario político y genera un gran desconcierto acerca de las claves y repertorios de acción para luchar contra este nuevo tipo de autoritarismo, crecientemente normalizado, que parece no pagar ningún costo político por sus

desmanes y amenazas, a diferencia de lo que sucede con los partidos progresistas, de izquierda u otras expresiones democráticas.

Ahora bien, hasta dónde los sectores sociales que apoyan a Milei sostienen o avalan también una política de persecución y cancelación, bajo la forma de la batalla cultural, es algo que está en discusión. Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro, que han realizado una investigación siguiendo a votantes de Milei, sostienen que quienes votaron y continúan apoyando al actual presidente argentino no necesariamente respaldan la política ligada a la batalla cultural, aunque

> es evidente que el discurso oficialista logró instalar en sus votantes la idea de que la principal vara para medir una política es su costo económico y su beneficio "palpable", haciendo que toda política de derechos parezca cuanto menos superflua (Kessler y Vommaro, 2024).

Esta valoración economicista de la gestión de Milei viene acompañada de

> cierta aquiescencia general cuando les preguntamos sobre la idea de limitar el funcionamiento del Congreso cuando este no deja avanzar al presidente en las reformas que quiere llevar adelante. Para estas personas, el balance de poderes es visto como un obstáculo, y las negociaciones políticas como algo espurio, propio de la casta (2024).

Si bien es cierto que no hay que caer en la tentación metonímica, esto es, tomar la parte por el todo, es evidente que los lenguajes de valoración de la sociedad argentina están cambiando, no solo en lo económico (la apuesta a un resultadismo económico que hoy se construye en clave neoliberal), sino también en la valoración de la democracia: se advierte una suerte de consentimiento, a veces tácito y otras explícito, en que el corrimiento de los límites de la democracia o su infravaloración no parece ser algo malo *per se*.

Durante 2024 hubo momentos en los que varias movilizaciones sociales, sobre todo aquellas relacionadas con los jubilados, las diversidades sexuales y en defensa de la universidad pública, recibieron el apoyo del resto de la sociedad. La educación pública universitaria no solo es valorada por su calidad y gratuidad, sino porque continúa siendo el símbolo de la movilidad social ascendente, algo que el historiador y sociólogo Juan Carlos Torre llama "la pasión argentina por la igualdad" (Pereyra, Smulovitz y Armelino, 2024).

Lo cierto es que las medidas de Milei, marcadas por la aceleración y la agresividad (la imagen de la motosierra), acompañadas por un aceitado y desmesurado dispositivo represivo contra las movilizaciones sociales, tienen como contracara la pasividad de amplios sectores sociales; esto ha generado desconcierto en organizaciones y sectores sociales movilizados, que experimentan no solo la normalización del autoritarismo, la regresión de derechos y la desdemocratización, sino además la poca efectividad de los repertorios de movilización y lucha colectiva.

Negacionismo climático, RIGI y expansión del extractivismo

Milei es conocido por sus posiciones negacionistas en relación con la crisis climática, actitud que comparte con gran parte de su gabinete. [35] Como ocurre con otros negacionistas, el objetivo detrás del rechazo al cambio climático es la negación de cualquier tipo de regulación nacional e internacional que limite la actividad económica y la propiedad privada, ya se haga esta en nombre de la protección de los bienes naturales o de la crisis climática. En esa línea, declaró:

> El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace diez o quince años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en

> determinados parámetros a propósito para generar miedo (cit. en Gardel, 2023).

En este marco, hubo varias modificaciones en relación con la política ambiental. En primer lugar, Milei expresó su rechazo a las instituciones de gobernanza global que luchan contra el cambio climático. En mayo de 2024, la cancillería argentina dio de baja el documento de la Agenda 2030 de la página oficial.[36] Poco después, Milei calificó a dicha agenda de "programa de gobierno supranacional de corte socialista" que atentaba "contra la soberanía de los Estados nación" y violentaba "el derecho de las personas a la vida, la libertad y la propiedad". La Argentina se convirtió también en el único país del mundo en disociarse del Pacto para el Futuro de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado en septiembre de 2024, junto con sus respectivos anexos: el Pacto Global Digital y la Declaración sobre Generaciones Futuras (Amnistía Internacional, 2024). También, en noviembre del mismo año, el gobierno argentino retiró la delegación argentina de la COP 29, que se celebró en Azerbaiyán, lo cual implicó renunciar a cualquier posible financiamiento internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En el plano nacional, en mayo de 2024, según fue publicado en diferentes medios nacionales, las autoridades del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) comunicaron de manera informal a los trabajadores que no podrían utilizar determinados términos vinculados con el cambio climático. La denuncia se dio a conocer a través del gremio de trabajadores de la entidad, que subrayó que en adelante no se podría hablar de "cambio climático", "sustentabilidad", "agroecología", "género", "biodiversidad", "huella de carbono" ni "prohuerta" (*Página/12*, 2024).

En medio de un incendio forestal de grandes proporciones en el Parque Nacional Nahuel Huapi, desatado a fines de 2024, se denunciaron, además de los despidos en el Servicio Metereológico Nacional, la precarización y una fuerte política de intimidación en el Servicio de Defensa Civil, que se tradujo en órdenes de no publicar

en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre los mapuches y "lo menos posible sobre incendios", al tiempo que se controlaban las cuentas personales de brigadistas, guardaparques y técnicos (Viale y Nemenmann, 2025).

Por otro lado, el gobierno estableció por decreto que el sistema federal de manejo del fuego pasara a manos del Ministerio de Seguridad (Decreto 1136/2024), el mismo que consolidó el protocolo de represión de la protesta social.

La ausencia de políticas de adaptación a la crisis climática se hizo visible también en Bahía Blanca, ciudad que en unas pocas horas fue azotada por una lluvia de 300 milímetros en marzo de 2025, que generó grandes estragos en la ciudad, ya castigada el año anterior por vientos huracanados. Tres días antes, el gobierno de Milei había disuelto la Dirección Nacional de Emergencias –la unidad a cargo de intervenir con diferentes profesionales en este tipo de desastres ambientales– y despedido a sus 485 trabajadores.

En términos de modelo económico, la Ley Bases y sobre todo el RIGI implican una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional y avance del extractivismo. La creación de este régimen de incentivo tiene como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de treinta años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la citada Ley 24.196, que indica que la adhesión al régimen minero es una opción de las provincias, en el caso del RIGI, la Ley Bases lo incluye de manera compulsiva al exigir su aprobación.

En esa línea, la Ley Bases consolidará hasta el paroxismo el modelo primario exportador, no solo de la mano del extractivismo

depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En este contexto, se explica por qué las únicas áreas de la economía que crecieron durante 2024 son los sectores primarios –minería, hidrocarburos y agronegocio–, que generan pocos puestos de trabajo, mientras se contrae el consumo y cierran fábricas grandes y pequeñas.

Esta ley establece la prioridad de las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que utilicen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. No hay que olvidar que todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto hasta la minería del litio y el *fracking* en Vaca Muerta. Es decir que si en algún lugar de la Argentina escaseara el agua (como sucede desde hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Esto es muy preocupante en un contexto donde se agravan y repiten los colapsos climáticos localizados provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios incontrolables, tormentas, tornados) o por estrés hídrico (sequías). Con un Estado ausente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público, las consecuencias serán tan predecibles como catastróficas para el conjunto de la población.

En materia ambiental, el RIGI significa una delegación legislativa en relación con los hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Abre la puerta a la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental y habilita la disolución de fondos –hoy ya escasos– destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, apunta a la limitación de los espacios de participación pública. Ninguno de sus artículos específicos impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de estudios de impacto ambiental ni la realización de evaluaciones de impactos acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni explicita

ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor o transferencia de tecnología. El RIGI despliega una normativa que convierte a la Argentina en una suerte de no país, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como las relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente enfrentamos una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales para actuar en defensa propia.

En suma, con la llegada del gobierno libertario asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en la Argentina. No es que los anteriores gobiernos no hayan desarrollado políticas extractivistas. Ya vimos cómo la visión instrumental y neodesarrollista de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática y ecológica trazan una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos, de la mano del consenso extractivo exportador. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló un punto de inflexión que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal y el desmantelamiento de derechos como en sus modos hiperrepresivos y violentos de tratar el conflicto social.

Por otro lado, el Pacto de Mayo (acuerdo entre el presidente Milei y los gobiernos provinciales firmado en junio de 2024), enfocado en los recursos naturales, dio luz verde a los gobernadores para habilitar el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios provinciales sin importar los costos, tanto de la minería metalífera y de litio como en relación con otras actividades primario-exportadoras, como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Así, el RIGI –al cual adhirieron casi de inmediato todas las provincias– envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria para impulsar el extractivismo minero y petrolero, que hasta hace poco se les hacía esquivo o más difícil de imponer, debido a la fuerza de los movimientos socioambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), donde el actual gobernador Alberto Weretilnek encabeza un cambio de "modelo productivo": pasar de una economía basada en la agricultura y el turismo a una economía extractivista basada en los hidrocarburos y la minería. El partido provincial de Weretilnek, que gobierna ininterrumpidamente desde 2011, ha avanzado en el control de los otros poderes del Estado y de los medios de comunicación para generar un nuevo entramado legal a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el golfo San Matías); esto a su vez implica la modificación de otras leyes (de tierras, código minero), una estrategia de división de las comunidades indígenas (acotar geográficamente la consulta libre e informada mediante códigos sancionados sin consulta con las propias comunidades), todo con el objetivo de avanzar con la minería a cielo abierto y habilitar la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL. En la actualidad, Río Negro es la provincia argentina con más proyectos mineros en el país: cincuenta y tres en total, en diferentes etapas, que incluyen la explotación de oro y plata, uranio, carbón y litio. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, meros montajes que convalidan la decisión gubernamental.[37]

También en Mendoza, la provincia defensora del agua, el embate minero es aplastante. Ya modificaron el Código Minero y pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. En el departamento de Malargüe hay más de treinta proyectos mineros en diferentes etapas. Además habilitaron la minería en Uspallata (proyecto San Jorge), donde la población ya había rechazado esa posibilidad, amparada en la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes. Incluso, persiguieron y encarcelaron a varios activistas aplicándoles figuras penales graves, que luego no pudieron ser sostenidas, pero que efectivamente apuntan a generar miedo y desalentar la movilización.

En San Juan, provincia minera, hay treinta y un proyectos, algunos de ellos de enormes dimensiones, como la mina Josemaría, que supondrá el consumo de 1700 litros de agua por segundo –151 millones de litros por día– durante veinte años.

En la provincia de Chaco modificaron el mapa de protección del bosque nativo para habilitar la destrucción de casi 1 millón de hectáreas para el agronegocio y las tanineras.

En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los esteros y humedales. Si bien la renovación de la licitación por la privatización del río Paraná, visto solamente como una "hidrovía", una ruta de transporte de mercancías, ha encontrado obstáculos, es sin duda otro de los objetivos fundamentales del gobierno.

Como hemos señalado con Enrique Viale, la entrega y los retrocesos que supone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar los derechos, las conquistas sociales y los bienes naturales y sociales perdidos. Sucedió durante las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1999) con las privatizaciones y las nuevas normativas de liberalización para la explotación de bienes naturales. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados pero tambien más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió aún no pudo ser recuperado, por ejemplo la red ferroviaria que vertebraba el país. Los retrocesos legales, tanto en la legislación minera de saqueo como en la normativa energética, continúan intactos.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido de modo entusiasta muchos gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos, sino también con toda resistencia social y libertad de expresión. Con el corrimiento del umbral de lo posible se abre un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en la Argentina.

* * *

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca como estamos ahora de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción. Sin embargo, este cambio de régimen que busca instaurarse está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa de muchos pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. Llegados a este punto, de poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico previo ni tampoco las disfunciones o los problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –política, social, de derechos humanos, cultural, educativa, sanitaria– justifican la actual liquidación del legado democrático que el gobierno de Milei viene realizando con brutalidad desenfrenada.

Este es el punto que quisiera subrayar. Las democracias no solo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria y este avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y la complicidad de parte importante del arco político-partidario, que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha, las mismas que hasta hace poco se consideraban parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que Javier Milei está llevando a cabo a gran escala. La centroderecha y la derecha argentinas, hoy absorbidas a paso acelerado por la derecha radical, son corresponsables de este intento de cambio de régimen que busca imponerse en la Argentina.

La Argentina todavía no es un modelo de horror y autoritarismo, como sí lo es El Salvador de Bukele con sus cárceles, sino un experimento de achicamiento y destrucción del Estado. Dependerá de si ese proyecto tiene éxito o fracasa en los próximos años para que se convierta en un "modelo". Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue de cerca con atención,

porque está hecho a medida del deseo absoluto de los superricos y del pancapitalismo del fin; del odio a la democracia y sus regulaciones estatales. Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida, y hasta donde es posible despojar de derechos de manera acelerada a toda una población sin que esta ponga un límite eficaz o diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie aguante tanta demolición institucional y tanto desprecio social. Le toca a la sociedad argentina decidir en esta encrucijada mayor de nuestra historia. Está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento de aniquilación exitoso y que empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente cómo reconstruir derechos, Estado y sociedad en clave de solidaridad, de transiciones ecosociales justas y sostenibilidad de la vida.

---

[29] Ver <n9.cl/qla1t5>.

[30] En tanto ley de emergencia, la Ley 26.160 fue sancionada en 2006 y renovada cuatro veces. Suspendía los desalojos de comunidades indígenas y ordenaba también el relevamiento siempre incompleto de las comunidades en el país y de sus territorios. Estaba vigente hasta diciembre de 2025, pero Milei decidió derogarla el 10 de diciembre de 2024, cuando cumplió un año de gestión, precisamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

[31] A propósito de *La razón neoliberal* (Gago, 2014). Ver <n9.cl/n35jz>.

[32] Esto se confirmó con la centralidad que tomó la crítica al llamado "wokismo", identificado con el progresismo, en el reciente discurso de Milei en el Foro de Davos en enero de 2025, donde arremetió contra los homosexuales –afirmando que eran pedófilos–, acusó al feminismo de buscar "privilegios" y denostó a los ecologistas. También sobreactuó su lealtad a las derechas del Norte Global, hablando de los inmigrantes e incorporando insinuaciones islamofóbicas. El caso es que esta insistencia en la batalla cultural en un foro internacional, realizada sin duda con la pretensión de convertirse en un líder global dentro de las derechas autoritarias, le trajo numerosos problemas puertas adentro y generó una poderosa reacción de los movimientos LGTBQI+ y los feminismos, que convocaron a una marcha el 1 de febrero, que tuvo claramente un carácter masivo e intersectorial en todo el país e incluso en capitales de otros países.

[33] Esta pluridimensionalidad refiere a los diversos estratos donde se articulan estructura y superestructura: concepción del mundo, sentido común (hegemónico), Estado. Como afirma Varesi (2016: 12): "El concepto de hegemonía provee una herramienta analítica que permite el abordaje de problemáticas de índoles diversas ligadas a la lucha de clases y al conflicto político en general, siendo este el terreno de su conformación".

[34] "La democracia iliberal es una forma de gobierno a caballo entre la democracia liberal tradicional y un régimen autoritario: se respetan ciertos aspectos de la práctica democrática pero se ignoran otros, y se vulneran los derechos civiles. El concepto fue propuesto en los años noventa por el politólogo estadounidense Fareed Zakaria, quien señaló que había gobiernos elegidos democráticamente que ignoraban los límites constitucionales y no respetaban las libertades individuales de sus ciudadanos" (Saldaña, 2020).

[35] Incluso el presidente del Conicet (el máximo centro de investigación pública del país), Daniel Salamone, ha hecho guiños en las redes sociales que avalan posiciones negacionistas (Lavecchia, 2024).

[36] Ver el capítulo 4, donde se explica en qué consiste la Agenda 2030.

[37] Tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, realizada el 30 de agosto de 2024 por el proyecto minero Calcatreu, en la cual participé como expositora. Ver "Maristella Svampa: 'Después de 25 años de megaminería, no se ha generado trabajo y hay un impacto local bajísimo'", *elDiarioAR*, 10 de septiembre de 2024.

6. Narrativas relacionales y prácticas alternativas para un mundo en crisis

> Es un acto de amor por la vida, por eso, defendemos la tierra y el río, porque todo tiene relación de vida, todo está interconectado. Traemos una consigna ancestral maravillosa maya, el *lain ut laat, laat ut lain*, que quiere decir: "Tú soy yo y yo soy tú". Que ese hermoso enunciado maya Q'eqchi' se haga realidad en este tiempo, cuando le decimos a la planta: Tú soy yo y yo soy tú, en una relación de vida, nosotras también se la decimos al río, al fuego y así nuestro cuerpo entra en otra relación de vida con esos elementos.
> **Lorena Cabnal, cit. en *La Tinta*, 2020**

> Hemos impulsado y construido un modelo de desarrollo sustentable. Pudimos reponernos y responder a la comunidad. Nos convertimos en un oasis energético. La gente iba a Casa Pueblo a conectar sus máquinas de terapia respiratoria, de diálisis, peritoneal; distribuimos lámparas solares, educamos sobre energías renovables como una alternativa para descentralizar el modelo energético y utilizar fuentes limpias y renovables como el sol. Estamos en lo que le llamamos la insurrección energética.
> **Antonio Massol-Deya, director asociado de Casa Pueblo**

¿Qué entendemos por narrativas relacionales contrahegemónicas y por qué son importantes a la hora de hablar de otros lenguajes de

valoración, en pos de una justicia social y una sostenibilidad ambiental? ¿Con qué experiencias de carácter prefigurativo contamos a la hora de ilustrar procesos de transición justa y popular? ¿Qué aportan los feminismos ecoterritoriales a nuestra comprensión de la policrisis? ¿O las experiencias agroecológicas y los proyectos de energía comunitaria?

Partimos de la base de que la evolución de la vida, tal como estableció la bióloga Lynn Margulis, no es fruto de la competencia o la supervivencia del más apto, sino de la cooperación entre organismos en un mundo interdependiente. Lo que Margulis demostró con la teoría de la endosimbiosis es que los organismos más pequeños, los microorganismos, lejos de comportarse como seres egoístas en un mercado, desde las más tempranas edades de la vida en la Tierra, desarrollan diferentes formas de cooperación para poder sobrevivir. "Animales y plantas son en realidad comunidades de organismos menos complejos (células y bacterias) que cooperan para sobrevivir" (Rodríguez, 2023). He ahí el origen y la continuidad de la vida, de la red de la vida, que explica también su capacidad de regeneración.

Así, en este último capítulo me referiré a las narrativas relacionales desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, aquellas que surgen en un contexto de luchas socioecoterritoriales, que cuestionan los extractivismos existentes y alientan propuestas alternativas y espacios de reexistencia, de carácter local. Por otro lado, haré referencia a las redes de emergencia y solidaridad que surgen en contextos de desastre y buscan anclar en afectos como la empatía social y ambiental.

Narrativas, giro ontológico y régimen de afectividad

No todas las culturas generaron una concepción dualista de la naturaleza. Como bien señala la filósofa e historiadora Carolyn Merchant (2023 [1985]), durante siglos hubo tensiones pero

también coexistencia entre la metáfora de la madre nutricia y orgánica y aquella de la dominación, ambas procedentes de tradiciones filosóficas y religiosas diferentes. La concepción organicista de la naturaleza colocaba límites o restricciones morales y sociales a la acción humana: instituía códigos de respeto y consideración. Sin embargo, a partir de los siglos XVI y XVII, el desarrollo de la manufactura y el comercio, junto con las nuevas tecnologías, produjo el desplazamiento gradual del imaginario organicista de la naturaleza hacia otro de carácter mecanicista, a partir del cual se fue consolidando una ontología dualista que separaba lo social de lo natural.

Esta ontología dualista situó al ser humano en el centro (antropocentrismo), como un ser fuera de la naturaleza, como entidad autónoma. Nuestra episteme moderno-occidental se fue conformando así a través de la oposición entre orden cosmológico y orden antropológico, y proclamó a este último como un valor universal. Sin embargo, desde principios del siglo XXI el reconocimiento de las fronteras planetarias en el marco de la crisis ambiental nos llevó a relativizar el dualismo ontológico. La crisis socioecológica ha desembocado en profundas repercusiones filosóficas, éticas y políticas, pues no solo nos obliga a repensarnos como humanidad, sino también a reconfigurar el vínculo con otras formas de vida.

Durante siglos hemos sostenido un paradigma binario de tipo economicista y productivista, funcional a la expansión de la dinámica capitalista, que ha subestimado la visión organicista –llámese Gaia, Gea o Pachamama– que plantea una concepción más holística, que ve la vida como una red diversa e interdependiente. Entre las visiones relacionales, se destacan las de numerosos pueblos indígenas, estudiadas por los antropólogos, pero la valorización de estos enfoques poco a poco se desplazó más allá de la antropología y dio lugar al llamado "giro ontológico", que aglutina una serie de perspectivas teóricas en torno a la relación entre las sociedades y la naturaleza, tanto en el Sur como en el Norte Global, que cuestiona las visiones dualistas dominantes y la perspectiva moderna.[38] Esta perspectiva subraya que la idea de que existe un único mundo y

diferentes representaciones (o cosmovisiones) es errónea. En otras palabras, el giro ontológico se basa en la idea de que existen múltiples mundos y la alteridad está en función de la existencia de esta multiplicidad.

Estas otras ontologías, entendidas como otros modos de construir la relación con las formas múltiples y diversas que presenta la vida, tienen como condición de posibilidad el territorio y su lógica comunitaria y generan espacios de sinergia entre el mundo humano y los otros mundos. Estos espacios se materializan en prácticas, se manifiestan como montañas o lagos, tienen vida o son espacios animados, aunque es difícil demostrarlo desde el punto de vista positivista europeo (Escobar, 2014).

Esta mirada nos impulsa a valorizar las matrices de tipo relacional o generativo, basadas en una concepción más dinámica y holística, como ocurre en algunas culturas orientales o en las visiones de los pueblos indígenas americanos, que conciben al ser humano en la naturaleza, inmerso en ella, no separado u opuesto. La relacionalidad, como explican Escobar, Osterweil y Sharma (2024) en un texto más reciente, significa relación, contingencia y apertura; pues siempre existe la posibilidad de cambiar, siempre hay otras vías que explorar, el futuro no está clausurado. Asimismo, para comprender la situación actual desde el plano de las subjetividades sociales en relación con el sistema de poder, Giraldo y Toro (2020) proponen reflexionar sobre el régimen afectivo, al que definen como aquel que

> ordena qué datos perceptivos de los ambientes son significativos y qué otros no, de modo que las personas puedan seleccionar aquellos elementos que sirven a los deseos, aspiraciones y obsesiones propios de las culturas a las cuales pertenecemos. Así, un régimen de la afectividad sensibiliza a ciertos aspectos, determinando que es significativo de lo que no lo es (2020: 124).

Este régimen establece qué puede ser amado y ante cuáles elementos/entes/situaciones se debe permanecer indiferente, y de esta manera modula la economía afectiva de los individuos. Por ende, la afectividad dominante no solo no es caótica ni casual, sino que responde a una lógica y un orden, determinados por un sistema de poder "que controla los horizontes sintientes de la población al crear los esquemas de referencia sobre los cuales un colectivo puede sentir". Por lo tanto, analizar el tipo de economía afectiva que promueve un determinado sistema de poder no es algo banal o secundario; todo lo contrario, ya que el régimen de afectividad contemporáneo organiza la percepción corpórea haciendo

> que exista un sesgo perceptivo hacia los bienes tecnológicos, las mercancías y la publicidad, al tiempo que hace imperceptibles los elementos sensibles de la tierra que se depredan, con el fin de hacer posible el exceso de las ciudades hipertecnologizadas (2020: 124).

En contraposición, la relacionalidad contrahegemónica –que se advierte en determinadas experiencias colectivas pergeñadas al calor de las luchas comunitarias, socioterritoriales, rurales y urbanas– tiende a ilustrar una nueva economía afectiva a través de otras prácticas y sensibilidades hacia los otros y en la relación con el territorio. En esa línea, categorías horizonte como el Buen Vivir, los derechos de la naturaleza, la justicia ambiental, la soberanía alimentaria, los bienes comunes, la ética de los cuidados y la transición ecosocial justa, asociadas al giro ecoterritorial de las luchas (Svampa, 2017), apuntan a la relacionalidad como apertura. Estas narrativas y prácticas relacionales muestran la posibilidad de (otro) régimen afectivo en ciernes que, en el marco de la policrisis, apunta a contrarrestar la acción destructiva del capitalismo dominante y su economía afectiva, y donde valores y emociones como la solidaridad y la empatía social y ambiental son centrales. Una relacionalidad que abre a "lo humano, más que humanos y no humanos", como subraya el bello título del libro de Ruiz-Serna y Del

Cairo (2022), que lejos de llevarnos a un monismo ontológico (la fusión de mundos y realidades en un solo mundo) pueda conducirnos a una revalorización de las formas múltiples y diversas que adopta la vida; un reconocimiento de la multiplicidad que nos impulse a imaginar y fraguar otra ética de vida.

En esa línea se inserta también nuestra propuesta del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que junto a otros colegas y activistas de América Latina venimos construyendo con una perspectiva regional latinoamericana de diálogo geopolítico hacia afuera y diálogo intercultural e intergeneracional hacia adentro. El Pacto Ecosocial se formó en los primeros meses de 2020, tras el inicio de la pandemia de covid-19, con el objetivo de pensar alternativas de transición ecosocial desde el Sur Global y cuestionar el avance de una transición energética corporativa (ver el capítulo 2 de este libro). Desde sus orígenes, la propuesta se conecta con experiencias de lucha y propone ampliar experiencias locales y prácticas prefigurativas de control comunitario, autonomías territoriales, soberanía alimentaria, agroecología, energías comunitarias y ecofeminismos. En suma, se trata de una plataforma colectiva para la construcción de otros imaginarios políticos y horizontes societales, donde cobra centralidad el debate acerca de qué tipo de transformación ecosocial necesitamos para transitar hacia un mundo justo y resiliente. No es casual que prestemos cada vez más atención a otros enfoques o narrativas relacionales, que promueven otra economía afectiva, basada en la interdependencia, el cuidado, la complementaridad y la empatía.

Protagonismo femenino y éticas del cuidado

En la última década, la movilización social se vio enriquecida y potenciada por la acción masiva de diferentes feminismos, que a través de la lucha contra los femicidios, la defensa de la autonomía de los cuerpos y del agua, del cuerpo como territorio, de la

soberanía alimentaria y la agroecología han generado propuestas de una nueva institucionalidad (derechos y leyes de protección para las mujeres) al tiempo que reelaboran diferentes respuestas a la crisis a nivel local (espacios de autoorganización y de interrelacionalidad). En este apartado, haré referencia a los feminismos ecoterritoriales de la región latinoamericana (Svampa, 2021), una perspectiva ecológica y feminista situada que busca dejar atrás el paradigma binario reformulando el vínculo sociedad-naturaleza, cuerpos/territorios en términos de interdependencia y de empatía social y ambiental.

En América Latina, tierra de mestizajes conceptuales y de *praxis* comunitarias, feminismo y ecología se entrelazan y potencian en la medida en que encuentran una expresión colectiva y un anclaje territorial. La expansión de los diferentes extractivismos (minero, petrolero, agronegocio, forestal) y el agravamiento de la crisis climática son el escenario recurrente de un creciente protagonismo femenino, de carácter anticolonial, interclasista e intergeneracional, que resalta la defensa de los cuerpos y los territorios y el necesario trabajo de cuidados al servicio de la sostenibilidad de la naturaleza y el mantenimiento de sus ciclos, de lo cual depende toda forma de vida.

Así, las mujeres a cargo de las tareas de cuidado y de reproducción social son las primeras en detectar los impactos sociosanitarios de ciertas actividades económicas y en establecer vínculos con los modelos de desarrollo, cuyos riesgos son minimizados o no aparecen registrados en ninguna estadística oficial. Este fue el punto de partida de los feminismos ecoterritoriales latinoamericanos: la defensa de las condiciones de vida frente a la amenaza de la contaminación y la denuncia de los impactos sobre la salud, el aire y el ambiente. Mujeres indígenas, campesinas, afros, mujeres pobres o vulnerables del ámbito rural y urbano, mujeres de clase media y de toda edad salen del silencio, se movilizan en la esfera pública, generan relaciones de solidaridad y nuevas formas de autogestión colectiva. En este proceso de empoderamiento femenino va asomando la reivindicación de una voz libre y honesta, "una voz propia" como diría Carol Gilligan (2013), que cuestiona al patriarcado

y busca reposicionar los cuidados y la democratización de las relaciones de género como elementos centrales de nuestra condición humana.

Como ya analicé en otros trabajos, es notoria la similitud de los lenguajes de valoración, desde América Central y México, pasando por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, hasta la Argentina (Svampa, 2021). En el cruce de las luchas, mujeres de diverso origen social y étnico que permanecían recluidas en el ámbito doméstico, con escasos contactos interclases –de carácter no jerárquico–, van forjando a través de la movilización colectiva cambios importantes en la subjetividad, enlazados con nuevos conceptos: justicia ambiental, agua para la vida, cuerpo y territorio, cuidados y autocuidados, sanación y naturaleza, acceso a la tierra y soberanía alimentaria, entre otros. Surgen también espacios de coordinación regional, redes de Defensoras del Ambiente, con el apoyo de ONG y académicas en los diferentes países.

En suma, el resultado es la ampliación del campo feminista y ecologista de las luchas, más aún, la elaboración de una nueva etica relacional feminista a partir de la inclusión de nuevos temas y miradas sobre el territorio, y el desarrollo de una visión más horizontal de los feminismos realmente existentes, por encima de las diferencias de clase y etnia o de las distancias entre lo urbano y lo rural. Se trata, en fin, de una economía afectiva ecofeminista que a veces ni se nombra como ecofeminista de manera explícita, pero que dialoga con diferentes tradiciones (ecofeminismos clásicos, economía feminista, feminismos urbanos) en la apuesta por construir otros horizontes de vida, más justos, democráticos y resilientes, frente al colapso ambiental y civilizatorio.

En lo que sigue, quisiera ilustrar lo dicho con algunas experiencias relativas a la defensa del agua, del cuerpo como territorio, a la relación entre feminismo y agroecología y, por último, al rol de las defensoras del ambiente en el combate contra los incendios.

En primer lugar, los feminismos ecoterritoriales en defensa del agua se han multiplicado. No hay que olvidar que las formas de acaparamiento y apropiación del agua en el marco de la expansión extractivista se han exacerbado, pues todos los extractivismos

requieren de una gran cantidad de agua dulce. Agua y minería, agua y *fracking*, agua y megarrepresas están intrínsecamente ligados. A nivel regional se destaca la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, que se formó en 2005 e incluye organizaciones en once países, varias de ellas con una larga historia de luchas contra el extractivismo, como Censat-Agua Viva (Colombia), Acción Ecológica (Ecuador), Colectivo CASA (Bolivia), Movimiento Ecofeminista (El Salvador) y Grufides –Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible– (Perú), entre otros. El objetivo es la documentación de los impactos de la minería y la crisis climática desde las dimensiones femeninas, los cuidados y la reproducción de la vida. Desde 2021, de la mano del Colectivo CASA de Bolivia, la Red desarrolla "la Escuelita por la Justicia Climática Feminista", un proceso formativo que reivindica el diálogo de saberes para generar vínculos entre defensoras de América Latina, potenciar acciones de monitoreo ambiental con enfoque feminista y activar medidas de incidencia en el acompañamiento de los casos.

> Las mujeres que conformamos la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, venimos documentando el daño minero desde hace veinte años, poniendo en el centro la reproducción de la vida y resaltando las múltiples violencias extractivas/patriarcales que trae la minería. Por esa acumulación de saberes que acompañó la resistencia de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha, que lloró las muertes del rebalse de las presas en Brumadinho, que celebró los treinta años de la victoria antiminera en Challapata, Bolivia, que celebró la prohibición de la minería metálica en El Salvador; sabemos que el término "minería verde" es una mentira en sí mismo. Estamos radicalmente convencidas de que no hay una forma "amigable" de explotar los minerales, y sabemos también que amplificar la explotación de los proyectos mineros no va a traer ninguna alternativa de vida para los pueblos y sí

> mayor acumulación de ganancias para los inversores y un rastro de muerte para los territorios del Sur Global. Lo sabemos porque en nuestra cotidianidad aprendimos que el agua que se contamina nunca vuelve, que la tierra enferma produce cuerpos enfermos, que no hay cantidad de oro (o litio) que pueda devolver la vida antes de los metales pesados en la sangre de nuestros hijos o en la leche de nuestros pechos (Aliaga y Orti, 2024: 13-14).

La Escuelita retoma la práctica de restauración de territorios y protección para los "espacios dadores de vida" de otras experiencias comunitarias a través de la siembra de huertos familiares y comunitarios, la reforestación y el cuidado de las plantas nativas del bosque, y también de acciones para la protección de las fuentes de agua, un proceso de monitoreo y formación en monitoreo comunitario ambiental de aguas para las mujeres (Rodríguez Navarro, 2024).

A estas voces, en los últimos años se ha sumado la narrativa indígena-comunitaria sobre el "territorio-cuerpo" y el "cuerpo como territorio", que proviene de América Central. La pregnancia del lenguaje ha sido tal que se extendió desde Guatemala hacia México, bajando por Colombia, Ecuador y Bolivia hasta la Argentina. La activista indígena y pensadora guatemalteca Lorena Cabnal –una de las referentes más importantes en la región, de la Red Ancestral de Sanadoras del Feminismo Comunitario, Tzk'at (en lengua maya quiché), creada el 12 de octubre de 2015– fue quien introdujo esta mirada disruptiva. Para Cabnal, la noción del cuerpo-territorio permite conectar los distintos tipos de violencia: patriarcal, colonial y extractivista. En sus propias palabras:

> La Red plantea que un feminismo que no asuma la autodeterminación de la tierra y de los cuerpos no tiene sostenibilidad política como corriente teórica. No podemos hablar de cuerpos emancipados libres autodeterminados si estos cuerpos están comiendo maíz transgénico o están

> viviendo en un territorio de monocultivo extendido. La propuesta de la sanación como camino cósmico-político es recuperar los saberes de las mujeres que nos han antecedido en la resistencia en estos territorios. O los de mujeres originarias contemporáneas que, desde sus conocimientos con las fases lunares, tiempos calendáricos solares, hierbas, semillas, ceremonias, palabra, silencios, cantos, humos, inciensos, descansos, meditación, juntanza, danza, flores, infusiones, baños, aceites y medicina ancestral, los hemos juntado y elaborado un tejido de sanación, para chingar con placer al sistema patriarcal y para sanar los cuerpos y la tierra (cit. en Dro, 2022).

Se trata no solo de una *praxis*, sino de una epistemología política que afirma que otros feminismos no occidentales son posibles, así como otras modernidades son posibles. La sanación "como acto personal y político" (Cabnal, 2016) es el nombre que adopta la resiliencia para el feminismo ecoterritorial comunitario y descolonizador. Se busca la recuperación espiritual de las mujeres, a partir de una reconexión con los cuerpos y con la naturaleza que retoma el saber y la memoria ancestral y cuestiona al patriarcado en sus diversas modalidades, como asimismo al capitalismo neoliberal y extractivista.

Por otro lado, las disputas por la tierra y el territorio potenciaron el rol de las mujeres en el ámbito rural. Históricamente, las mujeres han cumplido un rol crucial en la producción de alimentos y la transmisión de saberes ancestrales, papel estratégico basado en la división sexual del trabajo. En esa línea, las mujeres han adquirido un protagonismo creciente en las resistencias contra los desmontes: son ellas las que ponen el cuerpo frente a las topadoras y denuncian la contaminación con agrotóxicos. También son ellas las que refuerzan la apuesta a favor de una economía campesina-indígena, social y solidaria, mientras impulsan el modelo agroecológico como paradigma contrapuesto al de los agronegocios. Son las mujeres las que, retomando el cuidado de las semillas y los saberes ancestrales,

crean espacios de reexistencia donde la agroecología cumple un rol cada vez mayor. Mujeres de todas las edades y clases sociales que buscan realizar tareas de saneamiento contra las consecuencias del agronegocio, la deforestación y el cambio climático.

La agroecología es una práctica productiva ligada a las reivindicaciones de los pequeños productores, los campesinos y los pueblos indígenas, en franca oposición a la agricultura hegemónica, casi siempre al servicio de los grandes propietarios y las corporaciones. Dentro de los movimientos campesinos y territoriales rurales cobra centralidad la apuesta por la soberanía alimentaria, que propone priorizar la producción para alimentar a la población, defiende el derecho de los pueblos a decir qué producir y consumir, y el derecho a protegerse de las importaciones y del *dumping* (Svampa y Viale, 2020). En un contexto en el que los gobiernos priorizan abiertamente el modelo de agronegocio, ligado a la concentración de la tierra, el gran problema para este tipo de experiencias continúa siendo el acceso a la tierra; esto es, la reforma agraria, un tema central casi ausente en la agenda política hegemónica de la región.

Un caso muy interesante es la lucha en la Reserva Nacional de Tariquía, en Bolivia. En 2015, el gobierno de Evo Morales buscó habilitar el ingreso de la actividad hidrocarburífera a través de una rezonificación ilegal, pero las comunidades se movilizaron para impedir el ingreso de la empresa Petrobras. Fueron las mujeres las que encabezaron esta rebelión, oponiéndose al despojo de sus condiciones de vida a través de la defensa del agua, de la producción agroecológica, la pesca y la apicultura. Hoy gestionan el agua en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, donde desde 2021 se implementa el proyecto "Fomentando la conservación del medio ambiente y la agroecología en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de los departamentos de Tarija y Chuquisaca", financiado por la ONG Pan para el Mundo, que promueve los sistemas de producción agroecológica diversificados y resilientes a los efectos del cambio climático (Subelza, 2024).

Asimismo, desde hace quince años se desarrolla en Santa Fe, Argentina, la experiencia La Verdecita, una asociación civil de

pequeños productores y productoras liderada por mujeres, que en 2009 obtuvo su personería jurídica, acceso a servicios de crédito, asistencia técnica y un local propio. En palabras de la ecofeminista Silvia Pappuccio de Vidal, quien ha acompañado esta experiencia:

> Actualmente cuenta con más de 60 familias asociadas y abarca seis comunas encaminadas hacia la transición agroecológica. […] La Verdecita ha logrado mejorar la condición y posición de las mujeres y las familias rurales empobrecidas del cinturón verde de la ciudad de Santa Fe, así como fundar los cimientos de una comunidad local autosostenible que articula lo urbano y lo rural desde la producción y el consumo agroecológicos, y la justicia ambiental y de género. Con su accionar ecofeminista centrado en el cuidado de las bases materiales que sostienen la vida, ha consolidado un patrón de desarrollo local endógeno anclado en un territorio que es zona de sacrificio del agronegocio (Papuccio de Vidal, 2020).

Nuevos oficios para la supervivencia

Hay un inspirador relato de Donna Haraway –"Las historias de Camille" (2017)– en el que en apenas treinta páginas de ficción futurista la autora acompaña a Camille a lo largo de cinco generaciones de humanos en simbiosis con mariposas monarca. No diré en qué año, pero en un futuro cercano, posible, la decisión de sumar una persona más en el mundo, de tener un hijo o una hija, se adoptaría de manera colectiva, en comunidades más o menos autosuficientes que habrían sobrevivido al colapso ambiental y demográfico, pero que continuarían bajo amenaza de extinción como especie. Prosigue Haraway (2017):

> El poder más preciado de este tipo de libertad es el derecho –y la obligación– que tiene cualquier persona, en estado de embarazo, de elegir un animal simbionte para el nuevo bebé. Todos los miembros humanos del grupo nacidos en este contexto de toma de decisiones colectiva vienen al mundo como simbiontes enlazados con criaturas animales en inminente estado de extinción, y, por ello mismo, con el patrón de relacionamiento de vida y muerte de los muchos otros con los que estos se relacionan.

Camille elige enlazarse con la mariposa monarca, una especie en peligro de extinción, y junto a sus descendientes acompaña sus procesos migratorios en una práctica simbionte colaborativa y de cuidado.

Simbionte remite a simbiosis, concepto que tiene una larga historia y que debemos a la bióloga Lynn Margulis, ya citada, cuya teoría de la evolución no se basa en la competencia o la supervivencia del más apto sino en la cooperación entre organismos en un mundo interdependiente. El aporte de Margulis fue minimizado en los ámbitos científicos durante años, pero luego se demostró que su teoría de la endosimbiosis, centrada en que los microorganismos desarrollan desde épocas tempranas diferentes formas de cooperación para poder sobrevivir, es verdadera. La vida es, entonces, una unión simbiótica y cooperativa que permite a los organismos asociarse y evolucionar. Esto inspiró incluso a James Lovelock, el científico británico que popularizó la hipótesis de Gaia, para postular la idea de la Tierra como un planeta viviente que incluye seres vivos, océanos, rocas y atmósfera. Sin hablar de "conciencia", Lovelock afirma que debemos pensar a Gaia como un supraorganismo, un ser vivo que va modificando su composición interna para asegurar su supervivencia.

Volviendo al argumento de Margulis, este fue retomado por Haraway en estos tiempos de colapso ambiental (llámese Antropoceno, Capitaloceno, Piroceno, Urbanoceno o, como lo denomina la propia autora, Chthuluceno) para destacar la

importancia y la urgencia de desarrollar estrategias de cooperación entre humanos y no humanos, en un escenario donde lo prioritario es elaborar y practicar, como dice Anna Tsing (2023), el "arte de vivir en un planeta dañado"; esto es, la tarea de desarrollar técnicas, capacidades y herramientas nuevas para sanar y construir mundos habitables en un planeta cada vez más roto. En este sentido, no nos referimos solamente a experiencias ligadas solo a colectivos de resistencia y movimientos sociales. En estos días, cuando nos vemos obligados a enfrentar como algo cotidiano los colapsos climáticos localizados, el escenario de desastre abre también a la creación de nuevas solidaridades, oficios y habilidades vinculados al arte y la reproducción de la vida, que van generando una nueva economía afectiva.

Un ejemplo elocuente son los brigadistas forestales comunitarios, expresión (dramática) de la emergencia de oficios y nuevas habilidades ciudadanas puestas en juego para pergeñar estrategias de adaptación al cambio climático. Las brigadas comunitarias son una red compleja, conformada por cuadrillas de combatientes, que también cuentan con áreas de logística, planificación, enlace y comunicación. Realizan diversas acciones: desde combatir incendios en temporada seca hasta tareas pedagógicas durante el prefuego –ir a las comunidades y conversar sobre las problemáticas de los incendios– y, en el posfuego, acompañan a las comunidades afectadas con espacios y rondas de diálogo para crear espacios de sanación.

Ahí se han acuerpado también las mujeres, en un terreno tradicionalmente ocupado por los hombres, como es el caso de Las Fuegas, grupo que trabaja en brigadas comunitarias de las Sierras Chicas, en Córdoba, en el combate de los incendios forestales. Las Fuegas nacieron como un espacio de cuidado colectivo desde el cual plantear lo que no se podía decir en las brigadas de las que provenían. Se trata de mujeres brigadistas de diferentes edades, oficios y profesiones, desde docentes, artistas, fotógrafas, jóvenes que participan en redes agroecológicas, en redes de regeneración de agricultura y ganadería… Mujeres que entran y salen del fuego,

creando al mismo tiempo comunidad, y colocando el cuidado y la sanación en el centro de la experiencia común.

¿Cómo fue constituir un colectivo de mujeres brigadistas? En el testimonio de algunas de ellas:

> La posibilidad de reconocernos parte de un territorio común más amplio y conectado, la posibilidad de transcender el espacio inicial y converger en respuestas comunes, interinstitucionales, bomberos, despensa, dispensario, escuela, docentes y alumnes, educación ambiental, radiocomunitarios, ferias, clubes, algunos municipios, algunas fundaciones, algunas bibliotecas, organizaciones comunitarias, fuegas, otras brigadas, otros seres, nuevas amistades, monte, otras luchas, dimensionarse como colectivo, abrazarse y encontrarse allí, sensación de hogar, ternura y contención, la brigada hecha refugio (entrevista realizada por Aboaf y Svampa, febrero de 2024).[39]

> Encontré en las brigadas comunitarias otro espacio donde crear comunidad de una manera diferente. El primer tiempo fue un súper desafío, tuvimos que capacitarnos y equiparnos. Y ahora estamos en una etapa donde estamos aprendiendo a trabajar las vincularidades. Nosotras como feminidades irrumpimos en el espacio fuego, que siempre fue mayoritariamente masculino, y especialmente patriarcal y machirulo. Es una cuestión disruptiva. […] Feliz de estar participando de este proceso que para mí es más que revolucionario, revolucionario en la tarea, de cuidado de ambiente (entrevista realizada por Aboaf y Svampa, febrero de 2024).

Las Fuegas, en tanto ecofeministas y defensoras ambientales, van definiendo territorios prioritarios para el cuidado.[40] En los territorios incendiados, son también las que recolectan semillas, crean planes preventivos, escuchan historias, hacen viveros,

caminatas, reuniones, talleres, asambleas; apuestan a un nuevo régimen de afectividad que introduce claves de relacionamiento, por ejemplo un protocolo de intervención que apunta a despatriarcalizar el lenguaje y toma en cuenta el cuidado, el género y las diversidades. Así, la presencia disruptiva de este colectivo de mujeres diversas y transgeneracional, que cultivan el ecofeminismo desde el arraigo al territorio y la lucha contra los incendios forestales, es sumamente inspiradora en el campo socioambiental de la Argentina.

La alternativa comunitaria para la transición energética

En América Latina los debates sobre la transición justa giran en torno a la necesidad de que los Estados nacionales planifiquen una política energética en la cual el sector público tenga un papel organizador y garantice una participación democrática en la toma de decisiones estratégicas, que incluya a los trabajadores, los sindicatos y las comunidades afectadas. Además, estos debates plantean el acceso universal a la energía, teniendo en cuenta los altos niveles de pobreza energética.

Algunos sectores de los movimientos sindicales latinoamericanos han adoptado la noción de transición justa –la CUT de Brasil, la CUT de Chile, la CTA de la Argentina, el PIT-CNT de Uruguay– convirtiéndose en una corriente crítica dentro de las estructuras institucionales del sindicalismo regional (tradicionalmente dominado por los Estados Unidos). Desde este lugar promueven la construcción de alianzas y convergencias programáticas con movimientos sociales altermundistas. Pero lo cierto es que en América Latina existe poca relación entre las grandes centrales sindicales y los sindicatos de base que bregan por una transición energética justa. Se perciben todavía tensiones y resistencias, un discurso defensivo ligado a los potenciales impactos que tendría la transición energética sobre el empleo.[41]

Una experiencia innovadora es el acuerdo entre la organización ambientalista Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Atalc) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) para construir una agenda compartida de lucha por una transición justa, feminista y popular y por la democratización de la energía, articuladas por los principios de la defensa de los derechos laborales fundamentales, del trabajo decente y de la justicia ambiental, social, económica y de género. Como parte de este proceso, se viene desarrollando el proyecto Democratización de la Energía y Transición Justa en América Latina y el Caribe, donde se debaten propuestas de políticas públicas, impactos sobre el empleo y generación de otros nuevos, en pos de una transformación que conecte dimensiones subjetivas y objetivas.

En realidad, las experiencias más relevantes de transición energética justa que apuntan a otra economía afectiva vienen desde abajo, tienen una raíz local y comunitaria. Aunque importantes desde el punto de vista cuantitativo, tienden a ser subestimadas en su potencialidad, sobre todo por su carácter local. Como dicen T. Roa Avendaño, actual viceministra de Ambiente de Colombia, y E. Carrillo Rodríguez:

> Las "energías comunitarias" constituyen propuestas esenciales y radicales para un enfoque más inclusivo, justo y sostenible que desafíe el modelo extractivista. Estas experiencias representan un cambio fundamental en nuestra relación con la energía, ya que abordan no solo la electricidad, sino también aspectos de la vida cotidiana, nuestra propia energía física, así como el sol, el viento y el agua. Una comprensión más amplia de la energía la ve de manera holística y como un derecho y un bien común (Roa Avendaño y Carrillo Rodríguez, 2024).

La energía comunitaria

> engloba todo tipo de proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energético, entre otros; proyectos basados siempre en la descentralización de la energía y con las personas como protagonistas de este cambio energético (Amigos de la Tierra, 2019).[42]

Surge del impulso de energía renovable (solar, eólica, minihidráulica, biomasa) como una alternativa a los megaproyectos, y desde una escala local con la participación de las comunidades y miras a la autonomía tecnológica. Surge de los proyectos que aspiran a la construcción de soberanía energética y soberanía hídrica.

En esta línea, pocos ejemplos encarnan como Casa Pueblo, en Adjuntas, la aspiración a la independencia energética a través del afianzamiento del poder local. Vale la pena reponer los hechos. El 6 de septiembre de 2017 un colapso sanitario y energético asoló a la isla de Puerto Rico tras el paso del huracán Irma. Más de 1 millón de personas amanecieron sin luz. Dos semanas después, el huracán María, de categoría 4, el más fuerte que haya azotado la isla en ochenta años, dejó casi 3000 fallecidos, cincuenta veces más personas de lo que inicialmente se había publicado (*BBC Mundo*, 2018). La isla quedó en penumbras. El huracán arrancó de cuajo los techos, dejando lugares a oscuras durante meses. Hubo una sola excepción: Adjuntas, un pequeño pueblo situado en la cordillera central donde se encuentra la sede de Casa Pueblo, un proyecto de gestión comunitaria que desde 1999 opera con energía renovable, que se convirtió en un oasis energético en ese escenario de colapso. Durante el paso del huracán, el ingeniero Alexis Massol-Deyá, fundador de esta ONG, estuvo transmitiendo en vivo desde su radio comunitaria para informar a la población y coordinar las tareas de limpieza y ayuda a los afectados. Tras el paso de la tormenta, los vecinos comenzaron a acercarse a Casa Pueblo para recargar sus celulares o someterse a tratamientos médicos para los que necesitaban electricidad. En la emergencia y gracias a la solidaridad internacional, Casa Pueblo repartió catorce mil lámparas solares,

colaboró en la instalación de paneles solares en las casas y en lugares que por razones de salud lo necesitaban. Ahí surgió la idea de iluminar ese municipio de más de 18.000 habitantes con energía solar, tarea en la que los portorriqueños residentes en el exterior tuvieron un papel fundamental, enviando bombillas solares. Así, el huracán María abrió una oportunidad para dejar atrás un sistema energético caro, dependiente del continente (Estados Unidos) y controversial por sus tarifas elevadas y por haber quedado obsoleto. En palabras del fundador de este movimiento: "La democratización de la energía como estrategia de transformación social brinda una oportunidad única para romper el ciclo de dependencia". El llamado, entonces, es a la insurrección energética. Llega desde Adjuntas, desde Toro Negro, desde Humacao y otras comunidades de todo el país en un proceso ascendente.

> En nuestro caso, esperamos redefinir la AEE, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, como nuestra fuente de energía *alternativa*, porque nuestra fuente principal es el sol. También tenemos viento, agua y mucha biomasa disponible. No se trata de salvar ni de condenar a la AEE. No, tienen un papel fundamental en nuestra transformación si deciden aceptar el reto. Se trata de que el país redefina la AEE, en lugar de que ella nos defina a nosotros. Cuando en lugar de limitarse a distribuir energía a los hogares, la AEE se centre en un papel empresarial y social como mediador para garantizar que todos, en hogares y empresas, granjas y fábricas, puedan generar su propia energía en lugar de consumir energía generada en otros lugares, tendremos una autoridad energética con un mandato digno de llevarnos hacia el siglo XXI. Exigimos una autoridad energética capaz de impulsar una verdadera democracia energética, para que todas las personas y no solo unas pocas puedan beneficiarse de su generación" (Massol-Deyá, 2020).

Roa Avendaño y Carrillo Rodríguez, desde su trabajo de activistas e investigadoras, comenzaron a documentar los casos en una "Exposición Virtual de Experiencias Comunitarias para una Transición Energética Justa", que arrancó en 2020 y hacia 2023 reunía 119 experiencias comunitarias que incluyen 21.083 familias y 122.226 beneficiarios. La exposición reconoce una amplia gama de iniciativas sobre la autogestión de la energía comunitaria –que utilizan tecnologías como biodigestores, máquinas accionadas por bicicletas, ruedas Pelton y paneles solares– y destaca experiencias que vinculan la justicia energética e hídrica con la soberanía alimentaria (mercados campesinos, agroecología, viveros de plantas, huertos familiares y comunitarios). La exposición también muestra experiencias relacionadas con la reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos para la producción de energía y alimentos, así como la producción de artes y oficios. Además, hay propuestas sobre ecobarrios, autogestión de la atención sanitaria mediante la transformación de plantas medicinales en productos para el cuidado, recuperación y conservación de semillas y platos tradicionales y recogida de agua de lluvia, entre otras. Se trata de proyectos

> que muestran los esfuerzos de numerosos pueblos y comunidades para oponerse a la privatización de la energía, que la concentra en unas pocas empresas transnacionales y excluye a las personas de las decisiones fundamentales en este ámbito. Estos ejemplos no solo se dedican a la producción de energía eléctrica, sino que también buscan construir o consolidar la producción de alimentos o la gestión del agua, controladas por la comunidad, arraigadas en relaciones recíprocas con la naturaleza y las personas en lugar de extractivistas. Se trata, en esencia, de propuestas para una transición energética justa (Roa Avendaño y Carrillo Rodríguez, 2024).

Para explorar esa línea de transformaciones a nivel local, en diciembre de 2024, desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur,

junto con el Tejido Global de Alternativas (México), realizamos un Taller de Energías Comunitarias que involucró a cuatro organizaciones de América Latina con una vasta experiencia: la Red Cecosesola, de Venezuela; Tosepan, de México; UTA Redbiocol, de Colombia; e Intag, de Ecuador. Estas enfrentan numerosos desafíos a la hora de imaginar un modo de habitar los territorios desde un modelo energético alternativo. Por ejemplo, en el Valle de Intag, Ecuador, la organización agrupa doce iniciativas locales en medio de la concesión del 70% del valle a empresas mineras para extraer cobre y oro. A pesar del avance del extractivismo, desde Intag se promueven actividades como cafecultura y ecoturismo y se apuesta por las energías renovables, en especial a través de una pequeña hidroeléctrica de 300 kilovatios en el río Aguagrun.

> La transición energética en Ecuador ha sido corporativista y no ha considerado a las comunidades locales. En respuesta, formamos la "Asociación de Producción de Energías Renovables, Río Aguagrun", reconocida por su enfoque en la economía popular y solidaria, buscando empoderar a la comunidad para ser generadores de energía en lugar de solo consumidores. Nuestra visión conecta la producción de energía con la conservación del agua y la biodiversidad, promoviendo una gobernanza participativa y un enfoque de cuenca. Utilizamos tecnologías accesibles como Turbing, que permite generar electricidad con una bomba de agua simple, haciendo viable la producción local de energía. Creemos en la pequeña hidroelectricidad como una solución sostenible y replicable para comunidades en América Latina, empoderando a la gente para cuidar su entorno y reducir la dependencia de grandes proyectos energéticos (transcripción del Taller de Energías Comunitarias, diciembre de 2024).

La Red Cecosesola, ubicada en el centro-occidente de Venezuela, es una organización compuesta por más de cincuenta entidades. En su

evolución, enfrentó conflictos internos acerca de si debía incluir solo a los asociados o apuntar al bienestar comunitario, además de conflictos externos relacionados con la gestión de la empresa. Si bien su objetivo central se vincula con la soberanía alimentaria, en los últimos tiempos comenzó a abordar la problemática energética. Dentro de dicha red, hay diferentes cooperativas. Por ejemplo:

> La cooperativa 8 de Marzo busca aumentar la cantidad de paneles solares debido a la crisis energética de Venezuela que provoca cortes de luz diarios en el hospital. Esto obliga a usar una planta eléctrica a gasolina, lo que impacta negativamente al medio ambiente. Sus proyectos y actividades se basan en relaciones organizativas diarias. Además, promueven la educación sobre energía comunitaria, alcanzando a muchas personas, incluso en cinco estados del país (transcripción del Taller de Energías Comunitarias, diciembre de 2024).

En cuanto a la Fundación UTA de la Redbiocol (Red Colombiana de Energía de la Biomasa), viene trabajando desde hace treinta y cinco años en estos temas, antes incluso de que se hablara de transición energética. Sostiene una visión integral que postula que toda la energía y los alimentos deben provenir del sol y todos los residuos deben ser reciclados; en suma, que existe una conexión muy importante entre la producción de alimentos, el agua y la energía. Hace unos dos años adoptaron el concepto de "energías comunitarias" y hoy cuentan con una mesa nacional en energías comunitarias,

> desde la cual estamos haciendo incidencia política donde prima la energía para el autoconsumo, esa visión y claridad de energía, teniendo en cuenta el concepto de agroecología, haciendo énfasis a la parte de energía. Por eso planteamos la agrocoenergía, teniendo la claridad de los espirales que se van formando en la finca que aprovechan al máximo los

> productos llamados residuos, que son importantísimos para esa generación de energía. Es necesario conocer el ambiente local, pensar global y actuar local (transcripción del Taller de Energías Comunitarias, diciembre de 2024).

Por último, resulta muy inspiradora la reflexión de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titaniske, un movimiento cooperativo indígena de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en México, que cuenta con más de 40.000 socios de treinta y dos comunidades nahuas y tutunakus, estructuradas en nueve cooperativas encaminadas a lograr la "vida buena" de los socios y sus familias. Las "asambleas en defensa de la vida y del territorio" se formaron para oponerse al proyecto de instalación de una subsestación energética y el tendido de una línea de alta tensión entre dos municipios, que lejos de estar al servicio de las necesidades de los habitantes, como demostraron estudios independientes, estarían al servicio de megaproyectos (hidroeléctricos, mineros). En ese marco comenzaron a preguntarse qué tipo de energía querían, para qué y para quién. Así, derivaron en la construcción de "asambleas de planes de vida", un proyecto que nace con la idea de autonomía energética para generar un modelo distinto de gestión de la energía y que además

> se plasma en un documento que se llama "Códice Macewal", que nos dice cómo es ese plan de vida para el pueblo a cuarenta años y dentro vienen diez líneas estratégicas, la autonomía energética es una de esas líneas y se enmarca en lo que nosotros llamamos "dignemilis", que se aproxima a lo que en otros sures conocen como Buen Vivir, y a partir de esta premisa principal de cómo entendemos a la energía buscamos después de varias reflexiones con personas locales, los macehualchiuque, que nosotros los conocemos aquí en el territorio macehualcomú como personas sabias, personas que conocen el territorio, decidimos construir un modelo de gestión energética al que le llamamos en nuestra

> lengua náhuatl, *Yolchikawkayeknemilis*,[43] lo que quiere decir que es la energía que se gestiona desde el corazón, porque nosotros en ese diálogo platicamos con varias personas el pensamiento de que la energía no es nuestra, no la podemos controlar, la energía está viva y justamente esa energía viene del corazón (transcripción del Taller de Energías Comunitarias, diciembre de 2024).

Más allá de la diferencia de los marcos normativos, los proyectos de energías comunitarias encuentran grandes desafíos, sobre todo con relación al financiamiento y la continuidad. Uno de los pocos países que avanza en el apoyo de las energías comunitarias –sobre la base de que esos proyectos son anteriores y no una creación del actual gobierno– es Colombia bajo la gestión de Gustavo Petro. En 2024, el Ministerio de Minas y Energía firmó un acuerdo con Fenoge (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía), cuyo objetivo es implementar hasta 500 comunidades energéticas para llevar soluciones sostenibles a diferentes zonas del país a través de fuentes no convencionales de energía renovable. Esas comunidades recibirán sistemas solares fotovoltaicos, lo que permitirá reducir el costo de la energía para sus habitantes, promoviendo la autonomía energética, el uso de recursos renovables y la posterior constitución de su comunidad energética. El 40% de las comunidades seleccionadas se encuentran en zonas no interconectadas, es decir, en lugares que no cuentan con acceso al servicio de energía.[44]

Como sostiene un referente de la Fundación UTA-Redbiocol:

> En términos de incidencia, con este gobierno se generaron unos espacios que no se habían generado anteriormente, espacios de diálogo, y conformamos la mesa de energías comunitarias a nivel nacional, que está formada por nosotros como Fundación UTA, quienes hemos participado desde el inicio, comunidades, Censat-Agua Viva, Grupo Semillas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del

> Cauca, algunas varias organizaciones de esas también pertenecientes a la red Bioko, somos más de cien organizaciones en el país representadas en ese espacio, que es una herramienta de incidencia política. Entonces allí empezamos con esos diálogos; hicimos un acuerdo con el Ministerio de Finanzas y Energía, pero entendiendo que todo el tema de energías comunitarias es transversal, transversal a todos los ministerios. Entonces, hemos logrado visibilizar, más que todo sentar el precedente que el tema de las energías comunitarias viene desde hace cuarenta años y que no es un tema solamente que llega con este gobierno (transcripción del Taller de Energías Comunitarias, diciembre de 2024).

En suma, no es fácil lograr la sostenibilidad técnica, económica y organizativa de estos proyectos, ya que son las comunidades energéticas vinculadas a instituciones las que mayores posibilidades tienen de garantizar una sostenibilidad que coloca en el centro la relación agua-energía-alimentos. Una de las grandes dificultades es generar capacidad local, para no depender de especialistas o profesionales externos, a la que suma el desafío de incorporar a los más jóvenes para que no emigren a los grandes centros urbanos en busca de nuevas oportunidades, migración que en la mayoría de los casos los desvincula de la vida en los territorios.

* * *

Todo listado sería incompleto, pero sea que hablemos de los feminismos ecoterritoriales, las experiencias de brigadistas forestales, las redes de solidaridad o los proyectos de energía comunitaria que se despliegan a escala local en América Latina, todos expresan la necesidad de tejer nuevos vínculos de interdependencia y relacionalidad. Refieren no solo a los derechos humanos, sino más que humanos y más allá de lo humano: a los

derechos de la naturaleza. Parafraseando a Alberto Acosta y Enrique Viale, son experiencias que hablan de la necesidad de restablecer la paz con la Tierra, sin la cual no hay posibilidad de paz para nosotros en la Tierra, que hoy se rebela frente a la destrucción que estamos provocando (Acosta y Viale, 2024: 204),

Así, no todo es individualismo, egoísmo ni mercado; más aún, el origen y la continuidad de la vida poco tienen que ver con esas posiciones. La urgencia de generar una agenda colaborativa de protección de nuestros bienes comunes, de adaptación al cambio climático y de transición ecosocial (esto es, de transformación productiva, alimentaria, energética, urbana) hará surgir nuevos oficios, nuevas hermandades, otras capacidades sociales, otros regímenes de afectividad arraigados en lo local y en el territorio, y que al mismo tiempo ofrecen una guía para pensar e imaginar procesos de transformación multiescalar.

---

[38] El animismo, en términos del francés Philippe Descola (2005), o lo que el brasileño Eduardo Viveiros de Castro (2008) denominó el "perspectivismo amazónico" o "amerindio". Incluso la vision pionera del francés Bruno Latour acerca del pensamiento y los procesos híbridos (sujeto/objeto; naturaleza/cultura), analizados en el ya clásico *Nunca fuimos modernos* (2022), y la ontología política planteada por Blaser (2009) y Escobar (2014).

[39] En 2024 realizamos con Mirá Colectiva Socioambiental, que integramos junto con Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes, el primer podcast de *El territorio habla*, "Todas las Fuegas el fuego", disponible en YouTube y Spotify.

[40] Las Fuegas pasó a ser también una voz colectiva de denuncia ante situaciones de violencia machista, como fue el caso de Luana Ludueña, joven bombera del lugar que se suicidó tiempo después de haber sido violada por Diego Concha, director de Defensa Civil de Córdoba. Las Fuegas acompañaron a la familia en el juicio, que finalmente lo declaró culpable en septiembre de 2024, condenándolo a cadena perpetua por entender que había una conexión causal entre el abuso sexual y el suicidio de la joven.

[41] Por ejemplo, un estudio realizado en Brasil tuvo como objetivo identificar y analizar los obstáculos a la transición justa y la democratización de la energía que surgen en los marcos normativos existentes y en las nuevas propuestas de política y legislaciones que avanzan en ese país. Ver <n9.cl/z51rv>.

[42] Ejemplos de energía comunitaria son las comunidades de vecinos que practican el autoconsumo eléctrico colectivo (solar y eólico); las cooperativas de energía renovables; los proyectos colectivos de eficiencia y ahorro energéticos; los proyectos colaborativos como las plantas fotovoltaicas comunitarias, en los cuales la ciudadanía aporta una participación mínima de 100 euros; las comunidades de energía promovidas por administraciones y que puedan participar como partes interesadas; las compras colectivas de placas fotovoltaicas con un ahorro del 30% (Amigos de la Tierra, 2019).

[43] *Yolchikawkayeknemilis* es una publicación periódica del Tejido Global de Alternativas que trata sobre "Energía para y desde el Buen Vivir".

[44] Ver <n9.cl/j211l9>.

Conclusión

Reflexiones finales sobre la policrisis

> Eso que las ciencias políticas y económicas llaman capitalismo hizo metástasis, ocupó el planeta entero. Si quisiéramos, después de esta pandemia, reconfigurar el mundo con esa misma matriz, es claro que lo que estamos viviendo es una crisis, en el sentido de un error. Pero si logramos ver que estamos pasando por una transformación, tendremos que admitir que nuestro sueño colectivo de mundo y la inserción de la humanidad en la biósfera tendrá que darse de otra manera. Nosotros podemos habitar este planeta, pero deberá ser de otra manera.
> **Ailton Krenak, *Ideas para postergar el fin del mundo*, 2023**

"¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?". Me hicieron esta pregunta dos veces mientras estaba escribiendo las conclusiones de este libro, y debo decir que generó en mí una gran perturbación. No se trata de una pregunta meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Durante meses, entre 2024 y 2025, del lado argentino de la cordillera norpatagónica los incendios forestales arrasaron con bosques, animales y viviendas. Asimismo, poco tiempo antes los incendios habían devastado una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California. Y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió una vez más, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonía llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica…

Se hace difícil entonces cerrar un libro como este, que aborda solo algunas de las múltiples aristas de la policrisis civilizatoria. Tampoco es posible trazar una línea única de conclusiones, ni simplificar los recorridos que hemos hecho hasta aquí. Por eso, ante la imposibilidad de proponer un hilo narrativo único, opté por escribir cinco apartados que de algún modo resumen algunas de las obsesiones que me acompañaron durante la escritura.

1

Uno de los textos que me acompañó durante el último tramo de escritura fue *La afectividad ambiental*, de los investigadores Giraldo y Toro, que trata sobre las emociones y reflexiona sobre el régimen de afectividad. Este libro inspirador propone un avistaje del capitalismo actual y su economía afectiva desde otro lugar, que no es únicamente el del análisis más frecuente de las resistencias colectivas o sus experiencias de lucha. Aporta una mirada inteligente que enriquece sin caer en una reflexión abstracta difícil de conectar con la experiencia cotidiana. Permite pensar la policrisis contemporánea a través del complejo acoplamiento entre sistema de poder y régimen afectivo, que va erigiendo "un orden y lógica sensible que ofrece placer y deseo, y que direcciona la respuesta afectiva hacia sí mismo, al tiempo que desafecta y desamarra los vínculos con los demás y la Tierra" (Giraldo y Toro, 2020: 126)

Aun señalando la riqueza de este análisis, podría afirmarse que la caracterización que los autores realizan del régimen afectivo contemporáneo se halla asociada todavía a la economía afectiva de la narrativa globalizadora tecnocrática-capitalista, antes que a la (nueva) narrativa reaccionaria y pancapitalista del fin que hoy promueven los partidos iliberales y de ultraderecha. La emergencia de las extremas derechas como alternativas de poder global, de una "internacional reaccionaria" (Tokatlian, 2024), mucho más con el impulso que han tomado con la segunda presidencia de Trump, ha

corrido todavía más los límites de la insensibilidad social y ambiental. Líderes como Trump y Milei –como antes Bolsonaro– admiten con orgullo que el objetivo explícito de su gobierno no solo es desmontar un sistema de regulaciones y derechos, sino acelerar el sistema productivo-extractivo capitalista redoblando la apuesta ante la crisis ecológica planetaria. Respecto de esto último, frente al agravamiento de la crisis, la respuesta de la derecha radical no se restringe a criticar el intento (por demás fallido) de gobernanza climática, sino que reafirma la premisa *drill, baby, drill* ("perfora, nena, perfora"), retomada enfáticamente por Donald Trump en su discurso de asunción en enero de 2025.

Dicho de otro modo, el capitalismo neoliberal en su fase tardía aparece asociado a lo que en este libro denominamos las narrativas reaccionarias pancapitalistas del fin, lo cual conlleva un proyecto de poder que implica la reorganización de nuestros afectos y emociones en una nueva economía afectiva, en la cual la indiferencia, la crueldad y la insensibilidad social y ambiental aparecen exacerbadas, llevadas al paroxismo. Es ese tipo de narrativa la que está detrás de las palabras de Elon Musk cuando afirmó, en marzo de 2025, que la empatía es una "debilidad fundamental de la civilización occidental" y, por si eso fuera poco, agrega que la empatía se ha "convertido en un arma" mientras compara el concepto de "seguridad social" con el esquema Ponzi de estafa (cit. en Wolf, 2025).

Es lo que, desde otra perspectiva, también explica Da Empoli al analizar cómo, en la era del narcisismo de masas, las redes sociales, las *fake news* y las teorías conspirativas –en manos de ejércitos de trolls y de "ingenieros del caos"– apuntan a la exacerbación de los sentimientos y emociones más extremos y ofrecen una vía de escape para la rabia y el miedo que estimula la exclusión del otro antes que el deseo de la integración; algo que el autor ilustra como la combinación de "la ira con los algoritmos" (Da Empoli, 2020: 88).

A esto hay que agregar la importancia que adquiere la *polarización asimétrica* como dispositivo de construcción política, orientado no solo al reordenamiento de la política y sus modos de interacción e interlocución, sino también a la reconfiguración del régimen afectivo a través de la normalización de conductas extremas donde la rabia y

el miedo exacerban la insensibilidad y la crueldad hacia quienes sufren, hacia los más débiles, hacia la destrucción del planeta. Todo ello forma parte de un mismo ecosistema y configura un potencial escenario de banalización de la crueldad, lo cual ya fue muy estudiado por Hannah Arendt (1978) en relación con los crímenes de los totalitarismos del siglo XX.

Se trata de "una ideología que atrae al yo, como una cura para el agravio narcisista, otorgándole la libertad para llevar a cabo la pulsión de muerte" (Malm, 2024: 599).

Algo de esto había anticipado la antropóloga Rita Segato cuando analizaba otras estructuras de poder, más sumergidas y paralelas, ligadas al narcotráfico, las mafias, el trabajo esclavo, la trata y otras formas de economía ilegal, y hablaba de la "pedagogía de la crueldad", marcadas por la violencia, como aquello que "lleva a los sujetos a reducir lo que está vivo en objetos y en cosas para convertirlo en mercancías" (Segato, 2021). Hoy parecería que estamos ante el fenómeno de avance y colonización de esas estructuras paralelas que colonizan el mundo de lo legal y lo formal, al que creíamos apoyado sobre otros valores y afectos. Para Segato, esta violencia está asociada a las estructuras económicas capitalistas "de rapiña", que necesitan de la falta de empatía entre las personas para sostener su poder.

Hasta dónde llegarán la economía de rapiña y la política de la crueldad que hoy vemos manifiestas en las extremas derechas iliberales es algo que todavía no sabemos. Pero aun así, somos conscientes de lo complicado y difícil que es ofrecer un proyecto de vida alternativo que sea motivador a gran escala en un contexto nacional e internacional donde la población, esté sumergida o no en la matrix del "realismo capitalista" (Fischer, 2016) y del narcisismo de masas, es constantemente bombardeada con mensajes de insensibilidad y de crueldad hacia los otros y hacia la naturaleza.

Por último, resulta importante volver sobre el lugar que ocupan las lecturas conspirativas, hoy tan en boga. Este tipo de lecturas no solo tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida y mentirosa, sino que habilitan a quien las esgrime a "recuperar" el control cuando todo es incontrolable. Las extremas derechas son conscientes de

esto y lo ponen en práctica en todo momento, al utilizar hechos siniestros –ya se trate de un crimen aberrante o de un desastre ambiental– para apelar a teorías "conspiranoicas" que desresponsabilicen a los diferentes poderes (políticos y económicos) y fabriquen un culpable, que ineludiblemente saldrá de los sectores más débiles o vulnerables de la sociedad. Estas maniobras suelen aminorar las angustias de sectores sociales que buscan volver a la situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. Ya hemos asistido a episodios de posverdad, que pueden ser risibles pues rayan con el delirio de la mentira absoluta, pero cuyas consecuencias a mediano plazo son impredecibles. Por ejemplo, hace solo unos meses, la líder y candidata a canciller del partido Alianza por los Alemanes (AfD), Alice Weidel, afirmó en X-Talk con Elon Musk que Adolf Hitler no era "de derecha" sino comunista,[45] algo que, en su intento mimético por reflejarse en las extremas derechas europeas, Javier Milei repitió sin sonrojarse en una entrevista para un medio argentino. Nada de esto es inocente. Y además puede dejar una estela que, lejos de disiparse, configure entramados perversos u ominosos. Como afirmó el historiador Timothy Snyder (2017: 81), especialista en el Holocausto, "la posverdad es el prefascismo".

En consecuencia, una primera conclusión es que afrontar la policrisis desde una perspectiva radical emancipatoria requiere otro régimen de afectividad; uno que promueva la solidaridad, la libertad y la empatía social y ambiental, un vínculo con la tierra y el territorio de respeto por la diversidad y la interdependencia como condición de la vida misma. Por ende, necesitamos multiplicar las experiencias sociales y colectivas que nos reconectan con la pluralidad de la vida, que pueden pergeñar otra economía afectiva, sin la cual no habrá posibilidad de expandir el horizonte de acción. Esto exige liberar o activar colectivamente la pulsión de vida frente al proyecto destructivo que, tanto hacia arriba (instituciones, Estado) como hacia abajo (subjetividades y territorios), impulsan políticos como Javier Milei, el club de los superricos y el conjunto de las extremas derechas a nivel global.

2

En agosto de 2023, cuando la extrema derecha ganó las elecciones primarias en la Argentina, muchos sentimos que nos habíamos sumergido de golpe en un mundo de contornos casi irreconocibles, ya que todo lo que hasta veinticuatro horas antes era considerado un valor positivo y un derecho a sostener aparecía ahora cuestionado y repudiado públicamente por la fuerza política vencedora.

La extrema derecha que encarna Javier Milei no nació de un repollo: varios trabajos de investigación han venido haciendo un análisis profundo de las transformaciones políticas y sociales desde abajo (Stefanoni, Semán, Vázquez, Saferstein, entre otros), algo que tratamos también en este libro. Sin embargo, lo que cambió aquel 14 de agosto de 2023 no fue solo que el enorme descontento social encontró una vía de canalización política en un excéntrico economista e insultador serial, partidario feroz del libre mercado y la eliminación del Estado. El voto evidenciaba cambios sociales más profundos. En medio del desconcierto político, la extrema derecha no tardaría en instalarse a sus anchas en la escena pública y mediática, legitimada ya por el voto soberano.

Buena parte de los medios de comunicación pasó de la sorpresa inicial a la aceptación y rápida normalización de las posiciones de un partido que, en nombre del rechazo a la "casta", cuestionaba la justicia social ("una aberración") y el Estado ("degenerado fiscal") o lanzaba furiosas descalificaciones y *fake news*. De la noche a la mañana, asistimos no solo a un cambio de agenda sino al desmoronamiento de ciertos "consensos democráticos" que –como argentinos crecidos en la posdictadura– creíamos más o menos sólidos, ya que eran parte de las políticas de Estado. No se trataba solo de un "cambio de tono", sino del corrimiento de lo políticamente posible, de la instalación de un nuevo umbral de lo decible y factible, que pronto contó con tribuna propia (periodistas y medios), así como con el apoyo entusiasta de otros sectores de derecha y centroderecha que fueron a abrazarse con los ganadores.

La agenda pública y política cambió de manera rápida y ostensible. La economía afectiva del capitalismo ultraneoliberal de Milei fue dando forma no solo a una dinámica política tóxica, cargada de intolerancia, exabruptos, burlas, mentiras e hipótesis conspirativas, sino que, a lo largo del primer año, el gobierno retomó todo lo que el manual de la extrema derecha viene produciendo a nivel global. Inclusive, en su segundo discurso en el Foro de Davos (enero de 2025), Milei se dio el lujo de exacerbar las diatribas contra el progresismo y, envuelto en un aura triunfalista, afirmó la existencia de una "alianza internacional":

> Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni; desde Bukele en El Salvador hasta Viktor Orbán en Hungría; desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en los Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad.[46]

A lo largo de su primer año de gestión, la ola libertaria reveló ser algo más que pura espuma. Como ya hemos visto, la "motosierra" apuntó contra la salud, la educación pública, los derechos sociales, la política de la memoria, la política ambiental, los jubilados, la política de género… La lista es interminable, el despojo de derechos también, todo en medio de un clima de revancha política y social, de represión institucional en las calles y frente a la erosión acelerada del Estado de derecho.

Milei redujo la inflación a través de un fuerte ajuste fiscal, al tiempo que va modelando un nuevo régimen de afectividad anclado en la defensa del economicismo a ultranza y en el desprecio por el pluralismo y los valores democráticos. Un proyecto político que debe ser entendido en términos más holísticos, ya que abarca también la

"batalla cultural" contra los progresismos, más allá de que por el momento no se sepa si esa batalla es importante o no para los que apoyan a Milei por fuera de su núcleo duro (Kessler y Vommaro, 2024). Pero el propósito del "modelo Milei" es unir ambos ejes, el económico neoliberal y el cultural antiprogresista. No en vano alguien como Agustín Laje, que viene realizando desde la derecha una fuerte cruzada antiprogresista, hoy preside la oficialista Fundación Faro y tiene un lugar importante en el ecosistema de los hermanos Milei.

Claro está, no venimos del mundo feliz peronista. El agotamiento del progresismo, ilustrado por el peronismo en su versión kirchnerista, es flagrante. Su falta de autocrítica, la ausencia de renovación de liderazgos y de respuesta política frente a lo que hoy sucede en la Argentina, marcan también una responsabilidad histórica difícil de evadir. Mencionaba en el capítulo 3, con la reflexión sobre la crisis de la narrativa de los progresismos, que entre 2009 y 2019 la gran vaca peronista deglutió a varias de las fuerzas progresistas existentes, con lo cual literalmente obturó la posibilidad de construcción de cualquier alternativa progresista por fuera del peronismo kirchnerista.

Así, son tres puntos los que quisiera subrayar en este apartado. Primero, las democracias no solo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria y este avanza sobre las instituciones y los derechos. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y la complicidad de una parte importante del arco político-partidario, que en el caso argentino involucra la radicalización de las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban parte del campo democrático y republicano. Esas fuerzas políticas que están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha son corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.

Segundo, la parábola vernácula de la gran vaca peronista puede ser útil para repensar el presente agónico argentino respecto de los progresismos y dar por clausurado el ciclo. Y luego apuntar a construir horizontes integradores desde una articulación política

respetuosa, pluralista y democrática. Dicho de otro modo: el cambio de época nos obliga a repensar los límites de los progresismos realmente existentes y de sus narrativas capitalistas-tecnocráticas y su expresión vernácula, el mandato exportador neodesarrollista. Debemos aprender de sus fracasos y derivas, de sus promesas de igualdad incumplidas. Se hace necesario afrontar esa zona de incomodidad, que nos pone de frente a la crisis de imaginarios políticos ligados al progresismo y a la necesidad de generar nuevos proyectos de sociedad democráticos, justos y sostenibles.

Tercero, la Argentina tiene un gran acumulado de luchas por la defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, indígenas, de las mujeres y las disidencias sexuales, que sobrepasa con largueza al progresismo dominante y sus límites. Además, el campo de lo social es mucho más amplio, polifónico y fluido que el campo especifícamente partidario. Dicho esto, nadie niega que no haya organizaciones de derechos humanos, sociales (desocupados y sectores campesinos) y feminismos que fueron incorporados en las diferentes fases del gobierno peronista. Pero hay que estar atentos a la tentación metonímica y no tomar la parte por el todo. Tampoco está dicho que todas esas experiencias que se mantuvieron por fuera del espacio progresista gubernamental fueran expresiones de un imaginario radical o una economía afectiva diferente. Pero numerosas son las experiencias que viven y se reproducen en el campo social bajo dinámicas moleculares de resistencia y cuentan con largas trayectorias que oscilan entre la latencia y la presencia masiva en las calles, que tejen redes e instancias de diálogo y articulación entre ellas y apuntan a construir horizontes de justicia social y sostenibilidad digna. Es contra ese músculo social, contra esa energía pluridimensional de las resistencias que apunta el gobierno libertario, no solo mediante la política económica de ajuste sino a través del disciplinamiento represivo, de la violencia contra la protesta social, de la política del miedo y de la deslegitimación.

3

Las experiencias locales basadas en narrativas relacionales y que apuntan a otros modos de producir y habitar el territorio son numerosas. Son experiencias innovadoras pero también vulnerables, acechadas constantemente por una economía afectiva capitalista que valida otros sentimientos, prácticas y valores. Se trata de iniciativas que desafían la vision hegemónica de la transición energética, sin ser experiencias tecnofóbicas o que rechacen la digitalización de la vida social. En realidad, plantean el control ciudadano a través de la pequeña escala, la adaptación a las necesidades de la población local y el respeto de los tiempos de la naturaleza y su necesaria regeneración. Por otro lado, el mayor problema u obstáculo de estas experiencias es la continuidad, pues requieren apoyo institucional y, sobre todo, un marco normativo y políticas públicas más democráticas que no desconozcan sus objetivos: a saber, la desmercantilización, el empoderamiento y la calificación, la visión holística –relación energía-agua-alimentos– la descentralización (autonomía local) y la satisfacción de necesidades locales. En fin, son experiencias que instalan una concepción más democrática de la energía, una visión de la transición energética arraigada a las necesidades locales.

En este libro opté por ilustrar algunas de ellas, ligadas al protagonismo femenino y también a proyectos de energía comunitaria. Bien podría haber ilustrado las narrativas contrahegemónicas a través de las ingentes experiencias de agroecología en la región latinoamericana, pero en función de los límites de este texto elegí poner el foco en algunos pocos ejemplos antes que proporcionar un mero listado de proyectos alternativos. Estas experiencias de reexistencia en un planeta dañado colocan en el centro la autoorganización y los cuidados, en términos plurales: cuidados del territorio, del cuerpo como territorio, de las vidas múltiples que alberga el mundo, de los múltiples mundos que condensa la vida misma. También, hacen referencia a otras dimensiones de los cuidados vinculadas con la reproducción de la

vida social: cuidados y educación, cuidados y salud, cuidados y trabajo, entre otros.

Estas experiencias nos recuerdan que hasta ahora hemos vivido al costado de las prácticas y valores que hacen a la sostenibilidad social y ambiental, aunque hoy percibamos que debemos colocar los cuidados y la empatía social y ambiental en el centro de nuestra acción. Si no las convertimos en clave de bóveda de nuestras construcciones colectivas, de poco nos servirán el sentimiento de injusticia y el saber científico. Estamos en un punto límite, ahí donde el cuerpo y las afecciones se debaten entre seguir aceptando la pulsión de muerte que hoy se nos instala como única certeza colectiva (el fin del mundo, antes que el fin del capitalismo), o romper la inercia en la que estamos inmersos, como anestesiados, para convertir la lucha y la esperanza de regeneración del tejido social en una alternativa colectiva.

La solidaridad que emerge en los territorios devastados o en peligro es conmovedora y de una gran potencia. En Valencia, España, cuando en noviembre de 2024 ocurrió la DANA, se generó una "pasarela de la solidaridad": miles de voluntarios no dudaron en calzarse las botas de lluvia y tomar escoba y pala para ayudar a limpiar las casas y calles de las zonas afectadas. En la Argentina, ante la gravedad y repetición de los incendios de nueva generación, cada vez son más los vecinos y vecinas que se preparan como brigadistas forestales comunitarios, dispuestos a entrar y salir del fuego, o integran la red logística en el marco de fuegos incontrolables que no solo arrasan vidas humanas y propiedades, sino millones de vidas no humanas y territorios completos, ya sea monte, humedal, sierra o bosque. Así, en medio del desastre, en distintas partes del mundo pudimos ver imágenes conmovedoras de ese estallido de solidaridad, cuya base no fue otra que el tejido asociativo previo existente en los barrios y localidades.

Dicho esto, la pregunta ineludible es cómo potenciar esas solidaridades y la empatía que se genera hacia el sufrimiento del otro, más allá de la pequeña escala, en un contexto donde este tejido social va a contramano de la economía afectiva que proponen las narrativas pancapitalistas del fin asociadas al neoliberalismo y las

extremas derechas. Tampoco hay que ser ingenuos: no podemos olvidar que el neoliberalismo exige que sea el individuo quien se autorregule, sin apoyo del Estado. Podría decirse que, en la medida en que la solidaridad tiende a privatizar la ayuda social y reemplaza al Estado ausente, se vuelve funcional al neoliberalismo. El caso de la Argentina es más que elocuente, como muestran los grandes incendios forestales –varios de ellos intencionales– tanto en Córdoba y Corrientes como en la Patagonia, donde, en medio de la desidia estatal y con presupuestos subejecutados, fueron las donaciones de la población las que posibilitaron la compra de equipamiento y víveres. Mientras tanto, en la Patagonia las fuerzas de seguridad persiguieron y encarcelaron a indígenas y brigadistas comunitarios, buscando un chivo expiatorio.

En realidad, la cuestión de la potencialidad de estas redes nacidas en situación de emergencia es una discusión abierta y no exenta de complejidades. Su funcionalidad con relación al régimen neoliberal es real, pero también relativa. Puede tener un efecto búmeran, pues podría suceder que estas redes de solidaridad y autoorganización impulsaran un proceso de acumulación de fuerzas sociales y comunitarias desde abajo. Experiencia tenemos. Cuando hacia fines de 1990 se hablaba en toda América Latina de autoorganización comunitaria, no pocos ponían el acento en que este tipo de prácticas eran promovidas por gobiernos neoliberales y organismos de financiamiento internacional. Nadie podrá negar, empero, que muchas de esas redes sociales y comunitarias emergentes fueron el inicio de algo nuevo y disruptivo; esto es, de potentes movimientos sociales de carácter antineoliberal, que a partir del año 2000 tuvieron un rol fundamental en la deslegitimación de los regímenes neoliberales y la apertura de un nuevo ciclo político.

En consecuencia, una conclusión que podemos plantear es que uno de los grandes desafíos en el contexto de la policrisis contemporánea es cómo hacer que las redes de solidaridad colectiva, junto con los movimientos sociales y comunitarios, den un salto de escala. Esto no se logra solamente por una vía racional, ni siquiera a través del conocimiento científico (que a veces asusta y paraliza), sino comenzando por la movilización en defensa de la vida,

que incluye no solo nuestra vida y la de nuestros vecinos, sino la de los seres no humanos –animales, bosques, fuentes de agua– que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida en clave de construcción colectiva a mayor escala, de interdependencia, de democracia plural y participativa y, por supuesto, de esperanza, nadie se salvará. Ni siquiera los superricos o los grandes empresarios que hoy contratan bomberos privados para salvar sus propiedades de los grandes incendios mientras continúan socavando las "condiciones de habitabilidad del planeta" (Latour y Schultz, 2023).

4

Durante la pandemia de covid-19 llegó a mis manos *El Ministerio del Futuro*, un libro de Kim Stanley Robinson (KSR), reconocido autor estadounidense de ciencia ficción. Allí se propuso un desafío mayor: imaginar un proceso de transformaciones del planeta y la sociedad ligado a la adaptación a la crisis climática y la transición socioecológica. Un relato nada lineal y muy potente, una novela que imagina escenarios de futuro donde conviven y confrontan de modo desigual la acción desde abajo y el poder desde arriba, pero terminan por triunfar la esperanza y el cambio. A través de casi setecientas páginas, en esta novela extraordinaria escrita en 2019 y publicada en 2020, KSR logra articular el tono justo y desplegar historias y argumentos para dar verosimilitud a un relato de transformación positiva que no termina en distopía –la descripción de un mundo indeseable, la antiutopía del fin–, a las cuales nos ha acostumbrado en los últimos tiempos el género de la "ficción climática". Ni distópica ni antipolítica; todo lo contrario, *El Ministerio del Futuro* es una obra profundamente utópica y política, que traza un horizonte hacia una transición justa y democrática.

En esta "novela de tesis" hay dos voces. Una es la de Frank May, víctima y sobreviviente del cambio climático, un extranjero que trabajaba como voluntario en una clínica en India cuando una ola de

calor (el fenómeno de bulbo húmedo) mató a más de 20 millones de indios. May deberá cargar con esa vivencia de la muerte colectiva y genocidio climático por el resto de sus días. La otra voz es femenina, la de la irlandesa Mary Murphy, directora del Ministerio del Futuro, con sede en Zúrich, creado en 2025 en el marco de la ONU y el Acuerdo de París, cuyo objetivo es defender a las futuras generaciones y proteger a los seres vivos. El Ministerio del Futuro es un organismo que propone cambios transformadores para salir de la crisis climática y ecológica, orientando e influyendo en las decisiones de los países más poderosos. Seguiremos la historia del Ministerio a lo largo de treinta años, período durante el cual veremos sucesos de diverso tipo. La transición es económica, social y política, y está marcada por cambios profundos en el transporte, la agricultura regenerativa y la resalvajización de regiones del planeta. La utilización de la geoingeniería es vista como un instrumento de transición –no como un fin en sí misma– para bajar la temperatura global (a través de la técnica de dispersión de partículas reflectantes en la atmósfera), y en la ficción que propone KSR es utilizada de modo unilateral, no por los países del Norte Global sino por un país afectado del Sur Global (India). Incluye también otras tecnologías, como la fijación de los glaciares a través del bombeo de agua líquida en sus bases. Si bien los Estados nacionales son impulsados por el Ministerio del Futuro, no obstante, tienen un rol destacado, al igual que los bancos centrales y en particular una moneda creada para financiar la descarbonización (el carboncoin, articulado en cadenas de bloques). Se expande el cooperativismo basado en el modelo Mondragón (participación de los trabajadores en la propiedad y gestión de las empresas) y se pone en marcha un sistema eficaz de incentivos y prohibiciones, e incluso de atentados (no controlados por el Ministerio del Futuro), que persuade a los ricos y a las grandes empresas de abandonar sus jets privados, sus actividades contaminantes y sus guaridas fiscales… Una novela atrapante que indaga el colapso para salir de él y traza una hoja de ruta verosímil para la transición, planteando un ejercicio de imaginación política radical.

En 2025, la aceleración de la policrisis con sus escenarios de guerra, de colapso climático, de desigualdades estalladas, de desprecio por el pluralismo democrático, de desarrollos incontrolados de la IA, acentuó la necesidad de experimentar políticamente con hipótesis de transición justa y democrática, mucho más ante el desquicio que introducen las derechas radicales con sus narrativas reaccionarias y pancapitalistas del fin. En esta línea, desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, venimos apostando por una transición ecosocial que, desde una perspectiva integradora y democrática, incorpore a los pueblos del Sur Global. En principio, somos un colectivo latinoamericano que ha puesto el acento en la geopolítica de las transiciones ecosociales. Eso implica leer las relaciones Norte-Sur, las espacialidades y los flujos marcados, en el largo plazo, por la relación del modelo histórico-colonial de despojo en América Latina con los países del Norte Global, a los cuales se suma China; y, en el mediano y corto plazo, por las apuestas hacia nuevos tipos de "falsas soluciones" impulsadas por Estados y corporaciones reconocidas por su papel destructivo en los territorios, tal como vimos en este libro.

Desde el Pacto Ecosocial entendemos que uno de los temas centrales que a menudo se pierde de vista en las discusiones climáticas entre el Norte y el Sur a nivel gubernamental es la deuda ecológica. Esta encuentra sus primeros orígenes con la expoliación colonial –la extracción de recursos minerales o la tala masiva de los bosques naturales, por ejemplo– y se proyecta tanto en el "intercambio ecológicamente desigual" como en la "ocupación gratuita del espacio ambiental" de los países empobrecidos por efecto del estilo de vida consumista de los países industrializados. Así,

> creemos, hay un lugar estratégico para profundizar el diálogo con las luchas y sectores críticos del Norte, tanto en lo que se refiere a una perspectiva global y sistémica del decrecimiento como a nuevas posibilidades de articulación internacionalista entre las luchas ecoterritoriales de

> diferentes latitudes. En definitiva, es necesario reactualizar, bajo las coordenadas contemporáneas, el importante eslogan "¿quién debe a quién?" (Svampa y otros, 2023).

Asimismo, desde mediados de 2023, formamos en la Argentina el Equipo Transiciones, un equipo de equipos, cuyo propósito es formular propuestas de transición ecosocial justa y popular en el escenario nacional. El Equipo Transiciones reúne un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluye unas once organizaciones y equipos de investigación y diferentes especialistas que integran redes de investigaciones y experiencias colectivas, entre economistas, ingenieros, sociólogos, abogados, politólogos, climatólogos y médicos. Si bien somos conscientes de que el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, entendemos que el agotamiento del progresismo y el ascenso de una extrema derecha ultraneoliberal y negacionista requiere de nuevos espacios de discusión colectiva. Necesitamos unir fuerzas para elaborar agendas comunes que nos permitan encontrar salidas a la policrisis civilizatoria que enfrentamos y producir otros imaginarios políticos, que nos conecten con el deseo y la motivación de una transición ecosocial justa y popular.

5

Antes de la pandemia, en 2018, el 50% de todas las emisiones de la aviación fue causado por el 1% de la población mundial. Mientras escribo estas conclusiones, en Nueva Orleans se lleva a cabo el Super Bowl, la final de fútbol americano de la National Football League (NFL), el evento del año en los Estados Unidos. Todavía no están los datos de 2025, pero en 2024 se hizo en Las Vegas y llegaron 882 jets privados a la ciudad. Hasta ahora, el récord de mayor cantidad de jets privados en un Super Bowl fue en 2022, con la final realizada en Glendale, Arizona, donde hubo 931 aviones. En

la Unión Europea, los jets privados causan entre 5 y 14 veces más emisiones de CO_2 por pasajero que un avión comercial medio y 50 veces más que los trenes (Greenpeace, 2023), y son una expresión de un mismo fenómeno: ahí donde la desigualdad social se transforma en desigualdad ambiental.

En medio de la pandemia de covid-19 se planteaba que, ante el incremento de las desigualdades sociales, seguramente en un período inmediatamente posterior se multiplicarían las protestas sociales en todo el mundo. Esto no solo ocurriría en los países históricamente desiguales, dependientes y periféricos, sino también en los países del Norte Global, donde la insatisfacción atraviesa numerosos sectores de clase media baja. Ante tal coyuntura, se percibían dos escenarios posibles. Un primer escenario donde la salida sería abordar los problemas de fondo y encarar una reforma social redistribucionista, lo cual implicaría tocar en serio los intereses de los superricos con una reforma tributaria progresiva amplia y profunda. Un segundo escenario preveía el endurecimiento del contexto represivo en ambas regiones del mundo. Pero lo que resultaba claro es que habría un movimiento de placas tectónicas, un gran descontento social, cuya válvula de escape estaba por verse.

La pospandemia mostró de modo contundente hasta qué punto las desigualdades o la "dueñidad" (UIMP, 2019) están fuera de control. En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023 (Oxfam, 2025). Mientras tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. Así, no deja de sorprender que en un mundo donde el 1% de los superricos acapara más del 50% de la riqueza generada, donde el 10% más rico produce la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pese a todos los privilegios y superganancias que obtienen, esto parecería no alcanzarles.

Dicho esto, cualquier propuesta de repensar la sociedad y la naturaleza en el marco de la policrisis tiene que comenzar por plantear la insostenibilidad de las desigualdades contemporáneas y poner límites claros a los consumos contaminantes y altos impuestos

a los superricos, sean del Norte o del Sur Global. Sin embargo, hoy sucede todo lo contrario. La alianza entre el club de los multimillonarios y la extrema derecha apunta a destruir la regulación estatal que favorece a los sectores más vulnerables en nombre de una supuesta libertad que solo beneficia a los mercados y promueve una mayor concentración del capital.

En esa línea, no hay otra opción que

> pensar en grandes procesos de redistribución donde evidentemente las economías centrales y los sectores más ricos deberán consumir menos materia y energía e importantes sectores de la población en las economías periféricas deberán consumir más energía, pero todos deben/debemos aceptar que será necesario consumir distinto (Equipo Transiciones, 2024).

Sin embargo, esto no significa que los países periféricos tengan "derecho al desarrollo", ya que el "desarrollo" o su visión predominante está basado en una insostenible lógica del crecimiento y un desconocimiento de las fronteras planetarias que hoy nos empuja al colapso ambiental y profundiza desigualdades de todo tipo. Por ende, si apostamos a un horizonte de transición justa y sostenible, tendremos que abandonar el "derecho al desarrollo" tal como lo entendemos hoy y reemplazarlo por la búsqueda de un modelo productivo que se adapte a las condiciones de habitabilidad del planeta. Llamémoslo el "derecho al Buen Vivir" o de otra manera, lo cierto es que este horizonte de cambio deberá articular justicia social y climática con sostenibilidad de la vida. Esto también implica avanzar en un contexto transformador que conlleve cambios en el metabolismo social, no solo en el patrón de extracción, producción y distribución de bienes y servicios, sino también en el consumo y la generación o el tratamiento de los desechos.

A contracorriente de lo que piensan conservadores, neoliberales y paleolibertarios, para generar modelos productivos que incorporen las fronteras planetarias y avancen en una fuerte reducción de las

desigualdades, necesitamos más Estado, no menos; pero tampoco cualquier Estado, sino un Estado ecosocial. Se hace necesario instrumentar políticas públicas con un Estado ecosocial que incorpore los riesgos sociales y ambientales, en el marco de una sociedad del cuidado, orientada a la sostenibilidad de la vida. Los elementos del Estado ecosocial, abordado en nuestro Equipo Transiciones por el economista Rubén Lo Vuolo, apuntan a una reorganización del aparato estatal y ponen en jaque las bases del Estado de bienestar –que por otro lado nunca se consolidaron en los países del Sur Global– y también las del Estado negacionista y extractivista que sí se ha venido consolidando. La crisis ecológica y climática introduce nuevos riesgos, ya no locales sino globales, capaces de producir daños irreversibles. Por otro lado, el viejo sistema del Estado de bienestar se basaba en la idea de crecimiento ilimitado, que ya no es posible debido a los límites ecológicos y biofísicos. Por eso, es imprescindible cambiar la lógica para pasar de un Estado que repara daños a un Estado capaz de prevenirlos. El verdadero planteo que corresponde, dentro de un Estado ecosocial, es buscar un mecanismo de protección social que sea lo más universal posible (Lo Vuolo, 2024).

En suma, esto implicaría realizar reformas amplias, que apunten al corazón de las desigualdades existentes y de los riesgos ecológicos; que confronten con la doble injusticia –social y ambiental– de esta nueva realidad; que implementen desde el ingreso universal y la reforma tributaria progresiva, el reparto del trabajo, la creación de nuevos oficios y empleos verdes, hasta políticas de adaptación a los riesgos ambientales y un sistema nacional de cuidados que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida.

Asimismo, la policrisis civilizatoria implica un gran desafío con relación al mundo del trabajo y de la producción, pues este hace necesario el desarrollo de actividades productivas y reproductivas intensivas que impulsen la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos para la sobrevivencia, la adaptación y la transición, como la promoción de la salud, la educación, los cuidados y el transporte, la ciencia, la agroecología, el reciclaje y la economía

circular, la construcción sostenible, las energías renovables y la remediación ambiental (Anigstein, 2024).

Por ello, otra de las conclusiones de este libro es que la construcción de una agenda pública sobre las coordenadas de una transición ecosocial democrática, justa y popular es siempre una tarea colectiva. Parte de un llamado urgente al diálogo e intercambio con una diversidad de actores y organizaciones democráticas: sindicatos, sectores de la economía social y popular, cooperativas, movimientos sociales, colectivos ecoterritoriales, indígenas, feminismos y diversidades, científicos e intelectuales, campo de la cultura y referentes sociales y políticos.

* * *

Es necesario conectar las experiencias alternativas que se dan a pequeña escala, ligadas a movimientos sociales y proyectos comunitarios, así como las redes de solidaridad social que se expanden en medio de los desastres ambientales, con proyectos radicales de transformación tanto a escala nacional como global. Lo local es absolutamente necesario para activar las luchas y la esperanza, para generar redes de empatía social y ambiental, pero el gran desafío es avanzar un paso más y asumir el riesgo de pensar la conexión de las agendas en las múltiples escalas –global, regional, nacional– para contrarrestar el alcance desesperanzador y planetario de la distopía y la pulsión de muerte que atraviesa a las derechas autoritarias.

Es el momento de avanzar en la construcción de nuevas propuestas de cambio que aborden el contexto de crisis entrelazadas que vivimos: crisis climática, aumento de las desigualdades, crisis energética, expansión de las extremas derechas, destrucción de la democracia, crisis de los cuidados, peligros de nuevas pandemias, consolidación del patriarcado y del belicismo. Ha llegado el momento de encontrar nuevos lenguajes, que potencien valores de solidaridad positiva. Es el momento propicio para que movimientos y

articulaciones políticas abran espacio a narrativas tentaculares en torno a los derechos, ancladas en diferentes experiencias sociales y con propuestas multidimensionales en el plano de la justicia. Como dice el pensador brasileño A. Krenak, citado en el epígrafe: "Nosotros podemos habitar este planeta, pero deberá ser de otra manera". Imposible mirar para otro lado.

Por último, para poder romper con la ceguera política y ecológica de gran parte del establishment y alentar otros regímenes de afectividad y una ética social y ambiental basada en las condiciones de habitabilidad de nuestra Tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política de modo de incluir la libertad y el respeto por la diversidad de la vida, la interdependencia y la cooperación social, la empatía social y ambiental. Es fundamental entender que si bien el planeta está dañado y las desigualdades se han profundizado, la historia no está clausurada. Y es necesario luchar con esperanza y reconectar nuestra indignación con las prácticas de solidaridad que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, de la democracia. Estas son las vías para la construcción de "una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma", como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz en su fascinante *Manifiesto ecológico político*.

Comprender que la salida es colectiva y no individual, que no es solo técnica sino profundamente política, es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos e interdependientes, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida.

---

[45] Ver <n9.cl/as14al>.
[46] Ver <n9.cl/7v9eb>.

Agradecimientos

Mi agradecimiento especial es para todos aquellos compañeros y compañeras de diversos espacios colectivos con quienes venimos apostando a la reflexión crítica y la *praxis* transformadora, como el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, el Equipo Transiciones, la Colectiva Socioambiental Mirá, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Agradezco tambien al CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), mi sede institucional, y por supuesto al Conicet, mi espacio de trabajo por décadas, sin cuyo soporte mi carrera como investigadora y formadora de investigadores y equipos dentro del sistema público y universitario argentino jamás habría sido posible. Este libro también es un reconocimiento a todas las instituciones públicas educativas argentinas que están siendo atacadas y desvalorizadas por el gobierno actual.

Agradezco a la Fundación Humboldt, de Alemania, pues este libro contó con el apoyo del Premio Forster, que me fuera otorgado por esa institución en 2023. Esto se extiende a la Universidad de Kassel, mi contraparte académica en aquel país.

Pablo Stefanoni, amigo y conocedor de las derechas radicales, fue el primer lector de este libro. Agradezco también las valiosas devoluciones y sugerencias de Ana Galdeano, mi editora en Siglo XXI.

Bibliografía

Acción Ecológica (2021), "Balsa en Ecuador #4: Tala, siembra y tráfico de madera en el norte de Esmeraldas", 4 de abril, <n9.cl/sulc0k>.

Acosta, A. (2012), "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición", *Ecoportal*, 25 de julio.
— (2024), "El retorno de los brujos… neoliberales", *Rebelión*, 4 de enero.

Acosta, A. y E. Viale (2024), *La naturaleza sí tiene derechos*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Aliaga, C. e I. Orti (2025), "Una mirada desde la ecología política feminista a la deuda ecológica: escenarios postextractivistas, anticoloniales y antipatriarcales", Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Bogotá.

Amigos de la Tierra (2019), "Energía comunitaria: ¿y si hacemos que pase?", 21 de noviembre, <n9.cl/ixiyp>.

Amnistía Internacional (2024), "Derechos en Argentina: 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", diciembre de 2024, <n9.cl/mbjq0u>.

Anders, G. (2025), *El tiempo del fin*, Madrid, Alma Negra.

Anigstein, C. (2024), "Trabajadores y trabajadoras en el Estado ecosocial", Equipo Transiciones, <aadeaa.org/trabajo-transicion-ecosocial/>.

Antonelli, M. (2009), "Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la minería responsable y el desarrollo sustentable", en M. Svampa y M. Antonelli, *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Biblos.

Antúnez, C. (2024), "*Cowboys* del carbono: el arriesgado juego del señor Greene en el 'todo vale' en la Amazonía brasileña", *Mongabay*, 26 de junio.

Araújo, E. (2019), "Sequestrar e perverter", *Blog Metapolítica*, 12 de octubre.

Arendt, H. (1978), *Los orígenes del totalitarismo*, Barcelona, Alianza.

Barrera Hernández, A. (2023), "En las entrañas del huracán", *La Jornada*, 29 de octubre.

BBC Mundo (2018), "Huracán María en Puerto Rico: por qué el número de víctimas pasó de 64 a casi 3000 muertos", 29 de agosto.

Benza, G. y G. Kessler (2021), *La ¿nueva? estructura social de América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Bertinat, P. (2016), "Transición Energética Justa. Pensando la democratización energética", *Análisis*, 1, <n9.cl/7rqhi>.

Bertinat, P. y M. Argento (2022), "Perspectivas sobre energía y transición", en M. Svampa y P. Bertinat (comps.), *La transición energética en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

BFM Business (2023), "Diplomatie des métaux: les enjeux du 1er sommet international sur les métaux critiques à Paris", 28 de septiembre.

Black, S., I. Parry y N. Vernon (2023), "Los subsidios a los combustibles fósiles se disparan hasta alcanzar un monto

histórico de USD 7 billones", IMF Blog, 25 de agosto, <n9.cl/3hscd>.

Blaser, M. (2009), "La ontología política de un programa de caza sustentable", *Red de Antropologías del Mundo*, 4, pp. 81-107.

Bordera, J. y A. Turiel (2023), "¿El final de las estaciones?", *CTXT*, 5 de noviembre.

Bousso, R. (2023), "Las grandes petroleras duplican sus ganancias en 2022", *Euro News*, 8 de febrero.

Bresser-Pereira, L. (2010), *Globalización y competencia*, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana.

Bringel, B. (2024), *Movimientos sociales y política en Brasil. Origen y ocaso de la nueva república*, Buenos Aires, Clacso.

Bringel, B. y J. M. Domingues (2018), *Brasil. Cambio de era: crisis, protestas y ciclos políticos*, Madrid, Catarata.

Bringel, B. y M. Svampa (2023), "Del 'consenso de los *commodities*' al 'consenso de la descarbonización'", *Nueva Sociedad*, 306.

Brown, M., F. Figueroa, H. Fingerhut y L. Sanders (2024), "Jóvenes negros e hispanos votaron por Trump por economía y empleo. Aquí el cómo y por qué", *Los Angeles Times*, 11 de noviembre.

Brum, E. (2024), "¿Te das cuenta de que te están matando?", *Sumauna*, 2 de septiembre, <n9.cl/m0x5b>.

Cabnal, L. (2016), "Las niñas no se tocan", *DW*, 26 de octubre.

Campbell, B. (2016), *The Great Transition. Climate, Disease and Society in the 13th and 14th Centuries*, Cambridge, Cambridge University Press.

Camus, R. (2013), *Le grand remplacement*, París, Reinharc.

Cantamutto, F. y G. Peinado (2024), "La deuda ecológica y monetaria en el centro del debate para una transición ecosocial en Argentina", Equipo Transiciones, <aadeaa.org/deuda-ecologica/>.

Cantamutto, F., M. Schorr y A. Wainer (2024), *Con exportar más no alcanza*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Censat-Agua Viva (2022), "Adjuntas Pueblo Solar. Exhibición virtual de experiencias de transición justa", <n9.cl/4yck3>.

Cepal (2024), "Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe", Santiago de Chile, Cepal-ONU.

Chequín, N. y E. Viale (2024), "Río Paraná o hidrovía?", *elDiarioAR*, 23 de julio.

Clacso (2023), *Transiciones Justas. Una agenda de cambios para Latinoamerica y el Caribe*, Buenos Aires, Clacso-Oxfam.

Coraggio, J. L. (2010), "A modo de conclusión: algunos criterios para pensar las diferencias entre la economía de mercado y la economía social", en R. Cittadini, L. Caballero, M. Moricz y F. Mainella (comps.), *Economía social y agricultura familiar. Hacia la construcción de nuevos paradigmas de intervención*, Buenos Aires, INTA.

Cunha, G., L. Roizman, N. Lobo, S. L. de S. Moreira y T. Moreno (2021), "Democratización de la energía y transición justa en América Latina y el Caribe", CSA-ITUC-Redes-Amigos de la Tierra, <n9.cl/fnexf>.

Da Empoli, G. (2020), *Los ingenieros del caos*, Madrid, Oberón.

Democracy Now (2019), "Ecofascismo: Naomi Klein advierte que el vínculo entre la extrema derecha y los supremacistas blancos está relacionado con la crisis climática", 17 de septiembre.

Descola, P. (2005), *Más allá de naturaleza y cultura*, Buenos Aires, Amorrortu.

DFI y Oxfam (2020), "Combatir la desigualdad en tiempos de coronavirus", <n9.cl/hd6d5>.

Diamond, J. (2006), *Colapso. Cómo las sociedades deciden su desaparición o su sobrevivencia*, Barcelona, Debate.

Dro, A. (2022), "Desde Rojava hasta Guatemala: diálogo con Tzk'at Red de Sanadoras Ancestrales", *La Tinta*, 25 de octubre.

Elorza, M., M. Bertelli y Vrba, M. (2023), "VOX y su discurso retardista: así intenta frenar la acción climática", *Climática*, 29 de diciembre.

Equipo Transiciones (2024), Lineamientos para una transición ecosocial en Argentina, en <n9.cl/5zj2q>.

Escobar, A. (2014), *Sentipensar con la tierra. Nueve lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*, Bogotá, Unaula.

Escobar, A., M. Osterweil y K. Sharma (2024), *Relacionalidad. Una política emergente de la vida más allá de lo humano*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Feliz, M. y E. López (2012), *Proyecto neodesarrollista en Argentina: ¿modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?*, Buenos Aires, El Colectivo.

Fernández Durán, R. (2011), "La quiebra del capitalismo global: 2000-2030", Ecologistas en Acción, <n9.cl/vj8ea4>.

Ferrari, L. (2023), "La falacia del crecimiento verde", en C. Tornel y P. Montaño (comps.), *Navegar el colapso. Una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático*, México, Bajo Tierra.

Fischer, M. (2016), *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?*, Buenos Aires, Caja Negra.

Flakin, N. (2023), "Europa. El surgimiento de una 'izquierda' conservadora y antiimigrantes en Alemania", *La Izquierda*

Diario, 31 de octubre.

Food & Water Action Europe, "Europa, presa del *fracking*", abril de 2024, <n9.cl/gcr4q2>.

Fornillo, B. y M. Argento (2025), *Todo sobre el litio*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Fraser, N. (2017), "El final del neoliberalismo progresista", *Sin Permiso*, 12 de enero.

Fresco, P. (2024), *Energy fakes. Mitos y bulos sobre la transición energética*, Madrid, Barlin Libros.

Gago, V. (2014), *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Gardel, L. (2023), "Javier Milei: el calentamiento global es una mentira", *Chequeado*, 20 de diciembre.

Gardel, L. y R. Marina (2025), "Temporal en Bahía Blanca: los 4 factores que explican la magnitud del desastre", *Chequeado*, 18 de marzo.

Ghiotto, L., L. Barcena y B. Muller (2024), "La estrategia comercial de la Unión Europea para acceder a las materias primas críticas", Opsur, 6 de febrero, <n9.cl/fwvbk>.

Gilligan, C. (2013), "La ética del cuidado", *Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas*, 30.

Giraldo, O. e I. Toro (2020), *Afectividad ambiental. Sensibilidad, empatía y estéticas de habitar*, Veracruz, Universidad Veracruzana.

Global Witness (2024), "Voces silenciadas", <n9.cl/kf5th>.

Glucroft, W. (2023), "Israel y 'la razón de Estado' alemana", *DW*, 15 de octubre.

González, J. L. (2023), *El loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la vida política argentina*, Buenos Aires,

Planeta.

Greenpeace (2023), "Greenpeace lanza un informe sobre contaminación por jets privados en Europa", 30 de marzo, <n9.cl/8pejj>.

Gudynas, E. (2009), "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo", en AA. VV., *Extractivismo, política y sociedad*, Quito, CAAP-Claes.

Gutiérrez, B. (2024), "El negacionismo climático pierde fuerza en Brasil tras las devastadoras inundaciones en el sur del país", *elDiarioAR*, 23 de mayo.

Hamouchene, H. (2024), *Desmantelar el colonialismo verde: energía y justicia climática en la región árabe*, Buenos Aires, Clacso.

Haraway, D. (2017), "Las historias de Camille. Los niños del compost", *Nómadas*, 47, pp. 13-45

Harvey, D. (2004), "El 'nuevo' imperialismo. Acumulación por desposesión", *Socialist Register*, <n9.cl/voe9h>.

Hierro, L. (2022), "Hasta diez horas al día sin luz en Sudáfrica en su peor crisis energética desde 2019", *El País*, 1 de julio.

Hughes, E. (2024), "El estado brasileño de Río Grande del Sur enfrenta problemas económicos tras inundaciones", *AP News*, 3 de mayo.

Hund, K. L., D. Arrobas, T. P. Fabregas Masllovet, T. J. Laing y J. R. Drexhage (2023), *Minerals for Climate Action. The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*, Washington DC, Banco Mundial.

Hunter, R. (2021), "El libertarianismo es la filosofía de los ricos", *Jacobin*, 6 de septiembre.

Illouz, E. (2023), *La vida emocional del populismo*, Buenos Aires, Katz.

Infobae (2024), "Ecuador aumenta los cortes de energía hasta 14 horas diarias y Noboa reconoció que el país está sumido en el caos", 23 de septiembre.

— (2025), "Tras el ajuste, se perdieron 185.000 empleos formales en el primer año de Milei", 7 de febrero.

Kessler, G. y G. Vommaro (2024), "Milei construyó su núcleo duro?", *Le Monde Diplomatique*, 306.

Klein, N. (2021), *En llamas*, Madrid, Paidós.

Koch, A., C. Brierley, M. Maslin y S. Lewis (2019), "Earth System Impacts of the European Arrival and Great Dying in the Americas After 1492", *Science Reviews*, 207.

Krenak, A. (2023), "Sueños para postergar el fin del mundo", en *La vida no es útil*, Buenos Aires, Eterna Cadencia.

Kusnetz, N. y K. Surma (2024), "En Honduras, los libertarios y las demandas judiciales podrían quebrar el país", *Inside Climate News*, 7 de octubre.

La Capital (2024), "Milei calificó a los empresarios de EE.UU. como 'héroes de la historia'", 6 de mayo.

La Nación (2024), "Javier Milei definió como 'héroes' a las personas que fugaron dólares: 'Escaparon de las garras del Estado'", 20 de abril.

— (2025), "La Argentina fue uno de los países donde más se deterioró la libertad de prensa en el último año, alerta Reporteros sin Fronteras", 2 de mayo.

La Tinta (2020), "Tejernos en conciencia para sanar la vida", 21 de septiembre.

La Vanguardia (2024), "La lista de libros censurados en los Estados Unidos no es una propuesta de Trump", 27 de noviembre.

Laclau, E. (2005), *La razón populista*, Buenos Aires, FCE.

Lamb W., G. Mattioli, S. Levi y otros (2020), "Discourses of Climate Delay", *Global Sustainability*, 3, e17.

Lander, E. (2019), "La sostenibilidad de la vida puesta en jaque por el gran capital. Estrategias de la industria de combustibles fósiles y capitales asociados para manipular las políticas ambientales y la opinión pública", en K. Gabbert y M. Lang, *Cómo se sostiene la vida en América Latina*, Quito, Fundación Rosa Luxemburgo-Abya Yala.

Lang, M. (2024) "¿Paz con la naturaleza? La COP16 de Cali y la defensa de la biodiversidad", *Nueva Sociedad*, octubre, <n9.cl/6882v>.

Lang, M., B. Bringel y M. Manahan (2023), *Mas allá del colonialismo verde. Justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales*, Buenos Aires, Clacso.

Latour, B. (2022), *Nunca fuimos modernos*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Latour, B. y N. Schultz (2023), *Manifiesto ecológico político*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Lavecchia, G. (2024), "El titular del Conicet rechazó el cambio climático y abogó por una 'ciencia basada en evidencias y no ideologías'", *Tiempo Argentino*, 13 de agosto.

Leiva, M. (2023), "Sequía histórica en la Argentina: qué dicen los datos disponibles", *Chequeado*, 9 de mayo.

Lo Vuolo, R. (2024), "Lineamientos para una transición hacia un Estado eco-social en Argentina", Equipo Transiciones, <n9.cl/hdgcx>.

Louault, F. (2020), "La política ambiental del gobierno de Bolsonaro", *Les Études du CERI*, 245-246, pp. 16-24.

Machado Aráoz, H. (2014), *Potosí, el origen*, Buenos Aires, Mardulce.

Malm, A. (2024), *Piel blanca, combustible negro. Los peligros del fascismo fósil*, Madrid, Capitán Swing.

Mann, G. y J. Wainwright (2018), *Leviatán climático. Una teoría sobre nuestro futuro planetario*, Santiago de Chile, Biblioteca Nueva.

Masera, O. (2023), "Emisiones netas cero (*net zero*)", en C. Tornel y P. Montaño (comps.), *Navegar el colapso. Una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático*, México, Bajo Tierra.

Massol-Deyá, A. (2020), "Autosuficiencia energética como paso hacia la descolonización de Puerto Rico", en Y. Suliveres y P. Morán (eds.), *Descolonizar la paz. Entramado de saberes, resistencias y posibilidades*, San Juan, Unesco.

Maza, A. (2024), "El gobierno confirmó la probabilidad de cortes masivos de luz en verano y apuntó a la crisis heredada en el sistema", *Infobae*, 19 de julio.

Merchant, C. (2023 [1985]), *La muerte de la naturaleza*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Mihai, M. y C. Ungureanu (2024), "Rumania, una extrema derecha ecologista, cristiana y 'anticolonial'", *Nueva Sociedad*, noviembre, <n9.cl/ncq6b>.

Modonesi, M. (2018), "México: el gobierno progresista 'tardío'", *Nueva Sociedad*, 276.

Montoya, A. y V. Nouvet (2024), "Prospera, une étrange enclave libertarienne totalement privée au Honduras", *Le Monde*, 18 de agosto.

Mudde, C. (2021), *La ultraderecha hoy*, Barcelona, Paidós.

Muzio, C. (2024), "'Bajó la pobreza': el dato engañoso que celebró Javier Milei", *Letra P*, 20 de diciembre.

Nieva, M. (2024), *Ciencia ficción capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del mundo*, Buenos Aires, Anagrama.

Nunez, R. (2024), *Bolsonarismo y extremas derechas*, Buenos Aires, Tinta Limón.

ONU Mujeres y Cepal (2020), "Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación", Santiago de Chile, Cepal.

Oreskes, N. y E. Conway (2017), *The Collapse of Western Civilization. A View from the Future*, Nueva York, Columbia University Press.
— (2018), *Los mercaderes de la duda*, Madrid, Capitán Swing.

Oxfam (2016), "Desterrados. Tierra, poder y desigualdad en América Latina", <n9.cl/fxxwk>.
— (2021), "El virus de la desigualdad. Unir un mundo desgarrado por el coronavirus a través de una economía justa, equitativa y sostenible", 25 de enero.
— (2025), "El saqueo continúa. Pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo", 20 de enero, <n9.cl/8k0jm>.

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (2022), "Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina", <n9.cl/pnt0n>.
— (2023), "Manifiesto de los Pueblos del Sur. Por una transición energética justa y popular", <n9.cl/mbsyk>.

Página/12 (2023), "Litio, petróleo y agua dulce: Estados Unidos ni disimula sus intereses en América latina", 24 de enero.

— (2024), "Censura en el INTA: prohíben hablar de 'cambio climático', 'agroecología' y 'sustentabilidad'", 15 de julio.

— (2025), "Con Milei, 12.000 empresas menos", 2 de enero.

Papuccio de Vidal, S. (2020), "La experiencia del Colectivo de Mujeres de La Verdecita en Argentina", *Leisa*, 36(1), pp. 39-40.

Pereyra, S., C. Smulovitz y M. Armelino (2024), *Por qué leer a Juan Carlos Torre*, Buenos Aires, Edhasa.

Pitron, G. (2021), "El impacto de los metales raros. Profundizando en la transición energética", *Green European Journal*, 5 de febrero.

Pnuma (2019), "Informe sobre la brecha de emisiones 2019", Nairobi, Unep, <n9.cl/wyyuc>.

Prensa Latina (2024), "Vuelven los apagones en Ecuador", 29 de marzo.

Rabí, V., F. Pino y F. Fontecilla (2021), *Transición Justa en Latinoamérica. De la Transición a la Transformación*, Santiago, Ceres-CEUS Chile-FIMA.

Ribeiro, S. (2023), "Geoingeniería: propuestas e impactos", en C. Tornel y P. Montaño (comps.), *Navegar el colapso. Una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático*, México, Bajo Tierra.

Ricœur, P. (1999), *Historia y narratividad*, Barcelona, Paidós.

Roa Avendaño, T. y E. Carrillo Rodríguez (2024), "Energy Revolution. A community-Based Approach to Socio-Ecological Transformation", Transnational Institute, <n9.cl/stymf>.

Rockstrom, J. (2024), "Planet Earth Is in Critical Condition. These Are the Steps the World Must Take to Change That", *Time*, 2 de octubre.

Rodríguez, H. (2023), "Lynn Margulis, la bióloga que reinterpretó la evolución", *National Geographic*, 10 de marzo.

— (2025), "Megaincendios: así son los incendios de sexta generación", *National Geographic*, 9 de enero.

Rodríguez Navarro, G. (2024), *Análisis de experiencia. Escuelita por la Justicia Climática Feminista*, publicación interna para la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, 2021-2023, Bolivia.

Ruiz-Serna, D. y C. Del Cairo (2022), *Humanos, más que humanos y no humanos. Intersecciones críticas en torno a la antropología y las ontologías*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.

Rushkoff, D. (2023), *La supervivencia de los más ricos*, Madrid, Capitán Swing.

Saccone, V. (2024), "Brasil: la tragedia anunciada de Río Grande del Sur", *France 24*, 8 de mayo.

Saferstein, E. (2024), "Entre libros y redes: la 'batalla cultural' de las derechas radicalizadas", en P. Semán (comp.), *Está entre nosotros*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Saferstein, E. y A. Goldentul (2022), "La batalla cultural de las nuevas derechas", *Anfibia*, 23 de mayo.

Saguier, M. y G. Peinado (2014), "Minería transnacional y desarrollo en el kirchnerismo", Flacso-Isa Joint International Conference Global and Regional Powers in a Changing World, Buenos Aires, 23 al 25 de julio.

Salama, P. (2012), *Les économies emergentes latino-américaines. Entre cigales et fourmis*, París, Armand Colin.
— (2015), "¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión", *Nueva Sociedad*, 258.

Saldaña, E. (2020), "¿Qué es la democracia iliberal?", *El Orden Mundial*, 12 de mayo.

Samaniego, J. y E. Robaina (2023), "Los datos que confirman que no son energéticas: son empresas fósiles", *Climática*, 13 de mayo.

Sánchez Contreras J. y A. Matarán Ruiz (comps., 2023), *Colonialismo energético. Territorios de sacrificio para la transición energética*, Barcelona, Ícara.

Santana, E. (2019), "Ecofascismo y terrorismo antimexicano", *Nexos*, 16 de agosto.

Santolini, F. (2024), *Ecofascisti. Estrema destra e ambiente*, Milán, Einaudi.

Schuster, M. (2023), "¿Qué es y cómo opera el negacionismo? Entrevista a Donatella Di Cesare", *Nueva Sociedad*, mayo, <n9.cl/2z5ww>.

Segato, R. (2021), *Contra-pedagogías de la crueldad*, Buenos Aires, Prometeo.

Semán, P. (comp., 2024), *Está entre nosotros*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Semán, P. y N. Welschinger (2023), "Once tesis sobre Milei", *Anfibia*, 18 de marzo.

Servigne, P. y R. Stevens (2015), *Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des generations presentes*, París, Seuil.

Sevillano, E. e I. Fariza (2022), "Alemania inaugura una nueva era sin gas de Rusia", *El País*, 17 de diciembre.

Slobodian, Q. (2024), *El capitalismo de la fragmentación. El radicalismo de mercado y el sueño de un mundo sin democracia*, Madrid, Planeta.

Snyder, T. (2017), *Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Soler, J. P. y A. Rankin (2021), "Energías comunitarias para la transición justa", *Gestión y Ambiente*, 24, supl. 2, pp. 252-266.

Sosa, M. e I. Smith (2022), "Informalidad y precariedad en Argentina", Centro de Estudios Metropolitanos, informe de coyuntura 21.

Stanley Robinson, K. (2020), *El Ministerio del Futuro*, Madrid, Minotauro.

Stefanoni, P. (2021), *¿La rebeldía se volvió de derecha?*, Buenos Aires, Siglo XXI.
— (2022), "Defender el derecho a la protesta… también en Cuba", *elDiarioAR*, 3 de julio.

— (2025), "La contrarrevolución cultural de Milei", *elDiarioAR*, 29 de enero.

Sticco, D. (2025), "Radiografía del empleo: ganadores y perdedores en la era Milei, por edad, género y nivel educativo", *Infobae*, 3 de enero.

Subelza, R. (2024), "Mujeres de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía lideran la gestión integral del agua", Fundación Acción Cultural Loyola, 6 de julio, <n9.cl/nf3go>.

Svampa, M. (2011), "Extractivismo neodesarrollista y giro ecoterritorial. ¿Hacia la construcción de una alternativa?", en AA. VV., *Más allá del desarrollo*, Quito, Fundación Rosa Luxemburgo.
— (2013), "Consenso de los *commodities* y lenguajes de valoración en América Latina", *Nueva Sociedad*, 244.
— (2016), *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia, populismo*, Buenos Aires, Edhasa.
— (2017), *Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo, movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Edhasa.

— (2020), "Lo que las derechas traen a la región latinoamericana. Entre lo político y lo social: nuevos campos de disputa", en A. Chaguaceda y L. Gottberg, *La derecha como autoritarismo en el siglo XXI*, México, Fundación Cadal.
— (2021), "Feminismos ecoterritoriales en América Latina. Entre la violencia patriarcal y extractivista y la interconexión con la naturaleza", *Documento de Trabajo*, 59, Fundación Carolina, <n9.cl/rzf2j>.
— (2023), "Dilemas de la transición ecosocial desde América Latina", *Documento de Trabajo*, número especial, Fundación Carolina-Oxfam Intermón, <n9.cl/a73gd>.

Svampa, M. y A. Slipak (2024), "La Chine et son röle hegemonique en Amerique Latine et Argentine", *Alternatives Sud*, 31.

Svampa, M. y E. Viale (2020), *El colapso ecológico ya llegó*, Buenos Aires, Siglo XXI.
— (2023), "De la ceguera ecológica a la indignación colectiva", *elDiarioAR*, 14 de marzo.
— (2024), "Confesiones de invierno. Pacto del saqueo y cacería de ambientalistas", *elDiarioAR*, 11 de julio.

Svampa, M. y P. Bertinat (comps., 2022), *La transición energética en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Svampa, M., B. Bringel, L. Buitrago, A. Acosta y E. Viale (2024), "Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina", en AA. VV., *Manifiestos. Contrapuntos éticos, políticos, feministas y ecosociales*, Buenos Aires, Clacso-Ateliê de Humanidades.

Swissinfo (2025), "La venta de vehículos eléctricos e híbridos en China crece un 40,7% en 2024", 9 de enero.

Tainter, J. (1988), *The Collapse of the Complex Societies*, Cambridge, Cambridge University Press.

Téllez, A. (2020), "Panorama de la situación energética en América Latina", Fundación Heinrich Böll, 15 de abril, <n9.cl/cdw6b>.

Terán Mantovani, E. (2024), "Venezuela, un régimen cívico militar. Entrevista", *Sin Permiso*, 8 de septiembre.

Tokatlian, J. (2024), *Consejos no solicitados sobre política internacional*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Tooze, A. (2022), "Definir la policrisis: de la imagen a la matrix", *Sin Permiso*, 26 de junio.

Tornel, C. y P. Montaño (comps., 2023), *Navegar el colapso. Una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático*, México, Bajo Tierra.

Traverso, E. (2018), *Las nuevas caras de la derecha*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Tsing, A. (2023), *Los hongos del fin del mundo. Sobre la posibilidad de la vida en las ruinas capitalistas*, Buenos Aires, Caja Negra.

UIMP (2019), "El mundo de hoy es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío", 26 de agosto, <n9.cl/zk3szv>.

Urbán, M. (2024), *Trumpismos neoliberales y autoritarios*, Barcelona, Verso.

Vaca, C. (2024), "Tras masiva protesta del campo, el gobierno alemán retrocedió en su ajuste fiscal al sector", *Agro Verdad*, 5 de enero.

Varesi, G. (comp., 2016), *Hegemonía y lucha política en Gramsci*, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.

Vázquez, M. (2024), "Los picantes del liberalismo. Jóvenes militantes de Milei y 'nuevas derechas'", en P. Semán (comp.), *Está entre nosotros*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Viale, E. y S. Nemenmann (2025), "Incendios y negacionismo ecológico", *elDiarioAR*, 6 de enero.

Viveiros de Castro, E. (2008), *La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Viveiros de Castro, E. y D. Danowsky (2014), "L'arret du monde", en VV. AA*., L'univers clos au monde infini. Textes reunís par Emilie Hache*, París, Dehors.

Wolf, Z. (2025), "Elon Musk Wants to Save Western Civilization from Empathy", *CNN*, 5 de marzo.

Xinhua Español (2024), "China publica libro blanco sobre transición energética", 29 de agosto, <n9.cl/lrwgk>.

Zamorano, M. (2023), "Vox: la cultura y el estigma como trincheras", *CTXT*, 2 de agosto.